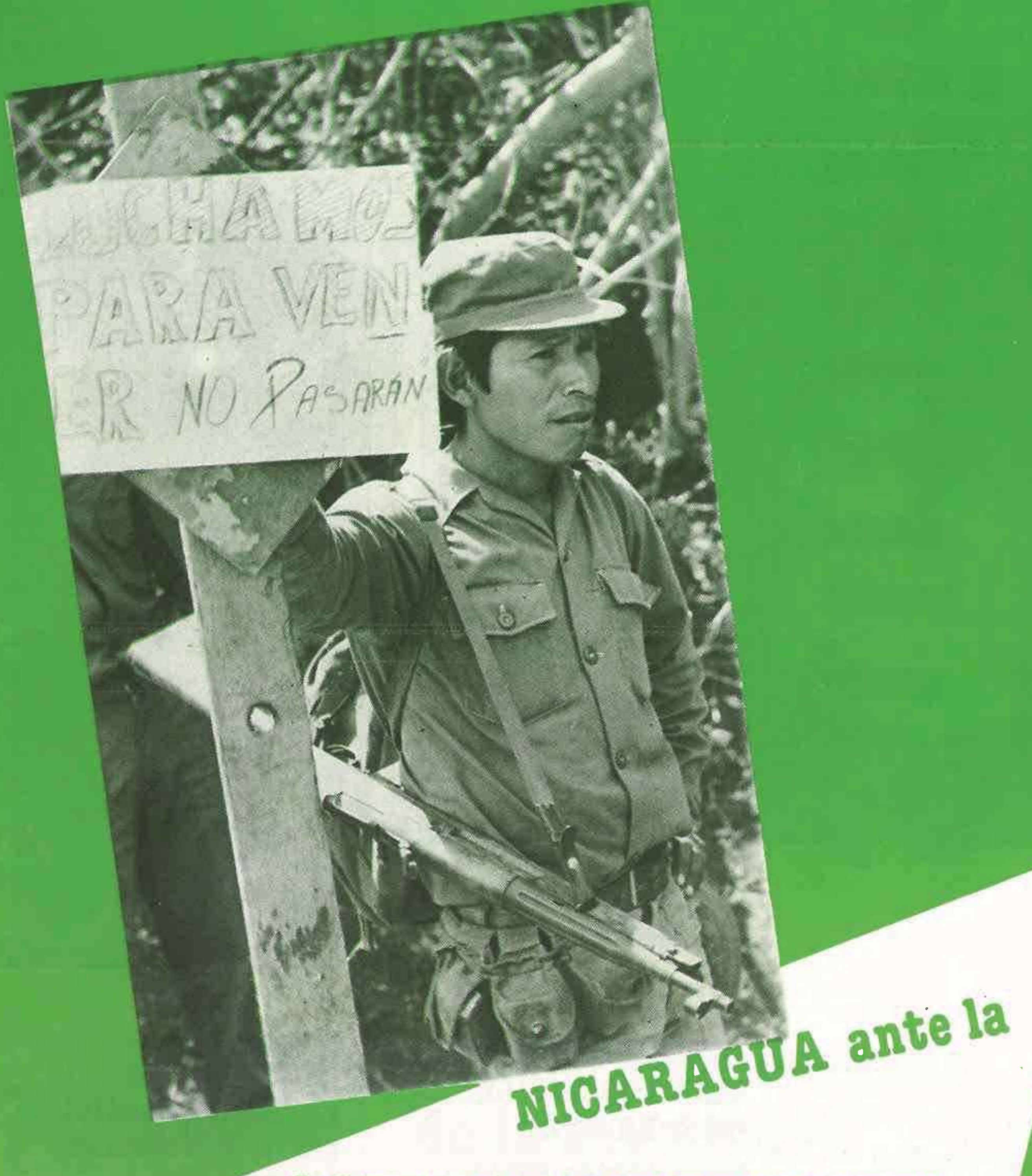
mensual/julio 1983
nueva serie/número 33

inprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press

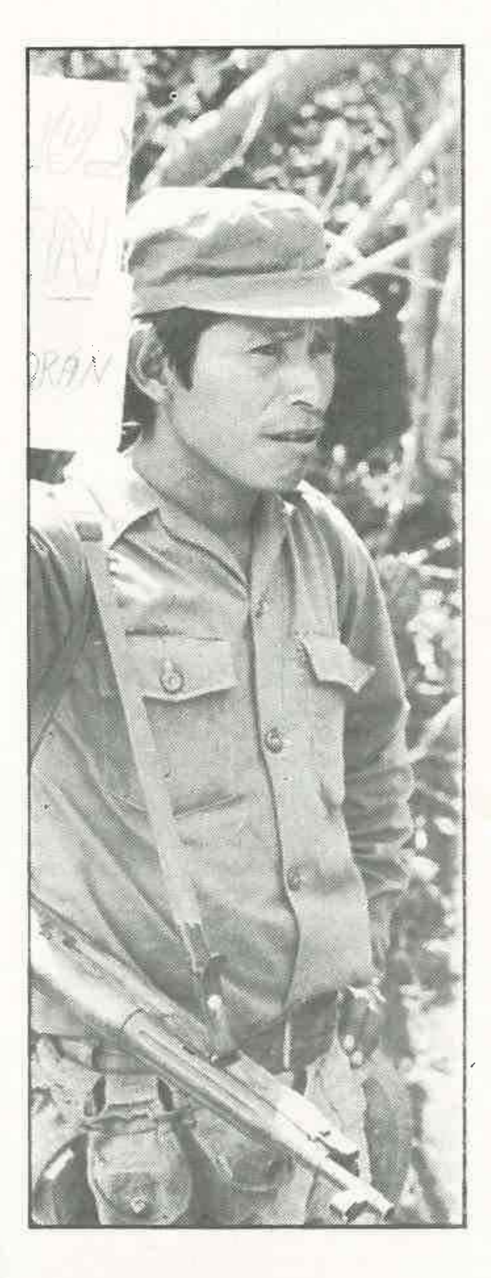


NICARAGUA ante la AGRESION IMPERIALISTA

Sumario

Edita:
Liga Comunista Revolucionaria
(IV Internacional)

apdo. de Correos, 50.370
(Cibeles) Madrid
Imprime Ratlles. Mallorca, 206
Barcelona Dep. Leg. 40029/79



Argentina

De la derrota de las Malvinas a la "transición negociada"

Pág. 10



Polonia

Debates en Solidaridad y nuevas formas de lucha

Pág. 13



1979-1983

La revolución iraní, cuatro años después de la revolución de febrero

Pág. 20



NO A LA MILITARIZACION, NO A LOS MISILES, NO A LA OTAN

RONALD Reagan ya tiene en sus manos un arsenal de armas nucleares cuyo potencial mortífero equivale a casi un millón de Hiroshimas. Y continúa aumentándolo: entre 1980 y 1983, el presupuesto militar norteamericano ha aumentado un 12% anual, en términos reales, pasando de 142.000 a 257.000 millones de dólares. Esta demencial carrera hacia la masacre pone al desnudo la realidad del imperialismo, disimulada tras los hipócritas discursos en torno a los derechos humanos.

Esta realidad es la escalada de militarización y de armamentos nucleares. Es la movilización general de los recursos económicos, de los cerebros y de las tecnologías al servicio de una empresa de destrucción. La bomba de neutrones encarna por sí sola el espíritu del capitalismo en putrefacción, que se las ingenia para destruir a las personas protegiendo los bienes: lo que demuestra que el derecho a la propiedad termina prevaleciendo siempre, en este sistema, sobre los verdaderos derechos humanos.

DECLARACION DEL SECRETARIADO UNIFICADO DE LA IV INTERNACIONAL

Esta realidad no son únicamente los Hiroshimas potenciales almacenados en los silos, los submarinos o los bombarderos nucleares, sino también los Hiroshimas silenciosos de la miseria y del hambre provocados por el pillaje de los países coloniales y semicoloniales: 40.000 niños mueren todos los días en estos países, en su mayoría por desnutrición.

Esta realidad son los programas de austeridad, que golpean cada vez más duramente a los trabajadores de los países capitalistas mismos, mientras que sus gobiernos gastan cada vez más dinero en armas. En Francia, el gobierno, compuesto por ministros socialistas y comunistas, prepara la puesta a punto de la bomba de neutrones y acaba de decretar, para los próximos cinco años, un programa militar de 120.000 millones de dólares, en el mismo instante en que ataca los aumentos salariales, el sistema de seguridad social y el nivel de empleo. La consigna "Puestos de trabajo, no bombas", que se ha propagado en las grandes movilizaciones antinucleares, ilustra y condensa el vínculo necesario entre la lucha contra la carrera de armamentos y la lucha contra las políticas de austeridad capitalistas.

Esta realidad, ante todo, no es solamente la amenaza de apocalipsis nuclear, es también la guerra de agresión lanzada ya por el imperialismo contra las luchas de liberación de los pueblos oprimidos. En estos momentos, los Estados Unidos y la CIA están directamente implicados en la agresión armada perpetrada contra la Nicaragua revolucionaria y en el apoyo a los dictadores de Guatemala y de El Salvador. El régimen salvadoreño es culpable de 50.000 asesinatos en tres años, es decir, el equivalente de medio millón de muertos para po-

blaciones como la de Francia, Alemania o Inglaterra... Más allá de El Salvador, Nicaragua y Granada, también amenazada, es la revolución cubana la que está en el punto de mira del imperialismo yanki. En Oriente Medio, gracias a la asistencia material y política norteamericana, el dirigente israelí Menájem Beguin pudo lanzar la invasión del Líbano, en un intento de aniquilar la resistencia palestina.

El alboroto montado en torno a las propuestas de Ronald Reagan o de Margaret Thatcher, el gran juego diplomático en torno a las negociaciones de Ginebra sobre la limitación de armas nucleares, no pueden ahogar el ruido de estas intervenciones y de estas guerras.

La verdadera raíz de la carrera de armamentos

En la raíz de la carrera de armamentos se encuentra, por tanto, la crisis económica del sistema capitalista y el mantenimiento del orden imperialista frente a las luchas de los trabajadores y a las explosiones inevitables de los pueblos oprimidos condenados al desespero. El argumento que a menudo se aduce, de la pretendida superioridad militar soviética, y la pretendida amenaza que implica para el mundo que se proclama "libre", no son más que pretextos para justificar la escalada militarista.

Como lo reconocen incluso algunos expertos norteamericanos, resulta que:

—los Estados Unidos aún disponen de un número de cabezas nucleares superior al de la Unión Soviética;

—la mayoría aplastante de los misiles soviéticos están basados en tierra y por tanto son susceptibles de ser destruidos por los misiles norteamericanos, mientras que tres cuartas partes de la fuerza nuclear estratégica norteamericana están formadas por armas transportadas por submarinos o bombarderos inaccesibles a los SS-20 soviéticos; además, los misiles de crucero (Cruise) norteamericanos hacen que una parte importante del sistema defensivo soviético quede caduco;

—la diferencia entre el porcentaje del producto interior bruto destinado a los gastos de armamento en los EE.UU. y en la URSS, que los imperialistas utilizan a menudo como argumento, no tiene ningún sentido. Si bien los gastos norteamericanos declarados son del 7% y los gastos soviéticos estimados de alrededor del 10%, el producto interior norteamericano es el doble del producto interior soviético. Por consiguiente, en términos reales los gastos militares imperialistas son superiores a los de la URSS. Este esfuerzo pesa gravemente sobre la URSS, hasta tal punto que contribuye a agravar sus problemas económicos y alimenticios. Por lo demás, las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz (SIPRI) estimaban en 1980 que la OTAN era responsable del 43% de los gastos mundiales en armamento frente al 26% del Pacto de Varsovia.

El imperialismo es el principal factor de guerra y la primera amenaza para la paz.

Solidaridad con el movimiento pacifista de Europa del Este

Por su parte, la política militar de la burocracia en el poder en la URSS y en los países del Este tiene una dimensión reaccionaria, que se inscribe en la prolongación de su política interior e internacional:

—una política internacional basada, no en el internacionalismo militante, en la solidaridad entre los trabajadores y los pueblos del mundo entero, sino en los pactos y acuerdos de coexistencia o de reparto del mundo con el imperialismo;

—una política interior no basada en la movilización democrática de las masas, sino en la negación de sus derechos políticos, sindicales o nacionales más elementales, como ilustran las intervenciones soviéticas en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, así como el golpe de Jaruzelski contra los trabajadores polacos en 1981.

De ahí que nos solidaricemos con corrientes que se han manifestado contra la carrera de armamentos en Alemania del Este y, aunque de forma más limitada, en otros países del Este. El desarrollo de estas corrientes estimularía enormemente al movimiento antiguerra en Europa occidental y asestaría al imperialismo un golpe mil veces más duro que algunos misiles soviéticos de más. Al exigir un control público y democrático sobre la política militar y extranjera, un movimiento antiguerra de masas independiente de los Estados en Europa del Este tendría inevitablemente una dimensión antiburocrática.

Sólo la movilización puede hacer retroceder a los belicistas

La lucha contra la carrera hacia la guerra es asunto de todas y de todos, de los trabajadores condenados a la austeridad y al paro, de las mujeres condenadas a la explotación y a la opresión, de los jóvenes condenados al paro y al encuadramiento militar. Es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de diplomáticos o dejar que lo resuelvan entre gobernantes en el secreto de las negociaciones en la cumbre. Sólo la movilización puede hacer retroceder a los belicistas.

En 1982 y en la primavera de 1983, millones de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, se movilizaron en toda Europa contra el despliegue de los misiles, como en Gran Bretaña, en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Italia, en Dinamarca; por el rechazo de la OTAN o el desmantelamiento de sus bases, como en el Estado español, en Grecia, etc.

En Europa occidental es factible el acuerdo más amplio y unitario contra el despliegue de los misiles nucleares previsto para finales de este año:

—De Comiso (Sicilia) a Greenham Common (Gran Bretaña), no al despliegue de los misiles Pershing y Cruise.

—Fuera las bases de la OTAN. Desmantelamiento de las bases avanzadas norteamericanas en Europa. Abajo la dictadura que convierte a Turquía en una fortaleza a sueldo del imperialismo en la región.

—No a las fuerzas nucleares francesa y británica, que forman parte del dispositivo militar imperialista.

—Por una Europa desnuclearizada, desde Polonia hasta Portugal, desde Sicilia hasta Escandinavia.

—Reducción masiva de los presupuestos militares, nacionalización completa y reconversión de las industrias de armamento: puestos de trabajo, no bombas.

—Apoyo a los derechos democráticos de los soldados reclutados por el ejército burgués y de los trabajadores víctimas de las leyes de excepción en torno a la contratación y la afiliación sindical en las industrias de armamento.

—Alto a la intervención imperialista en América Central.

Desarme unilateral del imperialismo

La amenaza de guerra nuclear comporta para la humanidad un peligro sin precedentes. Ni las protestas y ni la perpetuación del equilibrio del terror constituyen una garantía contra el desencadenamiento de esta guerra.

Mientras los gobiernos imperialistas tengan en sus manos sus mortíferos instrumentos, subsistirá el peligro nuclear.

La única manera de evitar la guerra consiste en desarmar a los belicistas derribando al capitalismo en sus propias ciudadelas. Esta es la tarea y el deber de los trabajadores en estos países.

La Cuarta Internacional y sus secciones forman parte de la batalla contra el militarismo y la austeridad. En toda Europa debe alzarse una voz unida para decir no al despliegue de los misiles y a los gastos militares, para decir no a las secuelas de la crisis (paro, disminución de salarios y de los gastos sociales, agitación racista de la derecha). En cada ocasión importante, esta voz debe hacerse oir. En el próximo otoño, la movilización que se ha desarrollado en diversos países debería dar un nuevo paso adelante en su coordinación, acordando convocar una gran manifestación europea.

Las secciones europeas de la Cuarta Internacional contribuirán con todas sus fuerzas a impulsar este combate.□

El imperialismo norteamericano acentúa su presión militar en América Central. El incremento de la ayuda militar estadounidense a la dictadura salvadoreña (86 millones de dólares en 1983) no ha dado resultados decisivos en el campo de batalla. La guerrilla del frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) sigue mostrando una importante capacidad para tomar iniciativas militares, y la administración Reagan se desliza hacia una intervención aún más resuelta junto a las dictaduras centroamericanas.

En abril de 1982, el presidente Ronald Reagan y sus principales consejeros habían aprobado, a este respecto, un programa de actividades destinado a evitar "la proliferación de Estados calcados del modelo cubano" en América Central. La prensa norteamericana ha publicado extractos de un documento del Consejo Nacional de Seguridad, que resume las decisiones de dicha reunión.

Según este texto, los responsables norteamericanos han llegado a la conclusión de que los Estados Unidos tienen *"un interés vital en no permitir la proliferación de Estados calcados del modelo cubano, que serían plataformas para la subversión, amenazando el acceso a las vías marítimas y ejerciendo una amenaza militar directa contra nuestras fronteras o cerca de ellas".*

Los elementos fundamentales de este programa consisten en impedir que el Gobierno nicaragüense "exporte la revolución" a El Salvador, y en apoyar a los elementos pro-yankis en El Salvador y Guatemala. Así, el* Internacional Herald Tribune *del 3 de abril de 1983 informa que *"el Consejo ha expresado su aprobación al golpe de Estado militar que derribó a un Gobierno elegido en Guatemala".* ***Según el memorándum de la Administración Reagan, el golpe de Estado del general Rios Montt ha ofrecido efectivamente a los Estados Unidos*** *"nuevas posibilidades que mejoran las relaciones con este país". "Los responsables norteamericanos discutieron también sobre la necesidad de realizar esfuerzos concertados para incrementar las fricciones entre los grupos guerrilleros y quienes les apoyan"* ***en El Salvador.***

El eje del programa lo constituyen las acciones clandestinas de presión sobre el gobierno de Nicaragua, y el documento precisa efectivamente que el Gobierno nicaragüense se encuentra *"bajo una presión creciente gracias a nuestros esfuerzos clandestinos".* ***Paralelamente se propone ejercer una presión económica y pública sobre Cuba, que prevé utilizar*** *"la comunidad cubana internacional como portadora del mensaje" y "estrechar el bloqueo económico".*

Daniel JEBRAC

NICARAGUA

La trayectoria de la revolución sandinista frente a la escalada imperialista

EN el momento actual, Ronald Reagan ha iniciado una agresión casi abierta contra Nicaragua. Son numerosos los testimonios que ilustran el papel de los consejeros norteamericanos en la organización de las operaciones militares llevadas a cabo por los antiguos guardias somocistas a partir de la frontera hondureña. La reciente revelación de que próximamente se instalará en Honduras una estación de radar norteamericana, capaz de controlar el tráfico aéreo de toda la región, ha aportado un nuevo elemento de calibre al expediente sobre la intervención norteamericana en América Central.

La Administración Reagan parece tener poco tiempo. En El Salvador, el éxito relativo que podía representar para Washington la celebración de las elecciones de marzo de 1982 se vió neutralizado en gran parte por el peso de la extrema derecha en la Asamblea surgida de dichos comicios. Las divisiones en el seno del Gobierno y en el Ejército se han incrementado. Por consiguiente, la crisis de dirección burguesa de la dictadura sigue intacta.

Los Estados Unidos temen incluso cada vez más una descomposición posible del Ejército del régimen salvadoreño, a imagen y semejanza de lo que sucedió con la guardia somocista nicaragüense en 1979. Asimismo, las elecciones presidenciales previstas para finales de año sólo podrían lograr su objetivo de reestructurar la dirección dictatorial y mejorar la imagen internacional del régimen salvadoreño si coinciden con una clara transformación de la situación militar a favor de las Fuerzas Armadas de la dictadura.

Es en parte con esta perspectiva que los Estados Unidos necesitan hoy internacionalizar aún más su intervención en la región. Golpeando a Nicaragua, pretenden eliminar la mismísima fuente de ayuda militar del FMNL salvadoreño, aislando así a la revolución salvadoreña para combatirla mejor. Pero si el imperialismo norteamericano trata de crear las mejores condiciones posibles para inflingir serios reveses militares a las fuerzas del FMLN antes de las elecciones de finales de 1983, su objetivo consiste también en asestar golpes severos a la revolución nicaragüense.

La escalada militar imperialista

La presión militar impuesta por los Estados Unidos sobre Nicaragua, a través de los aliados somocistas, pretende contribuir, imponiendo un esfuerzo de gastos militares extremadamente costosos, a frenar la reconstrucción económica del país. Si bien no puede pasar inmediatamente a acciones destinadas al derrocamiento puro y simple del poder sandinista, el imperialismo norteamericano está interesado en que la legitimidad del gobierno de Managua se vea seriamente contestada y comprometida. Esta obra de desestabilización imperialista no retrocede evidentemente ante ningún medio, y lógicamente los Estados Unidos recurren a los contrincantes más resueltos de la revolución sandinista, los antiguos guardias somocistas establecidos en Honduras.

De ahí que las incursiones militares lanzadas estas últimas semanas desde Honduras, las declaraciones del estado mayor contrarrevolucionario del Frente Democrático Nicaragüense (FDN), en las que pretende haber establecido posiciones militares en tres de los 14 departamentos del país, y los proyectos aún nebulosos de proclamar un Gobierno provisional, no deban tomarse a la ligera. Si se alcanzan estos objetivos, proporcionarían —a falta de una victoria total— nuevas cartas para el juego imperialista, y preciosas contrapartidas para una negociación generalizada en la región. Porque el imperialismo yanki no descarta necesariamente la perspectiva de "negociaciones", sobre la base de una relación de fuerzas militar que le sea más favorable.

En este sentido, cabe decir que el imperialismo norteamericano sigue tratando de crear las condiciones para una discusión política global sobre la región, cuya necesidad ya había sido evocada el 21 de febrero de 1982 por el presidente mexicano López Portillo, en su Llamamiento de Managua. Propuso entonces un plan de paz global, destinado a resolver, *"por canales separados pero convergentes"*, tres tipos de conflictos: el de Nicaragua, el de El Salvador, y el de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba... Parece evidente que esta posición puede enturbiar, en el plano diplomático, la

iniciativa militar norteamericana en América Central. Pero al mismo tiempo trata, más a largo plazo, de situar a gobiernos como los de México, España o incluso Francia, en una posición que les convierta en posibles mediadores para una eventual negociación.

Sin embargo, en lo inmediato, tales declaraciones contribuyen, en el terreno diplomático, a aislar la política de agresión norteamericana, y este proceso se vió confirmado sobre todo después de la Guerra de las Malvinas, en la primavera de 1982. La Nicaragua sandinista fue elegida como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Países como Venezuela o Colombia, que figuraban entre los mejores aliados de los EE.UU. en la región, han cambiado un poco su política. Con motivo de una reunión en la cumbre celebrada en la isla panameña de Contadora, en enero de este año, México, Colombia, Venezuela y Panamá adoptaron una posición común que reclama que los conflictos norteamericanos se disocien del enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión soviética, para ser objeto de una solución negociada.

Durante el debate celebrado en el Consejo de seguridad de la ONU sobre la invasión de los comandos somocistas en Nicaragua, algunos aliados de los Estados Unidos, como los Países Bajos, Pakistán o España, llegaron incluso a poner en tela de juicio la versión norteamericana de los hechos.

Unicamente Honduras y El Salvador —que no son miembros del Consejo de Seguridad— manifestaron su apoyo incondicional a la política de los EE.UU. Sectores cada vez más importantes de la población de los Estados Unidos se oponen también al deslizamiento progresivo de la política de Ronald Reagan hacia una intervención directa en América Central. En el seno mismo de la burguesía norteamericana y del Congreso se alzan voces contra los riesgos de una guerra regional y contra la orientación política y militar actual de la Administración Reagan.

Esta última llega incluso a molestar un poco a determinados aliados del imperialismo estadounidense. Alvaro Jerez, portavoz de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE), organización antisandinista nicaragüense compuesta por elementos de la antigua burguesía anti-somocista, replegados en Costa Rica, declaraba recientemente a este respecto que *"si la Administración Reagan quiere democratizar Nicaragua y pacificar la región, no es ésta la mejor manera de hacerlo"*. Este sector teme que las operaciones militares tramadas por Washington desemboquen en definitiva en un refuerzo de la legitimidad interior e internacional del régimen revolucionario sandinista, poniendo al desnudo el papel directo del imperialismo y de los nostálgicos del somocismo en la agresión contra Nicaragua.

La trayectoria de la revolución sandinista

Estas maniobras militares imperialistas comportan, en efecto, el riesgo, para los Estados Unidos, de precipitar una nueva radicalización anti-imperialista en Nicaragua, de hacer totalmente irreversible la ruptura ya profunda entre el poder sandinista y lo que queda de la burguesía local, de minar definitivamente el frágil equilibrio de la "economía mixta" a través de las nuevas sanciones contra el sector privado, sospechoso de colaborar con la agresión.

Hasta el momento, en efecto, los dirigentes sandinistas han afirmado siempre su respeto del pluralismo político y su adhesión a lo que ellos mismos han denominado el sistema de "economía mixta". Sin embargo, a este respecto, el conflicto que opone a la burguesía y sus aliados contra el poder revolucionario, desde el derrocamiento de Somoza, se ha traducido en una evolución de la relación de fuerzas a favor del segundo.

Por supuesto, el pluralismo político sigue en vigor, en la medida en que existen varias formaciones políticas legales al margen del Frente Sandinista, en que existe un auténtico pluralismo sindical, en el que se publican diversos órganos de prensa.

Pero los elementos representativos de la burguesía no han dejado de desvincularse del poder. En la primavera de 1980, Alfonso Robelo y Violeta Chamorro abandonaron la Junta de Gobierno, constituída inmediatamente después del derrocamiento de Somoza, para protestar contra la composición del Consejo de Estado, que le asegura una mayoría absoluta a la corriente sandinista.

Arturo Cruz, que los había relevado, junto con otros, en el seno de la Junta de Gobierno, dimitió a su vez para protestar contra su falta de poder real. Nombrado embajador en los Estados Unidos, acabó desertando definitivamente. El presidente del Banco Central, Alfredo César, después de haber renegociado la deuda exterior del país, tomó el camino del exilio en mayo de 1982.

En diciembre, fue el sucesor de Cruz, como embajador en Washington, el que rompió a su vez con el régimen, so pretexto de que le censuraron una entrevista en la que tomaba postura a favor de la suspensión del estado de emergencia decretado en septiembre de 1981, y a favor de la convocatoria de elecciones libres. Finalmente, Edén Pastora, viceministro del Ejército Sandinista, considerado como próximo a la Internacional Socialista, pasó a la oposición en la primavera de 1982, para fundar en Costa Rica, junto con Alfonso Robelo, la Alianza Revolucionaria Democrática.

Actualmente, es la jerarquía eclesiástica, dirigida por el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, la que intenta ocupar el vacío dejado por el exilio de los principales representantes burgueses y actúa como catalizador de la oposición interna a la revolución sandinista. Lo que implica el riesgo de que surjan diferenciaciones sociales y políticas entre los fieles, como demostró el viaje del Papa a Managua.

En cuanto a la "economía mixta", ha evolucionado hacia un mayor control de la economía por el poder sandinista. Si bien es cierto que el sector privado sigue siendo muy mayoritario, tanto en la industria como en la agricultura, cada vez está más sometido a un control casi total del crédito y del comercio exterior por parte del gobierno. Además, si el sector público sólo representa entre el 20 y el 30% de la actividad agrícola, está estrechamente vinculado a un sector cooperativo que se desarrolla constantemente. Sin embargo, la gran agricultura privada sigue siendo significativa en el sector clave del algodón. En la industria, las sucesivas expropiaciones han hecho que el sector público alcance el 40% de la producción. La burguesía nicaragüense ha perdido lo esencial de su poder de decisión económica.

Ante cada prueba de fuerzas con los sectores de la burguesía, la dirección sandinista ha actuado en el mismo sentido. Ha jugado con dos barajas, encarcelando por ejemplo a altos responsables de la patronal (COSEP), en otoño de 1981, y poniéndoles después en libertad, en la primavera de 1982, para negociar. Pero los enfrentamientos y los periodos de tensión han tenido siempre un desenlace que va en el mismo sentido: un compromiso en el terreno económico, pero una afirmación creciente de la autoridad política y de la hegemonía del FSLN.

Los dirigentes sandinistas, por lo demás, han sido muy claros en lo que respecta a esta cuestión. Durante el conflicto de marzo de 1980, con Alfonso Robelo y Violeta Chamorro, anunciaron abiertamente que las elecciones sólo tendrían lugar después de la consolidación de la revolución. Al designar ella misma a los sucesores de Robelo y Chamorro en la Junta de Gobierno, la dirección del Frente Sandinista indicó claramente que su propia legitimidad se sitúa por encima de la del gobierno.

Tras la defección de Edén Pastora, la dirección nacional del FSLN publicaba de nuevo una declaración nada ambigua: *"Juramos no cambiar nuestro himno, seguir siendo solidarios con los pueblos oprimidos en lucha, continuar ejerciendo nuestro derecho soberano, armarnos para defendernos, no devolver los bienes confiscados, no devolver a los latifundistas las tierras recuperadas por nuestros campesinos que las trabajan actualmente, no poner término al*

castigo de los contrarrevolucionarios y de sus cómplices, no devolver nunca los bancos a sus antiguos propietarios, proseguir con nuestros programas de educación, de sanidad y de vivienda para el pueblo trabajador; juramos que esta revolución popular sandinista, la de los obreros, los campesinos, los trabajadores y los pobres, jamás será traicionada, y que los que nos amenazan y nos agreden no pasarán''.

Quince días después, en su discurso del 1º de Mayo, el comandante Tomás Borge insistía en el mismo tema: *''Hay trabajadores que creen que el enemigo principal de la clase obrera sigue siendo la burguesía. Pero la burguesía como clase, en este país, está mortalmente herida. Y nunca los moribundos fueron los peores enemigos. El enemigo principal de la clase obrera es la división de la clase obrera. (...) Nuestro pueblo, el pueblo trabajador, sabe en qué dirección vamos; por eso pregunto a los obreros y campesinos que se han reunido masivamente aquí: ¿A dónde vamos? ¡Hacia el socialismo!''*

La constante necesidad de asegurar la autodefensa de la revolución frente al imperialismo afecta gravemente a la situación económica del país, impone nuevos sacrificios a los trabajadores y a los campesinos, que ya han sufrido la guerra civil, pero al mismo tiempo impone una profundización de la revolución.

Hacia una radicalización

En efecto, la lucha contra las actividades contrarrevolucionarias tramadas en torno a la frontera hondureña o a la de Costa Rica, desvía gran parte de los recursos financieros obtenidos por el sector nacionalizado. Hay que mantener un ejército de cerca de 40.000 personas y asumir el coste de la movilización de la milicia, sin contar la ausencia de producción debida al hecho de que una parte de la mano de obra es desviada de la producción a las tareas de defensa. Según las cifras oficiales, la milicia participó en 70 acciones militares en 1982.

Por su parte, la burguesía, o lo que queda de ella, juega a la política pesimista. El propio Banco Mundial estima que la inversión privada, que representaba el 80% de la inversión total bajo Somoza, ascendía tan sólo al 10% a comienzos de 1982.

El analfabetismo ha disminuído de forma bastante espectacular. La mortalidad infantil también. El sistema de sanidad asegura la asistencia médica y odontológica, gratuitamente, a quienes la necesitan. El consumo alimenticio global ha aumentado en un 40% con respecto a la época de Somoza, si bien la distribución es defectuosa. Una encuesta de 1982, realizada en Managua, no registra ninguna mejora significativa de la alimentación de los pobres. Las inundaciones y la sequía de 1982 dañaron gravemente las cosechas.

La caída de los precios de determinadas materias primas ha asestado un severo golpe a la economía. El padre Xavier Gorostiaga, director del Instituto Económico de Nicaragua, declaraba recientemente a un periodista norteamericano: *''El problema no es tanto el volumen de la producción como su valor. Hace dos años, el azúcar se vendía a 24 centavos la libra. Actualmente está a 9 centavos. En 1982 puede que hayamos perdido 140 millones de dólares por el simple hecho del deterioro de los términos de intercambio, lo que ha reducido la renta total de nuestras exportaciones y ha frenado nuestro proceso de reformas''.*

Otro factor, el endeudamiento internacional, que rebasa los 2.500 millones de dólares, sigue aumentando. En 1981, el servicio de la deuda (pago de intereses y devolución) absorbía ya el 28% de las rentas de la exportación, y las grandes facturas empezarán a vencer en 1985, en virtud de los acuerdos de aplazamiento de la deuda.

Para tratar de estrangular la revolución aún más, los Estados Unidos, al tiempo que acentúa su presión militar, se proponen reducir su cuota de importación del azúcar nicaragüense. Esto es, en efecto, lo que ha reclamado el Consejo Nacional de Seguridad, so pretexto de que la cuota de Nicaragua representa el 2,1% del total de las importaciones de azúcar, mientras que el del ''fiel aliado'' de los EE.UU. que es Honduras, sólo es del 1%.

Un portavoz de la embajada nicaragüense en los Estados Unidos declaró inmediatamente que la reducción de la cuota constituiría un ataque económico destinado a ''asesinar la revolución nicaragüense'' y que representaría una pérdida anual de millones de dólares para la economía del país.

La producción industrial, heredera de una estructura de producción arcáica y no adaptada a las necesidades sociales, ha descendido, según las cifras oficiales, en un 5,6% en 1982, frente a un descenso del 26% en 1979, un aumento del 13% en 1980 y del 2,8% en 1981. Sin embargo, tras este descenso global existe una diferencia entre el sector público (Area de Propiedad Pública, APP), que ha crecido en un 4,1%, mientras que el sector privado, que representa dos tercios de la producción industrial, ha descendido en un 11,7%.

Esta situación no puede perpetuarse. Los enfrentamientos militares pueden precipitar el desenlace final. En enero, el comercio al por mayor de productos básicos como el aceite, la harina o el jabón, fue nacionalizado. También en enero, una movilización excepcional de 100.000 trabajadores permitió salvar la cosecha del café, que maduró prematuramente, y alcanzar una producción récord de 140.000 quintales. En febrero se elaboró, con la participación de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), una ley sobre la vivienda. Esta ley prevé la distribución de 67.000 viviendas a sus inquilinos, y sólo establece la indemnización a sus antiguos propietarios en casos excepcionales (por ejemplo, si son ellos mismos los que ocupan la vivienda).

No obstante, la agresión militar contra Nicaragua, si bien puede desmoralizar a sectores poco combativos de la población, tiene globalmente el efecto contrario. Estimula una reacción de autodefensa de la revolución y de sus conquistas. Un reportero norteamericano lo refleja en estos términos: *''La guerra y las medidas de austeridad no provocan aquí un amplio descontento. De hecho, la guerra parece estimular la unidad nacional. Los nicaragüenses parecen comprender mejor que el año pasado, en gran medida, lo que hacen sus dirigentes sandinistas... Actualmente, muchos parecen comprender que es la intervención norteamericana la que hace que empeoren las cosas en el país. Esto hace que la penuria de productos sea relativamente menos dura de soportar''.*

La oposición burguesa y el debate sobre los partidos

En cuanto a la oposición nicaragüense, el desencadenamiento de la escalada militar contrarrevolucionaria comporta una polarización hacia la derecha. Los ex-guardias somocistas, que no son otra cosa, en última instancia, que los matones del imperialismo, marcan la pausa y ponen entre la espada y la pared al conjunto de la oposición: cuando el enfrentamiento pasa a ser armado, es inevitable elegir al bando.

La invasión de Nicaragua, lanzada en marzo a partir de la frontera hondureña, es obra de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), el principal grupo de oposición armada. Está compuesto casi exclusivamente de ex-guardias nacionales somocistas, estacionadas en Honduras, dirigidos por el coronel Enrique Bermúdez.

Al parecer, la Unión Democrática Nicaragüense - Fuerzas Armadas Revolucionarias Nicaragüenses (UDN-FARN), dirigida por Fernando Chamorro Rappaccioli, con base en San José de Costa Rica, está coordinada actualmente con la FDN. Pretende haber infiltrado unos 600 guerrilleros al interior del país durante los últimos ocho meses.

La UDN-FARN, por otra parte, parece que ha roto con la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) de Alfonso Robelo y Edén Pastora, porque estos últimos se niegan a colaborar con las fuerzas somocistas, a las que aún combatían hace algunos meses. Mientras Edén Pastora anunció con



bombo y platillo, en marzo, que se disponía a abrir un nuevo frente militar en el sur contra el régimen sandinista, Robelo declaraba, a su vez, que las fuerzas de la ARDE no participarían en ninguna acción conjunta y que descartaba cualquier invasión a corto plazo. De hecho, los dirigentes de la ARDE preferirían constituirse en solución de reserva para unas eventuales negociaciones, antes que comprometerse irremediablemente al lado de los revanchistas somocistas. Pero el espacio para una política de "tercera fuerza" disminuye a ojos vista.

Mientras la oposición burguesa se alineaba cada vez más en el bando de la lucha armada contra el régimen sandinista, en Managua tuvo lugar, en enero de 1983, un simposio convocada por el Consejo de Estado para discutir el proyecto de ley sobre los partidos políticos. La Coordinación Democrática "Doctor Ramiro Sacasa Guerreo", que agrupa a los restos de la oposición burguesa, debilitada tras el exilio voluntario de Alfonso Robelo, se negó a participar en estas discusiones aduciendo la falta de libertad de expresión oral y escrita. A cambio, envió a una gira por América Latina a una delegación compuesta por representantes del COSEP (la organización patronal), del Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC), del Partido Socialdemócrata (PSD), de la Central de Trabajadores Nicaragüenses (CNT) y de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), para exponer sus puntos de vista. Una de las principales exigencias de la Coordinación Democrática es que se convoquen elecciones libres en 1984, y no en 1985, como está previsto.

En cambio, los seis partidos ue forman al Frente Patriótico Revolucionario (FPR) sí que participaron en el simposio: son, además del FSLN, las dos fracciones estalinistas que componen el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y el Partido Comunista Nicaragüense (PCN), el Movimiento de Acción Popular (MAP), de origen maoísta, el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Popular Social-Cristiano (PPSC).

La crítica principal al proyecto de ley sobre los partidos, formulada por el PSN y el PLI, se refiere al papel otorgado a los partidos, que quedaría subordinado a las instituciones. Ambas formaciones reclaman que los partidos puedan aspirar a la conquista y al ejercicio del poder político mediante la conquista de una mayoría electoral. En cambio, el PCN y el MAP, que no están representados en el Consejo de Estado, critican el proyecto por demasiado liberal. El primero, que caracteriza la revolución sandinista como "democrático-burguesa", niega toda legitimidad a los "partidos burgueses" y exige la nacionalización de los medios de comunicación. El segundo reclama la supresión de toda actividad de los partidos de la derecha, *"porque la burguesía no debe tener ningún derecho"*.

El PPSC, que ha roto con el Partido Social-Cristiano debido al papel de la jerarquía clerical en la oposición al régimen sandinista, considera al FSLN como la vanguardia del proceso revolucionario, y si bien admite que los partidos políticos tienen como fin la conquista del poder, estima que en las condiciones actuales unas elecciones no lograrían *"impulsar ni el proyecto ni el proceso revolucionario"*.

El FSLN, que es de lejos la fuerza hegemónica del Frente Patriótico Revolucionario, quiere proseguir sus consultas en torno al proyecto de ley sobre los partidos políticos, al igual que en relación con las modalidades del escrutinio que deberán establecerse. Sin embargo, si bien las primeras discusiones demuestran la voluntad de respetar cierto pluralismo político, revelan también los límites de su ejercicio: las futuras elecciones se conciben fundamentalmente como un mecanismo consultivo. Por consiguiente, el resultado electoral quedará subordinado a la defensa de la revolución. Las agresiones actuales refuerzan el peso de este argumento, poniendo al desnudo cada vez más los vínculos históricos y orgánicos existentes entre la oposición burguesa y los agresores somocistas apoyados por el imperialismo yanqui. De hecho, frente a la agresión imperialista y contrarrevolucionaria, la única respuesta eficaz a la agitación burguesa a favor de unas elecciones inmediatas estriba en la ampliación de los poderes reales ejercidos por los organismos del poder popular, como los Comités de Defensa Sandinista (CDS) o las milicias.

Si bien es cierto que los cinco interlocutores del FSLN en el debate en torno al proyecto de ley sobre los partidos políticos son organizaciones muy minoritarias, no por ello deja de ser importante que se celebre este debate, y que se celebre públicamente. Cuando la prensa occidental, incluso en sus órganos más "lúcidos", está al acecho de los mínimos síntomas de autoritarismo en Nicaragua, hay que subrayar los hechos siguientes: en este país, los partidos burgueses, incluso los que están en una oposición declarada al régimen, tienen derecho a una existencia legal mientras no llamen a tomar las armas. Además, la presencia de partidos de izquierda, independientes del FSLN, demuestra que se mantiene una discusión política. Estos hechos constituyen, por sí mismos, una conquista democrática en un país sometido al asedio militar y económico por el imperialismo.

La respuesta a la escalada de agresiones imperialistas comportará inevitablemente una nueva radicalización del proceso revolucionario en Nicaragua, nuevas incursiones del Estado en el sector de propiedad privada para responder al sabotaje y asegurar la infraestructura necesaria para la defensa, y una marginalización creciente de la oposición interior en flagrante colusión con los agresores. Pero al mismo tiempo, los dirigentes sandinistas se preocuparán de preservar la imagen pluralista de su revolución y de no hacer nada que pueda facilitarle el juego al imperialismo en la región: no ignoran que a medio plazo, el porvenir de su revolución está ligado al de la revolución en El Salvador. □

El 6 de diciembre de 1982, tan sólo algunos días después de que los militares anunciaran la convocatoria de elecciones para finales de 1983, Argentina quedaba paralizada por su huelga general de 24 horas, en la que participaron cerca de siete millones de trabajadores. Diez días después, la manifestación por la "democracia y la reconstrucción nacional", convocada en Buenos Aires por la Multipartidaria, agrupó a unos 120.000 manifestantes y dio lugar a fenómenos de desbordamiento de masas de las direcciones burguesas. El diario **Le Monde** *del 18 de diciembre de 1982 observa que "en medio de esta efervercencia, los dirigentes de la Multipartidaria, manifiestamente rebasados por los acontecimientos (...), abandonaron discretamente el lugar, después de distribuir un documento que pide la devolución del poder a los civiles, lo más tardar el 12 de octubre de 1983".*

El 28 de marzo de 1983 se produjo una nueva huelga general de 24 horas convocada por las dos CGT. Aunque fue declarada "ilegal" por el ministro de Trabajo, y a pesar de que el Ministerio del Interior afirmara que reprimiría las acciones que atentaran contra "la seguridad interior", esta huelga fue un éxito. Finalmente, el 30 de marzo de 1983 se produjo una nueva marcha "por la paz, el pan y el trabajo" en Buenos Aires.

Estas movilizaciones ilustran, siete años después del golpe de Estado de los militares argentinos y tras la derrota que sufrieron en la aventura militar de las Malvinas, el contexto en el que la Junta intenta poner en marcha una "transición negociada" hacia un régimen civil, en la que las elecciones previstas para finales del próximo mes de octubre serán probablemente el punto culminante.

Jean-Pierre BEAUVAIS

ARGENTINA

De la derrota de las Malvinas a la "transición negociada"

Los militares han anunciado elecciones para octubre de 1983

UN país devastado, un país en ruinas. Este es el balance que podría haber sacado el general Leopoldo Galtieri si se hubiera atrevido a celebrar, el 21 de marzo de este año, el séptimo aniversario de la dictadura argentina.

No es ninguna exageración. La prensa de Buenos Aires, siempre sumisa a la censura, lo demuestra todos los días... aunque no haga sino reproducir las estadísticas oficiales aproximadas y a veces trucadas. ¿Cómo ocultar el vertiginoso aumento de la deuda exterior —que se aproxima ahora a los 42.000 millones de dólares—, o la persistencia de una inflación cuya tasa anual era, en los últimos meses, del orden de 250%? ¿Cómo ocultar que el aparato industrial funciona apenas al 50% de su capacidad, o que las empresas de la construcción trabajan al 30% de sus posibilidades? Fábricas cerradas o que funcionan al ralentí, obras abandonadas, inmuebles inacabados: la crisis ya forma parte del paisaje urbano de las grandes ciudades argentinas y de sus suburbios...

Según las cifras oficiales, el 12% de la población en edad de trabajar carece de empleo, y el 6% está subempleada (hay que precisar que toda persona que trabaja más de una hora por semana entra en esta última categoría). Pero también puede leerse que el número de cotizantes a las diversas cajas de pensiones ha descendido en aproximadamente dos millones. En realidad, el 20% de la población potencialmente activa no tiene actualmente puesto de trabajo y carece de cualquier recurso, pues no existe ningún seguro de paro.

Según el diario **Clarín** y el semanario próximo al mundo de los negocios, **El Economista**, de 1975 a 1981 el salario obrero medio ha descendido en un 40%, y de julio de 1980 a julio de 1982, ha vuelto a disminuir en un 20%. Mientras que en 1975 las rentas salariales representaban el 51% del Producto Interior Bruto, ahora ya sólo representan el 32,5% de un PIB que a su vez desciende...

La miseria obrera, día a día

Por un lado están las cifras, y por otro la realidad cotidiana que vive la inmensa mayoría del pueblo argentino. Según **El Economista**, de las 8.101 empresas industriales que empleaban a más de 25 personas que había en 1974, en 1981 ya sólo subsistían 6.637, empleando una cifra total de asalariados que en este periodo había descendido en un 34%. A centenares de miles de trabajadores y sus familias, esto les obligó a instalarse en la miseria. Una miseria a menudo absoluta, en un país que aunque dependiente, había conocido un relativo desarrollo industrial, y cuya renta per cápita fue superior, durante mucho tiempo, y de lejos, a la de los demás países de América Latina...

En los barrios obreros de los grandes centros urbanos, cuántos sobreviven actualmente tan sólo gracias a la solidaridad familiar, a la solidaridad espontánea del vecindario, a la distribución de alimentos y sopas populares por parte de la Iglesia. El analfabetismo y la subalimentación aumentan rápidamente. Reaparecen enfermedades que se creían eliminadas para siempre —como la poliomelitis—. En la periferia de Buenos Aires se extienden rápidamente colonias de chabolas sórdidas e insalubres, similares en apariencia a las que rodean a tantas otras ciudades latinoamericanas o del Tercer Mundo en general. Pero los que se amontonan allí no son desheredados venidos de las zonas rurales pobres y superpobladas. Casi todos son antiguos obreros, antiguos empleados ahora parados. Despedidos de sus fábricas, expulsados de sus viviendas, cuyo alquiler ya no pueden pagar, desterrados de su barrio donde la alimentación es demasiado cara...

A menudo, la suerte de los que tienen el "privilegio" de no haber perdido su puesto de trabajo, apenas es más envidiable. La situación de los trabajadores del automóvil es uno de tantos otros ejemplos. Se trataba de un sector clave de la industria argentina, totalmente en manos del capital extranjero. La crisis ha hecho que empresas como General Motors o Citroen cierren sus fábricas y se retiren del mercado. Así, dos tercios de los trabajadores del ramo están ahora sin empleo. Pero en las fábricas que se mantienen activas, la represión y el fantasma del paro han permitido multiplicar la productivi-

dad por dos, y a veces por tres, mientras que los salarios reales han disminuido en aproximadamente un 70%. Un obrero de la Volkswagen, que en 1974 ganaba el equivalente de 400 dólares al mes, recibe actualmente, en el mismo puesto de trabajo, el equivalente de 55 dólares. En 1974 trabajaba 43 horas semanales, actualmente tiene que trabajar unas 50 horas y a veces más...

Del golpe de estado de 1976 a la aventura de las Malvinas

Cuando en 1976, en medio de una situación política y social caótica, los militares derribaron el Gobierno de Isabel Perón y se instalaron en el poder, el imperialismo y la casi totalidad de la burguesía argentina esperaban de ellos al menos dos cosas. Por un lado, que pusieran en vereda —al fin y para mucho tiempo— a la clase obrera y a las masas populares, acentuando y sistematizando una represión ya aplicada a gran escala, liquidando a los sectores de vanguardia más combativos, quebrando una tradición de lucha y de organización de varios decenios. Y por otro, sobre la base de esta derrota de las masas trabajadoras, que establecieran un régimen "fuerte y estable", que garantizara las condiciones de una sobreexplotación severa de los trabajadores, de un nuevo proceso de acumulación capitalista, de una nueva inserción en el mercado mundial de la economía dependiente del país, en crisis desde finales de los años cincuenta.

Al precio de una auténtica "guerra interior", con sus decenas de miles de víctimas —entre ellas, los 25.000 a 30.000 "desaparecidos"—, sus centenares de miles de exiliados, sus millones de parados, las masas argentinas han sufrido efectivamente una derrota. Pero a pesar de ello, la crisis económica internacional ha convertido en ilusión cualquier proyecto de renovación capitalista. Es más, las antiguas recetas monetaristas aplicadas sin restricción alguna, si bien han favorecido durante algún tiempo las actividades básicamente especulativas de los sectores financieros, han contribuido en gran medida a acelerar la desarticulación del aparato económico y a ampliar los efectos desastrosos de la recesión mundial.

Por consiguiente, no fue un régimen "fuerte y estable", sino una dictadura desprestigiada y odiada, inquieta ante los crecientes síntomas de una sorda revuelta popular cada vez más difícil de sofocar, sacudida por crecientes conflictos interburgueses e incapaz de frenar la marcha a la bancarrota, la que hace un año, en abril de 1982, se lanzó a la aventura de las Malvinas. Aventura improvisada por unos militares que no tenían nada de antiimperialistas y que sólo podían subestimar totalmente la voluntad de respuesta británica. Unos militares que buscaban desesperadamente recomponer el marco político nacional en provecho suyo, presentándose como los defensores de la "soberanía nacional"... Aparentemente seguros en su iniciativa, y convencidos de que la causa era popular, esperaban, mediante esta huída adelante, proporcionarle un segundo aliento a su poder.

La operación implicaba necesariamente una relativa apertura política en el interior. Los políticos burgueses, peronistas radicales o de otras corrientes, los burócratas sindicales, todos ellos, que ayer aún eran reprimidos o acallados, fueron invitados a colaborar. Y se apresuraron a hacerlo. Con su



ayuda, se invitó incluso a la población a manifestar su apoyo a esta operación. Pero el resultado tenía que ser muy desigual. Algunos sectores de la pequeña burguesía, con su sensibilidad nacionalista heredada de la tradición peronista, responderán, por supuesto, al llamamiento, pero sin apoyar por ello al régimen. En la primera concentración de masas ante la Casa Rosada (Palacio Presidencial), y antes de que se produjeran los primeros reveses militares, el general Galtieri fue abucheado cuando se presentó como el "portavoz de todos los argentinos". Pero la clase obrera, aplastada por la crisis y marcada por la pesadilla de la represión, permanecerá desconfiada y en gran medida pasiva, pese a la presencia colonial británica en el Atlántico Sur.

No obstante, los aprendices de brujo que estaban sentados en los Estados Mayores habían creado una situación nueva, y en muchos aspectos irreversible. Independientemente del resultado de la guerra, la "apertura" estaba inscrita en los hechos. Una "apertura" que no se traducía en nada en un apoyo popular a un régimen demasiado desprestigiado.

El fiasco militar no hizo sino acelerar y ampliar la dinámica iniciada, máxime cuando los oficiales superiores se desgarraban públicamente entre sí en cuanto a la distribución de responsabilidades, y cuando el esfuerzo de guerra había agravado aún más la crisis económica y sus efectos para la mayoría de la población. Cuando en plena confusión el general Reynaldo Bignone es llamado por una parte de sus semejantes a asumir la presidencia del Estado, parece que los días de la dictadura están contados. "Hay que tomar el poder", se atreverá a escribir entonces uno de los raros comentaristas de la prensa argentina que encuentran eco. Esto sucedía en julio de 1982. Sin embargo, aún hoy, y aunque se hayan programado elecciones generales para finales del próximo mes de octubre, los militares aún están allí, con sus hombres y con sus instituciones establecidas.

Una situación nueva

Por supuesto, después de haber estado prohibidas o disueltas durante años, las principales formaciones políticas vuelven a estar autorizadas. Han sido invitadas, según las modalidades establecidas por la Junta, a organizar "campañas de afiliación", al final de las cuales y después de haber verificado la identidad de sus nuevos miembros, quedarán habilitadas, o no, para presentar candidatos en las próximas elecciones. Algunos burócratas sindicales que antes de la guerra de las Malvinas estaban encarcelados o bajo arresto domiciliario, se han convertido en "interlocutores responsables".

Pero al mismo tiempo, el aparato represivo tentacular sigue en pie, intacto. Sus torturadores con galones y los rasos siguen actuando impunemente. Están en todas partes. Sus tristemente célebres "Ford Falcon" peinan todas las noches las calles de la capital. Todavía tienen en sus manos a miles de presos. Logran imponer a casi todo el mundo un pesado silencio —que finalmente resulta cómplice sobre la suerte de sus víctimas del pasado, particularmente de los "desaparecidos", esas víctimas de uno de los crímenes más recientes y monstruosos perpetrados contra la humanidad. A casi todos, salvo a las madres de la Plaza de Mayo, a los militantes de las Asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos y a los de los grupos de extrema izquierda...

Aún hoy, los criminales en uniforme no pierden ninguna ocasión, incluso con actos

que lindan con el ridículo, para recordar que el poder es la fuerza, y que la fuerza la tienen ellos. Pueden hacerlo ante todo gracias a la colaboración tanto interesada como atemorizada de sus "oponentes", los dirigentes de las principales formaciones políticas burguesas. Desde antes de la guerra de las Malvinas, éstas se agrupaban, fundamentalmente, en el seno de una coalición heterogénea, la Multipartidaria, que incluye al Partido Radical, al Movimiento Independiente por el Desarrollo (MID), al Partido Intransigente, a la Federación Demócrata Cristiana y al peronismo oficial (justicialismo), que a pesar de sus divisiones sigue siendo la fuerza política que dispone de mayor audiencia en el país.

Expresando la posición de una amplia mayoría de la burguesía argentina, coincidiendo con el deseo de las potencias imperialistas, los dirigentes burgueses se declaran abiertamente, a partir de la derrota, *"favorables a un retorno de los militares a sus cuarteles"*. Sobre esta base, y utilizando los márgenes de demagogia tolerados actualmente, se esfuerzan por canalizar tras ellos la hostilidad popular al régimen. Pero después de casi 13 años de dictadura, sus partidos están debilitados, anquilosados. Las querellas entre clanes y las aspiraciones de los caudillos dividen a todos. Temen el vacío político y están asustados ante la amplitud de la crisis económica y los riesgos de explosión social que implica. Saben que desde su punto de vista no tienen ninguna alternativa: en materia económica, aceptan y aceptarán las directrices de los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI), delegados por los acreedores imperialistas, directrices que aplican ya hoy Reynaldo Bignone y sus ministros. Y no ignoran que para gobernar y continuar, básicamente, imponiendo esta política a las masas golpeadas por la miseria, tendrán necesidad de los militares. El resto no es mas que táctica.

Así, por ejemplo, el MID, cuyo dirigente es el antiguo presidente de la República Arturo Frondizi, se ha pronunciado por una candidatura única a la presidencia, que agrupe a radicales y peronistas sobre la base de un pacto negociado entre los dirigentes de las principales formaciones burguesas. Este tipo de propuesta, y muchas otras más efímeras, agitan mucho a la Multipartidaria. Están destinadas a frenar las discusiones y las posibles rupturas en el seno del radicalismo, y sobre todo del peronismo. Y ante todo, pretenden desviar a corto plazo la atención de las cuestión fundamentales que se plantean.

El calendario electoral de la transición negociada

El anuncio oficial del "calendario electoral" demuestra que actualmente la gran mayoría de los militares asume la idea de un necesario retorno a los cuarteles. Pero no de cualquier manera ni a cualquier precio. Exigen tres categorías, que consideran vitales para "mantener la integridad de la institución": ninguna investigación sobre las responsabilidades en la dirección de la guerra de las Malvinas, consenso tácito en torno a una "Ley del olvido" a propósito de la represión —en otras palabras, los muertos y desaparecidos deberán "desaparecer" por segunda vez—, y mantenimiento de todas sus prerrogativas en materia de "seguridad nacional", lo que significa compartir el poder, y en este marco, gozar de libertad de acción en materia de represión. Estos son al mismo tiempo, los límites, las bases y el marco de la "transición negociada" que se desarrolla desde hace ya varios meses. "Transición negociada" oficializada ahora desde la aceptación pública por los principales dirigentes de la Multipartidaria del "diálogo" con el poder militar.



Este "diálogo", discreto y oficioso ayer, oficial hoy, sólo puede satisfacer a la Junta: le ha permitido, dentro de los estrechos márgenes determinados por la crisis generalizada por la que atraviesa Argentina, y tras el fiasco de las Malvinas, retomar la iniciativa política. ¿Podrá conservarla hasta la celebración de las elecciones e imponer, después, una forma más discreta pero muy real de participación en el poder, todo ello sin tener que rendir cuentas por sus crímenes?

En gran parte, la respuesta a esta pregunta depende del ritmo de reorganización, de removilización de la clase obrera. Es ella la que más ha sido golpeada por el efecto combinado de la represión y de la crisis. Ha disminuido numéricamente. Sus militantes combativos han sido los más diezmados. Sus estructuras organizativas, particularmente en el seno de las empresas, conquistas del combate de varias generaciones, están desmanteladas. Sus miembros deben gastar una energía considerable para "unir los dos cabos". O simplemente sobrevivir. A pesar de todo, renacer la confianza. Lentamente. Con mucha prudencia. Surgen conflictos. Se prolongan las luchas. En las fábricas y oficinas aprecen progresivamente estructuras surgidas de la base. Es aún un proceso muy disperso, de naturaleza fundamentalmente defensiva. Pero ya los trabajadores han dejado de ser aquellos protagonistas pasivos y silenciosos que desearían que fueran las direcciones burguesas, para estar seguras de llevar a buen puerto su pretendido diálogo con los militares.

La vieja burocracia sindical —que es uno de los componentes del peronismo— se encuentra, en muchos aspectos, en una posición un tanto nueva. En primer lugar, surge estructuralmente debilitada de los siete años de dictadura. En segundo lugar, está más dividida que nunca. Son divisiones surgidas sobre la base de intereses sectoriales y camarillas, que explican en lo fundamental, la existencia actual de dos polos sindicales organizados, la llamada CGT "Azopardo" y la llamada CGT "Brasil". Pero más allá de estas divisiones, la burocracia ha desarrollado sus propias formas de colaboración con la dictadura, paralelamente a la Multipartidaria. En este marco, y en la perspectiva de una "normalización" próxima por los militares, de la vida sindical, su papel va a aumentar rápidamente. Pero los factores de crisis en el seno de esta burocracia, nutridos por su situación profundamente contradictoria, tenderán a agravarse.

La huelga nacional convocada el 6 de diciembre de 1982 por las organizaciones sindicales, aunque no hubiera dado lugar a ninguna manifestación, encotró un eco muy amplio. Pocos días después, el 16 de diciembre, los dirigentes de la Multipartidaria convocaban, con el acuerdo tácito de la Junta, una gran concentración de apoyo a su política. Rápidamente desbordados, prefirieron desaparecer cuando varios cortejos, de composición mayoritariamente obrera, transformaron esta acción en una movilización de masas contra la dictadura.

Aquella jornada marcó un cambio de situación, sin ninguna duda: sectores de masas significativos mostraron que recuperaban la confianza, que estaban dispuestos a hacer frente a los esbirros de la dictadura, a luchar por su derrocamiento. Las movilizaciones nacionales de las masas trabajadoras de Argentina, previstas para el próximo futuro, lo confirmarán. □

Las imágenes que mostraron las televisiones occidentales de los trabajadores polacos que se enfrentaban con las fuerzas del orden en varias ciudades del país, el pasado trece de marzo, han servido para recordar, a quienes lo hubieran olvidado, que el movimiento de resistencia sigue vivo y capaz de tomar iniciativas, aunque en 15 meses haya cambiado parcialmente de cara.

Las recientes movilizaciones, así como las huelgas o las amenazas de huelga en torno a reivindicaciones económicas o a la defensa de los trabajadores despedidos por razones políticas, muestran que la clase obrera polaca está lejos de haber resignado. Es cierto, sin embargo, que tras la esperanza de una victoria rápida, suscitada por la amplitud de las movilizaciones de la pasada primavera, se constata un evidente descorazonamiento en determinados círculos, particularmente entre los intelectuales. Entre los trabajadores existe una tendencia al atentismo, decepcionados por el fracaso de la huelga del 10 de noviembre de 1982. Además, la perspectiva de la visita del Papa suscita numerosos llamamientos a la calma en los círculos vinculados a la Iglesia, para impedir movilizaciones que podrían comportar la anulación del viaje y provocar una oleada represiva que colocaría a Juan Pablo II en una situación difícil.

Jacqueline ALLIO

POLONIA

Debates en Solidaridad y nuevas formas de lucha

La nueva cara del movimiento de resistencia

CABE esperar que se produzcan nuevos revuelos entre los curas, tras los recientes llamamientos a la paz social lanzados por el primado de Polonia, Monseñor Glemp. *«Un movimiento clandestino que tiene por programa el combate contra el poder, frontalmente, me parece estar fuera de la realidad»,* afirmaba en el mismo momento en que la Comisión Provisional de Coordinación (TKK) de Solidaridad lanzaba un programa de acció que rechaza explícitamente toda perspectiva de concordia nacional con el poder. Justificaría sus palabras explicando que hay que *«observar una actitud realista frente al General Jaruzelski», y que Solidaridad no constituye ya «una realidad unitaria».* La TKK respondió llamando a una manifestación para el 1° de Mayo en Polonia, y afirmando que los trabajadores polacos *«no renunciarán jamás a luchar por la liberación de sus hermanos encarcelados».*

Las declaraciones de Glemp, en cambio, le hacen el juego a la burocracia. Esta no desaprovecha ninguna ocasión para intentar demostrar que Solidaridad está muerta. En su informe al Parlamento, el 22 de marzo, el ministro del Interior hizo un balance favorable de su lucha contra la oposición: 700 grupos ilegales desmantelados, las principales estructuras del movimiento clandestino "obligadas a desintegrarse", 1.310 equipos de impresión y 12 emisoras de radio clandestinas confiscadas, etc. Lo que no dice, es que en la mayoría de las ciudades importantes aún aparecen de 10 a 40 boletines regulares, y que algunas regiones, como la Baja Silesia, son capaces de asegurar regularmente emisiones de radio clandestinas, una de las cuales duró 50 minutos sin ser interferida. Y tampoco dice que tras la suspensión del "Estado de guerra", una gran cantidad de antiguos internados —a menudo reformados— fueron enrolados a la fuerza en los batallones disciplinarios del Ejército, para cortarlos totalmente de su medio social. Y tampoco señala, finalmente, el fracaso absoluto del poder a la hora de imponer la existencia de los nuevos sindicatos. Estos últimos sólo agrupan a un porcentaje mínimo de trabajadores —6% según las autoridades, 3% según Solidaridad—, al tiempo que menos de la mitad de los miembros del Partido se han inscrito en ellos.

No obstante, la impotencia de la Junta no implica automáticamente la fuerza del movimiento clandestino.

Declaración programática de la TKK

Las vacilaciones de la dirección nacional clandestina, sus contradicciones en materia de orientación política y sus bruscos virages en la táctica propuesta, no han contribuido a reforzar el prestigio de la TKK, aunque siga siendo la única instancia nacional reconocida. Con su política de zig-zag —que el poder ha sabido explotar—, ha contribuido a desarrollar tendencias centrífugas en el movimiento de resistencia.

El débil grado de coordinación de las estructuras clandestinas a nivel nacional y regional, combinado con las directrices inconsecuentes de la TKK, ha suscitado divergencias y divisiones que implican, a plazo fijo, un auténtico peligro de ruptura entre las distintas estructuras. Se observa la existencia de una fosa creciente desde el punto de vista de los militantes implantados en las empresas y el de los intelectuales que participan en las actividades clandestinas, pero que están cortados del movimiento obrero.

Frente a ello, la declaración programática de la TKK, del 22 de enero —que publicamos más abajo—, representa un paso real adelante en el intento de unificar los debates, las experiencias y las propuestas de acción de los diversos sectores del movimiento clandestino. Para ello, tenía que responder a exigencias contradictorias.

En primer lugar, las de Solidaridad de Baja Silesia, que centra su atención en la construcción de una organización sindical clandestina en las empresas. Una organización que sea capaz de desarrollar, actualmente, en torno a objetivos parciales, fuertes luchas de masas coordinadas a partir de las grandes empresas, para derrocar mañana la dictadura militar a través de la huelga general.

En segundo lugar, las de la dirección clandestina de Varsovia y de los Comités de Resistencia Social (KOS), que ponen el

acento ante todo en la resistencia pasiva, estableciendo una red clandestina de información y edición, circuitos de formación y, en general, el desarrollo de una conciencia social independiente. Objetivos que se presentan como un fin en sí mismos.

Finalmente, las exigencias de una dirección regional, como la de Gorzow, que pide que se crea una organización centralizada de revolucionarios profesionales, cuya misión sería la de asegurar la coordinación de las actividades independientes y de autoorganización de la sociedad y, cuando la situación sea favorable, conquistar el poder.

Realizar una síntesis entre estos distintos puntos de vista y estas prácticas diversas no era pan comido. Pero, globalmente, el texto de la TKK lo consigue. Reconoce que la huelga general es inevitable y el "medio más poderoso" de lucha, susceptible de "derribar la dictadura actual". Afirma claramente que esta huelga sólo podrá ser el resultado de una preparación sistemática de la clase obrera, tanto a través de un "frente de rechazo" (boicot de los sindicatos fantoches, de las "elecciones" municipales y legislativas, etc.), como por medio del desarrollo de la conciencia social independiente y de las luchas parciales con objetivos inmediatos o transitorios. También se reafirma el objetivo estratégico a largo plazo de solidaridad —la construcción de una República autogestionada—, y la necesidad de preparar a las masas para la autogestión en el marco de las luchas actuales.

No obstante, es evidente que la declaración programática tiene, en más de un aspecto, un carácter de compromiso que no excluye ciertas ambiguedades, incluso algunos pasos atrás. Particularmente se observa claramente que el enfoque de Zbig niew Bujak (dirigente de Varsovia) difiere netamente del de Jozef Pinior (dirigente de Baja Silesia) y de sus demás compañeros de la TKK. Bujak no excluye "la hipótesis de reformas lentas y suaves" susceptibles de permitir la reconstrucción de un movimiento sindical. Un movimiento independiente, pero distinto del que fue Solidaridad. Opone explícitamente esta perspectiva a la de la huelga general, incluso se admite que también hay que plantearla.

Por su parte, los KOS —que se reclaman de las ideas de Bujak— no ven *«ni la posibilidad ni la utilidad de organizar un enfrentamiento masivo»*.

Para nosotros es evidente que las propuestas de acción de Bujak y de los KOS, con miras a desarrollar una actividad cultural independiente y a elevar la conciencia social de las masas, no son en sí mismas contradictorias con la organización sistemática de estructuras clandestinas del sindicato en la empresa, y su preparación para la huelga general. Llevar a cabo el plan de ediciones del movimiento de educación independiente, que incluye la aparición de folletos y documentos sobre temas históricos, jurídicos, económicos y sociales, y con miras a formar círculos de autoformación, sólo puede reforzar la capacidad de reflexión de amplios sectores de la sociedad. Asímismo, las universidades obreras o las "universidades volantes", que actualmente funcionan en varias ciudades, contribuyen a romper con la visión deformada y la ideología totalitaria dispensada por la burocracia.

Pero esta actividad sólo será útil si se pone al servicio de la autoorganización de las masas, y si el contenido de la prensa y de las ediciones independientes responde a las preocupaciones y a las necesidades de los obreros, a las de sus organizaciones sindicales en las empresas. Es decir, si la línea que prevalece es la "línea de las fábricas", defendida de la forma más consecuente por la dirección de Baja Silesia. Esta apuesta sobre todo por la organización en profundidad de los trabajadores en las empresas, y por las luchas obreras para obtener victorias —quizás parciales—, pero que dan al conjunto del movimiento clandestino la fuerza y la confianza en sí mismo, indispensables para prepararse para la perspectiva de la huelga general.

Por su parte, Bogdan Lis pasa revista a diversas formas posibles de huelga parcial —huelga de hostigamiento con disminución de los ritmos, huelga con paros y ocupación de empresas, huelga de abstención consistente en no presentarse al trabajo, e incluso determinadas formas de huelga activa. A ello puede añadirse la "huelga de dimisión" aplicada por los obreros de la fábrica de construcción de viviendas FADOM en Biezanow, donde 105 personas habían sido despedidas tras la huelga convocada a escala nacional para el 10 de noviembre de 1982. Todos los trabajadores amenazaron entonces a la dirección de abandonar la fábrica si no eran readmitidos sus compañeros y estos rechazaron durante siete días la propuesta de readmisión en puestos inferiores a los que ocupaban anteriormente. Esta lucha se vió coronada por un éxito casi completo. En cuanto a los trabajadores de Fadroma, en Wroclaw, recurrieron a la huelga de hostigamiento para obligar a la dirección a retirar los despidos políticos decididos: durante una semana, estos seis mil trabajadores, que cobran a destajo, redujeron los ritmos hasta tal punto que la producción semanal disminuyó al equivalente de ocho horas de trabajo, perdiendo al mismo tiempo una parte importante de su salario.

Nuevas formas de lucha

Estas luchas constituyen un ejemplo para las demás empresas y pueden iniciar un proceso de acciones parciales controladas y victoriosas, que desempeñarán un papel determinante para concretar el programa avanzado por la TKK. Otro elemento importante, que va en el sentido del refuerzo de la actividad sindical, se refiere a la decisión de diversas comisiones de empresa de encargarse a partir de ahora del pago de asignaciones que tradicionalmente correspondían a los sindicatos.

Actualmente, estas tareas debían corresponder a los sindicatos "oficiales". Las autoridades cuentan con ello para presionar sobre la franja de trabajadores vacilantes, así como sobre los que tienen una necesidad absoluta de estas prestaciones para salir adelante económicamente, obligándolos así a afiliarse a los sindicatos creados por ellas.

Lejos de tener un carácter secundario, el ejemplo ya dado por varias empresas de Wroclaw, de Varsovia y de Cracovia, que han decidido crear Cajas de Socorro y Préstamo para todos los que paguen regularmente sus cotizaciones a Solidaridad, constituye un importante paso adelante. Además, las cotizaciones han conocido una enorme progresión desde que se anunció esta decisión.

Por todas estas razones, la declaración programática de la TKK abre nuevas perspectivas para el movimiento clandestino. Es importante precisar que según los miembros de la TKK, este texto pretende ser "un programa de acción del sindicato en el contexto sociopolítico actual del movimiento", y no quiere cumplir el papel del programa que será necesario inmediatamente después de la huelga general.

Trazados estos límites, hay que subrayar las carencias que subsisten en este texto, en relación con la misma preparación de la huelga general. En efecto, cuando se plantea la cuestión del derrocamiento de la dictadura, la tarea de la dirección consiste en preparar a las masas para todas las implicaciones de esta decisión, incluída la posibilidad de un enfrentamiento violento con el poder. Pero en la declaración programática no se dice nada sobre los medios con los que contarán las masas obreras para defenderse frente a los probables asaltos de la milicia del Ejército. ¿No tendrán los obreros más que sus puños para resistir frente a las ametralladoras? ¿Cómo hacer que la huelga general no termine repitiendo la experiencia del 13 de diciembre de 1981?

De nuevo sobre la huelga general

Durante la primavera y el verano de 1982, en el marco de la discusión sobre la huelga general, los que en el seno de la TKK eran partidarios de la misma veían la necesidad de combinar esta perspectiva con la defensa activa de las empresas. Hoy, esto

ya no se plantea. Al mismo tiempo, nada se dice sobre la necesidad de un trabajo en dirección al Ejército y la milicia para preparar las condiciones de la huelga general. Ya hace tiempo que Jacek Kuron llamaba a iniciar este trabajo con toda urgencia. Y Zbigniew Romaszewski destacó: *«Cuando un batallón se niegue a disparar... es lo que sucedió en febrero de 1917, cuando un pequeño destacamento de cosacos pasó junto a los manifestantes, y un mes más tarde dejó de existir el zar».*

Tras esta negativa a abordar claramente la cuestión de la autodefensa y del trabajo en dirección al Ejército, existe probablemente una ilusión sobre la naturaleza del poder burocrático. *«El auténtico cambio en nuestro programa,* dice Eugeniusz Szumiejko, *es que nosotros hablamos de algunos cosas sin ambages, sin alimentar ilusiones ni nutrirlas en otros, en cuanto a las posibilidades de llegar a un compromiso con la dictadura, o incluso de abrir negociaciones»,* pero después de la huelga general se espera llegar a una situación que permita realizar reformas económicas y una evolución democrática. Janusz Palubicki, miembro de la TKK, decía con razón, poco antes de su detención, el 28 de diciembre de 1982: *«El único armisticio posible sólo podrá basarse en una real relación de fuerzas».* Digámoslo con precisión: en una situación de doble poder, es decir, en la continuidad de la revolución tras el derrocamiento de la dictadura militar mediante la huelga general. Tanto si está uniformado como si no lo está, el poder burocrático mantendrá su esencia totalitaria, por mucho que se vea golpeado duramente por la huelga general.

Janusz Palubicki lo afirmó con razón: *«Antes del 13 de diciembre, nuestro error fundamental consistió en creer que era posible mantener un pequeño jardín democrático en un Estado totalitario*__. ☐

DOCUMENTO

"Solidaridad hoy"

declaración programática de la TKK

La Comisión provisional de coordinación (TKK), dirección nacional clandestina de Solidaridad, publicó, el pasado 22 de enero, una declaración programática titulada "Solidaridad hoy".

Reproducimos a continuación amplios extractos de esta declaración.

LAS reformas democráticas que debieran sanear las relaciones sociales y económicas constituyen, para el sistema actual, un peligro mortal. Al gobernar con ayuda del miedo, el poder se ha condenado a sí mismo a tener miedo ante la explosión del odio de la sociedad. Hoy, nuestra determinación a hacer concesiones se percibe como una manifestación de debilidad por nuestra parte, y contribuye al refuerzo del sistema represivo. La sociedad no puede escoger: el único camino es la resistencia, la lucha contra la dictadura.

El objetivo de nuestra lucha sigue siendo la realización del programa del I Congreso Nacional de Delegados de Solidaridad, que proponía la construcción de una República autogestionada:

• Donde el poder estaría sometido al control de la sociedad; en las empresas, este control se ejercería mediante los Comités de autogestión de los trabajadores; en las Comunas rurales y en las regiones, a través de los Comités de autogestión territoriales; a escala nacional, mediante una Dieta democráticamente elegida.

Una república en la que los tribunales independientes serían los guardianes de la legalidad; en la que los medios de producción serían realmente la propiedad de la sociedad, y asegurarían a los trabajadores de las empresas una participación efectiva en la distribución de la renta producida por ellos mismos.

• En la que la cultura, la enseñanza y los medios de comunicación estarían al servicio de la sociedad.

Este programa tiene en cuenta, por un lado, el hecho de que el cambio de la República exige llevar a cabo profundas reformas de la vida social, económica y política, y por otro lado, de que la situación geopolítica de Polonia hace que estas reformas sólo podrán introducirse progresivamente, sin que se ponga en tela de juicio el equilibrio general de fuerzas en Europa.

Esta visión de la República autogestionada no está en contradicción con la idea del socialismo, y su realización no debe entrar en conflicto con el orden internacional existente. Las alianzas concluidas por Polonia no pueden prejuzgar la existencia de un poder dictatorial odiado por todos y que no ofrece al país ninguna perspectiva de desarrollo. Esta situación constituye una amenaza permanente para la paz en Europa.

La realización de este programa exige crear las condiciones en las que el poder se verá obligado a buscar un compromiso con la sociedad. Sólo entonces será posible emprender el proceso de reformas y podrán darse las condiciones para una actividad legal de los sindicatos, organizaciones y asociaciones independientes que representen los intereses de la sociedad. Para que el sistema de poder en Polonia esté dispuesto a hacer concesiones, para que se haga realidad la perspectiva de reformas, hay que actuar con el objetivo de destruir la actual dictadura.

La resistencia y la lucha contra la dictadura determinan hoy los siguientes frentes

de lucha:
- —el frente de rechazo;
- —la lucha económica;
- —la lucha por el desarrollo de una conciencia social independiente;
- —los preparativos de la huelga general.

La sociedad en vías de autoorganización debe actuar en todos estos frentes.

Nuestra arma principal en esta lucha es la solidaridad social. Gracias a ella, vencimos en agosto de 1980 y sobrevivimos a la represión y al estado de guerra (...) Lo que hizo y hace nuestra fuerza es la conciencia de que estamos juntos. (...) De ahí que no debe abandonarse a ninguna víctima de la represión, a ninguna persona encarcelada, maltratada, despedida, sin cuidados y sin ayuda (...).

El Frente de rechazo

La negativa a participar en la mentira, en la arbitrariedad y en la coacción es una forma de lucha cotidiana que nos es accesible a todos. Practicando el boicot general de los sindicatos de fachada creados por el poder, hemos obtenido una victoria política común. (...)

El principio que habíamos adoptado durante el periodo de estado de guerra, de boicotear las organizaciones, las instituciones y las asociaciones que manifiestan su apoyo al actual sistema dictatorial, que son sucedáneos de las organizaciones sociales y legalizadas, y que no hacen sino imitar la vida sociopolítica, debe ser una constante de nuestra vida. (...)

A partir de ahora nos negamos a participar en la farsa de las elecciones al parlamento y de los consejos municipales. Nos negamos a participar en las manifestaciones oficiales, en las conmemoraciones, en los mítines organizados por el poder. Que este poder caiga en el vacío político.

Deberíamos aplicar el principio de boicot de una forma selectiva. Podemos y debemos aprovechar las posibilidades de una acción independiente en el seno de las instituciuones oficiales cuyo objetivo es satisfacer las necesidades reales de la sociedad. Sin embargo, hay que vigilar que nuestra acción no sirva a la mentira ni avale a la dictadura. (...)

El frente de rechazo es también un frente de lucha activa. El poder, sin duda, tratará de quebrar este frente mediante el chantage y la corrupción. A nosotros nos corresponde actuar en consecuencia. Cada caso de chantaje debe ser conocido por todos, lo que limitará su alcance y su repetición. La recolecta constante de cotizaciones, la creación de comités de ayuda social, la reivindicación de la creación de cajas de ayuda mutua y de un fondo de vacaciones para los trabajadores, independientemente de los sindicatos oficiales, es también una forma de lucha contra la corrupción. Sería inadmisible que las personas que se encuentran en dificultades financieras se vieran obligadas a deshonrarse dirigiéndose a los sindicatos oficiales.

La lucha económica

Tras 38 años de existencia de la República Popular de Polonia, la sociedad polaca se encuentra en el límite de la miseria. Con los víveres racionados, a falta de medicamentos y vestidos, estamos condenados a la quiebra. Los 30.000 millones de dólares de deuda pesarán sobre nosotros durante muchos años. Una inmensa riqueza nacional está deteriorándose en las fábricas, que no producen, o en las obras, donde han cesado los trabajos. El retraso tecnológico aumenta cada vez más. La manera en que se utiliza el potencial económico se parece a una explotación colonial. El pillaje desconsiderado de las minas ha comportado decenas de muertos y ha llevado al devastamiento de las minas y a la destrucción de los recursos de materias primas en Polonia. A falta de medios, la agricultura es incapaz para alimentar a la nación. El devastamiento del medio ambiente natural pone en tela de juicio su existencia biológica.

La dictadura del Estado de guera no ha hecho otra cosa que aplicar un vasto programa de aumento de precios, sin ofrecer a cambio ninguna perspectiva de mejora de la situación económica. Este programa, que hace abstracción de los demás mecanismos de mercado y de gestión, ha conducido, al cabo de un año, a una disminución drástica del nivel de vida, del 36%. Ahora, un tercio de las familias trabajadoras viven en el límite de la miseria. Al mismo tiempo, es la sociedad la que soporta el peso de las cargas que se derivan del gigantesco desarrollo del aparato represivo. (...) Ya se ha anunciado un nuevo aumento de precios. Provocará un nuevo empobrecimiento de la sociedad, y ampliará aún más la indigencia, amenazando con hacernos descender por debajo del mínimo biológico.

El estado de guerra y su legislación anulan las posibilidades de salida de la crisis. La reforma basada en el principio de autonomía, de autogestión y de autofinanciación ha quedado reducida de hecho a un cambio de fachada del sistema de triste reputación de las planificaciones autoritarias, y a la militarización de los principales ramos de la economía. Las restricciones draconianas de los derechos de los trabajadores han creado unas condiciones de trabajo de semiesclavitud, con el avasallamiento administrativo en el lugar de trabajo, y el trabajo obligatorio acompañado de la amenaza de despido por razones políticas. En estas condiciones, la reforma autogestionaria de la economía no es sino una ficción. La autogestión ya no es capaz de responder a sus obligaciones.

No se nos puede responsabilizar por el estado de la economía. Sin embargo, debemos tratar de mantenerla en un nivel que pueda asegurar las mejores condiciones posibles de su futura reconstrucción. No podemos admitir una nueva disminución del nivel de vida. La lucha por las condiciones de vida encabeza el programa de intereses fundamentales de la sociedad y de los trabajadores. Esta lucha se desarrollará en todas las empresas y explotaciones agrícolas. Prestaremos nuestro apoyo a toda iniciativa que les permita a los agricultores organizarse en defensa de sus derechos.

En las empresas, desarrollaremos esta lucha utilizando todas las formas de presión:

- Explotando los reglamentos en vigor en lo que se refiere al estricto respeto del código laboral y los reglamentos relativos al empleo y los salarios, las normas de seguridad laboral, las normas tecnológicas, las condiciones de trabajo;
- Exigiendo una información precisa sobre las decisiones que afecten a la producción y a sus resultados, sobre la distribución de la masa salarial y las primas, sobre el funcionamiento de los servicios sociales;
- Poniendo en conocimiento de todos las informaciones ocultadas por la dirección (decisiones equivocadas, medidas impopulares, despilfarro, incompetencia y represión);
- Organizando protestas colectivas, peticiones, rechazo de horas extraordinarias, boicoteando las medidas que limitan los derechos de los trabajadores o destinadas a dividirlos. La huelga económica es, en este terreno, la forma de protesta más fuerte y más eficaz;
- Aprovechando la autogestión de los trabajadores y donde las condiciones permitan establecerla, para que sirva a la defensa de las condiciones de existencia de los trabajadores y a su defensa frente a la represión. Si el Comité de autogestión se ve privado de esta posibilidad de acción, los miembros del consejo obrero deben cesar en su actividad y llamar a los trabajadores a boicotear al Comité de autogestión.

Por una conciencia social independiente

Solidaridad nació de la protesta general, de la lucha común y del trabajo de diversos medios sociales. Al construir Solidaridad, superamos las divisiones creadas consciente y voluntariamente por el poder. El carácter duradero de la cooperación de los medios obreros, campesinos e intelectuales, es la garantía de nuestra victoria. (...)

La amenaza que esgrime el poder totalitario contra la conciencia social, la educa-



ción y la cultura nacional, contra la moral social y las actitudes cívicas, puede ser evitada por una sociedad que piensa en términos políticos, que conoce su historia, que aprecia la cultura auténtica, que no se deja manipular ideológicamente. De ahí que, en lo inmediato, la tarea principal sea la propagación de un pensamiento independiente. (...)

En este terreno les corresponde un papel de primera línea a los intelectuales. La sociedad espera de ellos que obren por el bien de la colectividad. Nosotros prestaremos nuestro concurso a toda iniciativa independiente, crearemos fundaciones sociales y becas que permitan liberarse de la dependencia dictatorial. (...) Hay que desarrollar actividades autodidácticas, boletines sindicales, bibliotecas y publicaciones independientes, para ayudar a la reflexión social en los medios obreros y dar a conocer sus opiniones, apreciaciones e interpretaciones (...).

Las instituciones y las iniciativas, como la edición, la prensa, la radio y la educación, son nuestro bien común. Debemos ayudarles y protegerlos. La existencia y el desarrollo de estos canales proporcionan a la sociedad su autonomía y la preparan para vivir en una república democrática y autogestionada.

Los preparativos de la huelga general

La huelga general es el medio más poderoso de nuestra lucha, la participación masiva en las actividades que acabamos de exponer constituye una etapa importante de estos preparativos. El éxito de la huelga depende de numerosos factores. Entre los más importantes hay que mencionar:

—El grado de autoorganización y de autodeterminación social;

—La conciencia y la aceptación de los objetivos por parte de todos;

—La situación política internacional.

Estos mismos factores influirán en las posibilidades para la dictadura de preparar la intervención contra los trabajadores en huelga. Hasta ahora, el poder ha estado siempre dispuesto políticamente a utilizar todos los medios en su lucha contra la sociedad, y ha encontrado las fuerzas necesarias para quebrar la huelga. Pero el poder no puede mantener a largo plazo semejante plazo de preparación, pues ello implica unos costes políticos y sociales demasiado elevados. Desde ahora puede plantearse ya como perspectiva el período en que el arma de la huelga deberá ser un medio de lucha; estará a la orden del día cuando la decisión de la dictadura de utilizar la fuerza contra los obreros en huelga comporte una amenaza demasiado grave para el mantenimiento mismo de la existencia de esta dictadura.

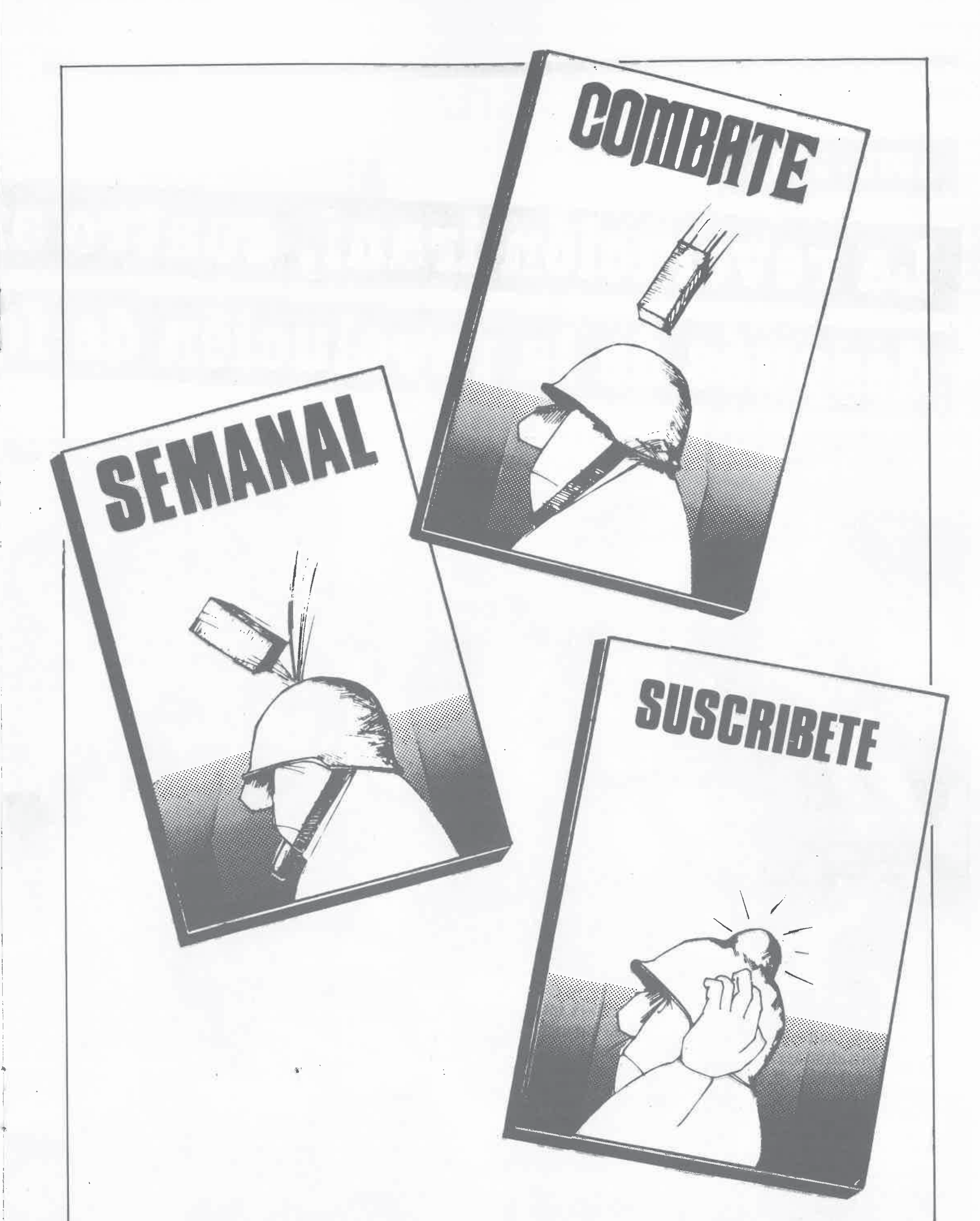
La perspectiva de la huelga general, que según nosotros es ineluctable, no hace que un programa de cambio evolutivo del sistema sea caduco. Muestra simplemente que existe un medio de derribar la dictadura actual y de crear las condiciones de apertura para realizar reformas democráticas.

Durante todo el período de preparación de la huelga general, debemos formular y poner a punto un programa social mínimo, que comporte un conjunto de postulados que aseguren la prosecución del proceso de reformas, y teniendo en cuenta, por lo demás, los imperativos derivados de las realidades políticas interiores y exteriores. (...).□

¿TE FALTA ALGUN NUMERO? SUSCRIBETE



Suscríbete a las publicaciones de la L.C.R.: Combate, Comunismo, Inprecor


COMBATE
SEMANAL
SUSCRIBETE

1979 - 1983

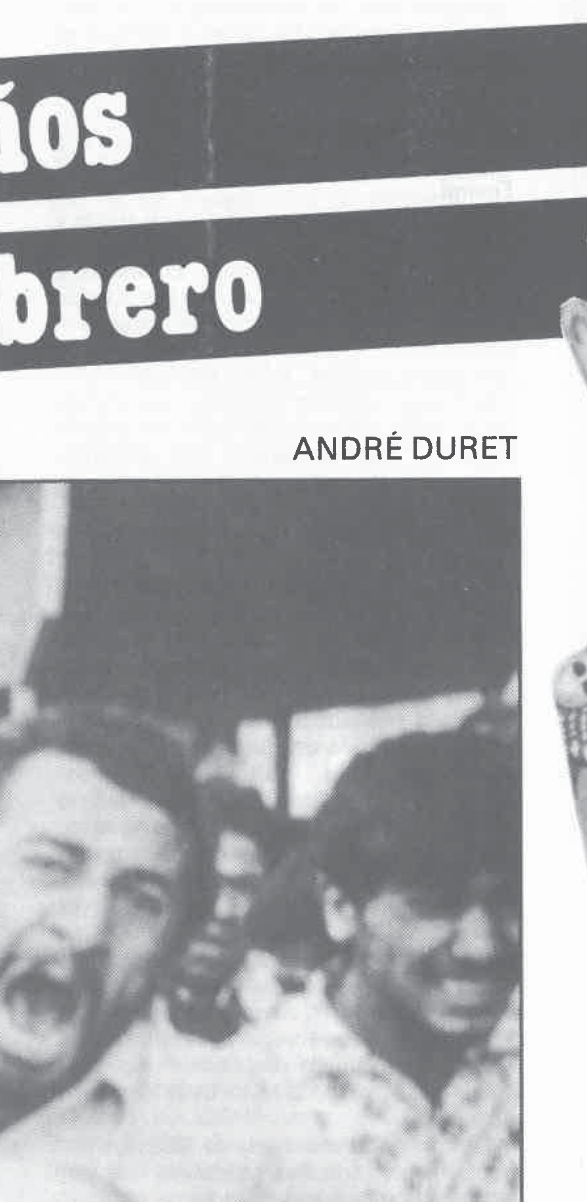
La revolución iraní, cuatro a
después de la revolución de fe



íos

brero

ANDRÉ DURET



Un estudiante muerto: otra bandera contra el Sha

El texto que sigue es el informe presentado al Secretariado Unificado de la IV Internacional, por *André Duret.* El S.U. votó a favor de la línea general del documento, en su reunión de enero de 1983.

HACE cuatro años, las masas iraníes derribaban la dictadura del sha. Washington perdía una de sus mayores piezas en Oriente Medio. Quedaba desarticulado así su dispositivo de control en una región estratégica para sus intereses. Desde entonces, el imperialismo norteamericano ha multiplicado sus esfuerzos para restablecer y reorganizar sus posiciones.

El impacto inicial de la revolución iraní ante las masas de toda la región ha sido considerable. Los regímenes conservadores, aliados de los Estados Unidos, mostraron inmediatamente su inquietud. El mar de fondo revolucionario golpeó al imperialismo en plena cara, pero los golpes ulteriores asestados al movimiento de masas por la dirección Jomeini ha debilitado la dinámica antiimperialista y minado el curso anticapitalista de la revolución iniciada en 1979.

I. DE LA CRISIS DEL REGIMEN PAHLAVI A LA INSURRECCION

LA insurrección de febrero de 1979 es el punto culminante de una crisis prolongada que se manifestó: 1) A través de las presiones ejercidas por fracciones de la burguesía vinculadas a la dinastía Palhavi a favor de la realización de "reformas"; 2) a través de una oposición al régimen imperial por parte de lo fundamental de la burguesía tradicional, vinculada al clero chiíta; 3) a través del auge de un poderoso movimiento de masas iniciado en 1976-77.

A mediados de los años setenta, ciertos sectores de la nueva burguesía se pronunciaron por la realización de reformas con miras a adaptar el sistema de dominación política y la estructura estatal a las necesidades de un capitalismo que conocía entonces un importante desarrollo. Estas reivindicaciones fueron retomadas en el interior mismo del aparato de Estado, por una fracción del partido oficial, Rastajiz. El gobierno de Djanchia Amuzegar reflejaba un intento del sha de responder a este "movimiento reformista". En el Frente Nacional Democrático, algunos veían esta evolución con buenos ojos.

Desde comienzos de los años sesenta nació y se reforzó una corriente de oposición al poder imperial que traducía la reacción de amplias capas de la burguesía tradicional. Esta no había tenido la posibilidad de entrar en los nuevos sectores de acumulación del capital (tanto en el terreno de la producción, y del comercio internacional, como en el de la distribución). El poder imperial y la burguesía que alimenta, gracias a su control directo del aparato de estado y los recursos que administra, convierten los nuevos ramos de inversión en un coto privado. En el terreno político, Mehdi Bazargan (Jama, Partido de la Liberación de Irán) y otras corrientes reunidas en el Frente Nacional Democrático, son los portavoces de estas capas burguesas despojadas. La



El pueblo iraní deseaba profundizar la dinámica antiimperialista y anticapitalista de su revolución.

pequeña burguesía apoya a estos elementos de oposición. El partido de Bazargan ha establecido lazos estrechos con el clero chiíta, cuya jerarquía venía enfrentándose, en parte, con el poder, desde 1963.

Bajo el impacto de la crisis económica de 1975-76, se produce un fuerte ascenso de las luchas de las masas oprimidas y explotadas.

En el transcurso del ascenso revolucionario, la jerarquía chiíta, en colaboración con Bazargan, asumirá la dirección política de estas diversas corrientes de oposición ascendente. En el seno mismo del aparato de Estado, incluso en el ejército, esta dirección alternativa se ganará el apoyo de algunos sectores. Esto explica en parte la permanencia de algunos restos de las instituciones del régimen del sha después de la insurrección.

Así, en el combate contra la dictadura se aglutinarán diversas capas y clases sociales. A partir del verano de 1976, se producen enfrentamientos entre el ejército y miles de habitantes de los suburbios del sur de Teherán, donde viven centenares de miles de personas, expulsadas de las zonas rurales bajo el efecto de la "revolución blanca" del sha. El ejército destruye las chabolas construídas en los territorios reservados a estos desterrados. Al mismo tiempo se inicia una primera oleada de huelgas (1976-77). La represión es brutal. Al calor de estas movilizaciones se producen las acciones lanzadas por poetas, escritores y abogados. Se centran en la defensa de los derechos democráticos. También estallan luchas estudiantiles. En el otoño de 1976 se desarrolla, en las universidades, una huelga general. Con el aval de Jimmy Carter, que acaba de ser elegido a la presidencia de los Estados Unidos, el sha ordena una violenta represión contra este movimiento. Las movilizaciones retroceden.

Entonces se inicia una nueva etapa del conflicto entre la jerarquía chiíta y el poder imperial. Después de los ataques lanzados contra Jomeini, en la prensa al servicio del régimen, en 1977, se organizan manifestaciones en Qom, después en Tabriz, donde se produce un levantamiento. El gobierno trata de aplastarlo, reprimiéndolo du-ramente. De hecho, desencadenará un ciclo de conmemoraciones (luto de 40 días) en torno a las víctimas de la represión, que marcará el ritmo del ascenso del movimiento de masas. El clero chiíta ofrece su infraestructura y su capacidad organizativa a los manifestantes. Trata de imponer su hegemonía en el movimiento de protesta. Sectores sustanciales de la burguesía tradicional y de la pequeña burguesía se unen a esta nueva dirección de la oposición contra el sha. La participación de las masas plebeyas en la lucha aumenta cada día. El 8 de septiembre, "el viernes negro", las fuerzas represivas del sha matan a centenares de manifestantes. El antagonismo entre el régimen y las masas alcanza un nivel superior. Ciertas fracciones del clero se inclinan por el compromiso y buscan una negociación con el primer ministro Charif Emami.

Pero la fuerza del movimiento de masas y su unión con las huelgas obreras impiden prácticamente el compromiso. En efecto, a partir de junio de 1978, las huelgas obreras conocen un nuevo impulso. Se estrecha la vinculación entre las reivindicaciones económicas y políticas. En las fábricas empiezan a surgir comités de huelga. La entrada de la clase obrera en el combate directo contra el sha confiere a este enfrentamiento social y político en vigor aún mayor. A partir del mes de octubre de 1978, la huelga general está a la orden del día y se convierte en un elemento central en el relanzamiento del ataque contra el régimen Pahlavi.

Sin embargo, las movilizaciones de masas en la calle siguen bajo la batuta del clero y de sus aliados en el Bazar. Los trabajadores han entrado en el conflicto una vez realizada una estructuración del movimiento de masas bajo la égida del clero chiíta. Además, la debilidad, por no decir la inexistencia, de las organizaciones obreras, fruto de años de represión, dejaba el campo libre al predominio del clero en las movilizaciones (los estudiantes de Teología desempeñarán un papel significativo en este terreno). La diplomacia de Moscú y de Pekín con respecto al sha no contribuyó poco a reforzar el descrédito del partido Tudeh (comunista) y cierta reserva hacia los que se reclamaban del comunismo. Este factor político jugó a favor de la dirección Jomeini.

En noviembre-diciembre de 1978, los enfrentamientos adquieren cada vez más violencia. Las masas se lanzan a una ofensiva directa contra el régimen. El ayatola Jomeini, en el exilio, lanza llamamientos a los manifestantes para que se ganen a los soldados a su causa. A su vez, los campesinos fluyen a las ciudades para unirse a la lucha contra la dictadura.

Todos los nuevos intentos emprendidos por determinados miembros del clero, como el ayatola Chariat Madari, para llegar a un compromiso con hombres como Amini o Chapur Bajtiar (una vez nombrado primer ministro en enero), fracasan bajo la presión de las masas y de la de Jomeini. Este último apoya la huelga general y rechaza cualquier compromiso.

Detrás de la dirección Jomeini se encuentra por tanto un bloque social que agrupa: a la burguesía tradicional (con sus distintas fracciones, los grandes y medianos comerciantes del bazar, los fabricantes); una pequeña burguesía numerosa (tenderos, pequeños y medianos artesa-

nos) y que dispone de una dilatada tradición organizativa (gremios y corporaciones); los trabajadores y las masas plebeyas (los *mostazafins,* los desheredados). Estos últimos abarcan a centenares de miles de emigrados recientes del campo y a un semiproletariado duramente golpeado por la crisis de la construcción que ofrecía una de las posibilidades de encontrar un trabajo precario. Un sector del lumpen proletariado participa también en los combates.

Para muchos de estos desarraigados, la organización religiosa, presente en los suburbios, constituye un sustituto de las estructuras comunitarias de la aldea y una red de ayuda social (caridad). La denuncia de la opulencia de "los nuevos ricos" del régimen imperial, por parte del clero, encuentra un eco profundo en estos sectores de la población expuestos a los ataques repetidos de las fuerzas represivas y a toda clase de vejaciones.

Los comerciantes ricos financiaron las movilizaciones. Los pequeños comerciantes vendían productos a las masas empobrecidas, a bajo precio. Las mesquitas se convirtieron en un lugar privilegiado para la organización de la lucha contra la dictadura. De hecho, las masas utilizan los canales de expresión que no había podido destruir la dictadura Pahlavi. Esto consolida el control de la dirección Jomeini sobre el movimiento de masas, máxime cuando aparece como un viejo contrincante del sha. De hecho, desde 1963 declara su hostilidad a las medidas relacionadas con la "revolución blanca". Esta última comportaba un proyecto de formación de una nueva burguesía. Minaba las bases tradicionales del clero chiíta y las instituciones locales de notables, a las que estaba tradicionalmente vinculado. La oposición de Jomeini a estas medidas se derivaba por tanto de un punto de vista estrictamente conservador. Las terribles consecuencias de la "revolución blanca" para capas enteras de la población, sin embargo, revalorizarán las posturas de Jomeini. Finalmente, aunque fue partidario del derrocamiento de Mossadegh en 1953, no dejó de denunciar la influencia del imperialismo y de la "occidentalización" en Irán. Estas acusaciones encontrarán resonancia en el profundo sentimiento de las capas populares.

Las huelgas obreras desempeñaron un papel importante en el derrocamiento de la monarquía. Contribuyeron a paralizar los centros neurálgicos de la economía (petróleo). Multiplicaron la fuerza de las movilizaciones populares. Pero la clase obrera no se afirmó como vanguardia organizativa y política de la lucha contra la dictadura, a escala de todo el país. La Organización de los Muyahedines del Pueblo de Irán (OMPI) o los Fedayines del Pueblo, diezmados por la represión, son poco aptas, dada su línea política y su programa, para proponer una perspectiva política propia, y menos aún una fuerza de estructuración. Así, el proceso de diferenciación política del bloque social agrupado detrás de Jomeini, tendente a aumentar la influencia proletaria, tuvo grandes dificultades para profundizarse.

En Enero de 1979, se crea un Consejo de la Revolución islámica, en el que se reúnen Abdollassan Bani Sadr, Mehdi Bazargan, Yazdi, Sadegh Gobdzadeh y los dignatarios religiosos como Behechti, Mottaheri, Rafsandjani, Bahonar (todos ellos antiguos estudiantes de teología de Jomeini), y el propio Jomeini. Su composición permaneció secreta durante mucho tiempo.

En el transcurso de la huelga general de 1979, en los barrios proliferan los comités. A partir de agosto de 1978, en Teherán, se crean 14 centros de comités (Imam Komiteh), bajo la dirección de Madhavi Kani, para tratar de controlar el movimiento. En otras ciudades se forman estructuras idénticas. Madhavi Kani, puesto en libertad junto con otros molahs por el sha, no ocultaba sus intenciones de combatir la influencia de la izquierda en los comités. Los centros de comités creados bajo su dirección serán una palanca eficaz para tomar el control de los organismos de masas en los barrios.

Bajo los golpes de las manifestaciones tras la salida del sha (16 de enero de 1979) y la llegada triunfal de Jomeini (1° de febrero), se descompone el aparato de dominación de la dinastía (ejército, patronazgos, burocracia del Estado).

Jomeini nombra a Mehdi Bazargan como primer ministro "real". Surge una situación de "doble poder" entre Chapour Baktiar y el representante del Consejo de la Revolución Islámica. A comienzos de febrero, el Consejo de la Revolución Islámica entabla negociaciones con el mando del ejército imperial, en el que una fracción manifiesta su voluntad de colaborar con el poder naciente. Sin embargo, el 9 de febrero, en respuesta al ataque de una unidad de *homofars* (técnicos de la aviación) por la guardia imperial, se organiza una respuesta militar masiva. Los mudyahedines y feyadines, junto con los homofars, inician la insurrección el 10-11 de febrero de 1979. Las masas se lanzan inmediatamente a la acción militar. Son tomadas las cárceles y los cuarteles. Los agentes de la SAVAK (policía del sha creada con la ayuda de la CIA norteamericana) son detenidos. El ejército imperial se descompone. Al comienzo, la dirección Jomeini se opone a la insurrección. Se unirá a ella una vez iniciado el levantamiento, para evitar que la desborde. El estado mayor del ejército, en particular el general Gharabaghi, observa una especie de neutralidad. Jomeini lanza llamamientos para frenar los ataques contra el Ejército y para preservar al menos alguna parte del mismo.

Ante esta explosión revolucionaria, la dirección Jomeini manifiesta tres preocupaciones fundamentales:

•En primer lugar, trata de evitar que estalle en mil pedazos el aparato de Estado del sha. No es que desee conservarlo como tal, sino que teme que se produzca un desbordamiento incontrolable del movimiento de masas en ausencia de unas estructuras adecuadas para controlarlo. Formará inmediatamente, desde arriba, un gobierno: las masas no tienen derecho a elegir. Dada la consolidación insuficiente de los organismos y de las instituciones en las que podía apoyarse, y las divergencias surgidas en el seno de la propia jerarquía chiíta en torno al grado necesario de participación del clero en la vida política, la dirección Jomeini crea el gobierno Bazargan, situado bajo su estricto control.

•En segundo lugar, insiste en asumir el control del conjunto de los comités. Lentamente se produce a la centralización de los comités, bajo su autoridad. Los comités incontrolados son disueltos. El consejo militar central, creado al comienzo de la insurrección, se esfuerza en desarmar a las masas. A partir de los comités se reclutará una buena parte de los miembros que constituirán la columna vertebral del futuro ejército de guardias de la revolución, los *pasdaran.* La voluntad de estructurar el movimiento de masas se afirma claramente. Un aspecto de esta política se traduce inmediatamente en los ataques lanzados contra una prensa que, como en todas las revoluciones, traduce la efervescencia de las ideas y la multiplicidad de las iniciativas de todos los sectores de la sociedad.

•Finalmente, a partir del 18 de febrero, la dirección Jomeini pone el acento en la necesidad de reanudar la producción y de establecer el orden en las fábricas.

Desde el comienzo de la revolución, toda la orientación de la dirección Jomeini les plantea a los revolucionarios una tarea central: la de asegurar la independencia del movimiento de masas para profundizar la dinámica antiimperialista y anticapitalista de la revolución.

II. EL AUGE DE LAS LUCHAS Y LA RESPUESTA DE JOMEINI (1979-1980)

LA supresión del clima de terror establecido por el sha liberó la actividad y las reivindicaciones de los trabajadores, de los campesinos, de las minorías nacionales y del movimiento estudiantil. Proliferan las publicaciones políticas, surgen debates entre todas las fuerzas políticas. En las fábricas, en el campo y en la

universidad se hace notar el aliento liberador de la revolución. Este auge de la acción de masas es el rasgo característico de los comienzos de la revolución. La dinámica antiimperialista y anticapitalista de la acción de los trabajadores aparece entonces, a los ojos de diversos sectores de la clase dominante vinculados a la dirección jomeinista, como el peligro principal. Se establece un acuerdo, que abarca desde Bazargan hasta Jomeini, pasando por Bani Sadr y Chariat Madari, en torno a la necesidad de poner fin a esta "anarquía".

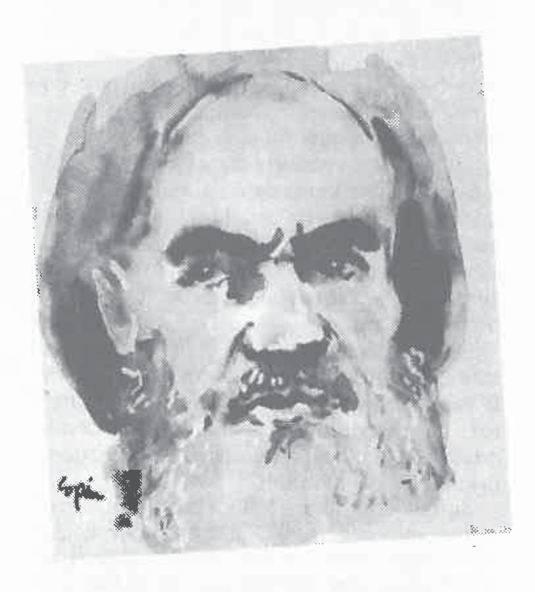
La clase obrera en la lucha

La clase obrera, por primera vez en muchos decenios, se dota libremente de sus propios instrumentos de lucha. Aparecen sindicatos en los sectores económicos tradicionales (textil, cuero, artes gráficas). Proliferan los *shoras* (consejos de fábrica). Tienen su origen en los comités de huelga. Esta clase obrera es relativamente joven. En gran parte es el producto el éxodo rural de los últimos 15 años. Su gran mayoría trabaja en empresas de pequeño tamaño, o en la construcción. Sus polos más importantes y combativos están organizados en las grandes concentraciones de la producción petrolífera, del gas, de la siderurgia y de las fábricas de montaje de automóviles. La represión del régimen Pahlavi le había impedido tener sus propias organizaciones. Por consiguiente, su experiencia es muy limitada en el terreno sindical, y sobre todo político. Sin embargo, en el transcurso del ascenso insurreccional, descubrió su fuerza y su capacidad organizativa.

Durante el año 1979 y a comienzos de 1980 se desarrollarán las huelgas, pese a las amenazas de los representantes del gobierno y de los dirigentes religiosos. Las reivindicaciones obreras centrales son: 40 horas de trabajo semanales; tiempo de trabajo igual para los funcionarios y los obreros; reapertura de las fábricas cerradas por sus propietarios que se han ido al exilio, y reanudación del trabajo en las fábricas abandonadas; elección de responsables de las empresas nacionalizadas en lugar de su nombramiento por el Estado; readmisión de los trabajadores despedidos por su actividad durante la lucha contra la dictadura; supresión del artículo 33 de la ley que rige las relaciones laborales; el pago de los atrasos salariales; aumentos de salarios; eliminación de los antiguos agentes de la dictadura; reivindicaciones vinculadas a diversas iniciativas de control obrero. La nacionalización de la industria, en junio y julio de 1979, planteará inmediatamente el problema de las relaciones entre los directores nombrados por el gobierno y los shoras. El régimen confirma la supremacía de los primeros sobre los segundos.

Se crean diversas coordinadoras de shoras: en la industria petrolífera del Jusistán, en la siderurgia (en Ajvas, en el terreno de la producción, y en la administración en Teherán), en la pequeña y media industria de Guilan, en el sector de la construcción al sur de Teherán. Se crea una coordinadora de shoras en el Gostaresh ("Organización para el Desarrollo y la Modernización de la industria iraní" que abarca a empresas modernas que se habían beneficiado de la ayuda del régimen imperial), y organiza manifestaciones. Se constituye un Hogar de los Consejos del Este y del Oeste de Teherán. Se ponen de manifiesto los primeros indicios de una conquista de la independencia organizativa por parte de la clase obrera.

El paro alcanza niveles importantes. A



comienzos del año 1980, el Banco Central estima en tres millones el número de personas que están sin trabajo (un tercio de la población activa). De ahí que en numerosos centros industriales se movilicen los parados. En Teherán, Amon, Broojerd, Hamadan, Kerman, Masjid Soleiman, organizan "sentadas". En varias ocasiones ocupan edificios públicos. Los choques con los pasdaran son numerosos: en Ispahan, en abril de 1979, en Masjid Soleiman en octubre de 1979, y en Broojerd en enero de 1980. En esta última ciudad, la población se solidariza masivamente con los parados, y el gobernador abandonará la ciudad.

El gobierno, para responder a este empuje, ofrece un "préstamo" de 1000 tomans por seis meses, a los parados (el salario mínimo mensual es entonces de 1100 tomans). Este préstamo deberá ser devuelto cuando los trabajadores en paro encuentren un trabajo. Unos 350.000 parados se "beneficiarán" de esta ayuda. La debilidad del movimiento obrero organizado, la ausencia de una dirección, impiden una convergencia entre el movimiento de los parados y el de los trabajadores activos. Además en las numerosísimas empresas nacionalizadas, no sólo se han aumentado los horarios de los obreros, sino que a pesar del caos reciben regularmente la paga a final de cada mes (el Banco Central apoya totalmente a las empresas nacionalizadas). Todo ello, junto con la acción represiva de los pasdaran, explica la pérdida de impulso del movimiento de los parados en 1980.

Durante todo este período, las organizaciones Fedayin, Peykar y Mouyahedin, ganan una cierta base en la clase obrera. También el partido Tudeh (comunista) dispone de cierta influencia, pero bastante inferior a su presencia en el aparato de Estado, y sobre todo en la administración del sector nacionalizado.

Para contrarrestar la actividad obrera, el régimen adopta, en mayo de 1979, una serie de leyes que dificultan la actividad sindical. En las empresas sigue utilizándose la legislación antiobrera de la época del sha, entre otras la que afecta a "la actividad de los comunistas". Jomeini declara: *«Los que incitan a los obreros a seguir haciendo huelgas son culpables de traición»*. El ataque contra los shoras independientes se produce muy pronto. Para poner fin a las coordinadoras independientes de shoras, elementos estratégicos para la conquista de la independencia por parte de la clase obrera, se formarán coordinadoras de shoras islámicos vinculados a la república islámica y al Partido de la República Islámica (PRI).

Este proceso de usurpación no se produce sin dificultades. Se unen los shoras islámicos en la Coordinadora de la Escuela Politécnica (junio de 1979). En la dirección de esta coordinadora figuran representantes del PRI, del Movimiento de los musulmanes combatientes del doctor Peyman (que publica el periódico Ommat, que defiende posiciones islámicas socializantes) y de los Muyahedines. La presión de las luchas obreras hace que la presión de los shoras tiendan a menudo a escapar a su autoridad tutelar. El PRI se da cuenta muy pronto de que para controlar los shoras es necesario crear una coordinadora colocada más directamente bajo su mando. Esto se realizará a comienzos de 1980, con la toma del control de la Casa del Obrero. El proceso de domesticación de los shoras no será lineal. Esto lo ilustran los conflictos que se produjeron en Tabriz, Ahwaz y Teherán, entre trabajadores y representantes del nuevo poder, en relación con la actividad independiente de los shoras.

Toda la política de la dirección jomeinista, coherente con su orientación ideológica global, está destinada a impedir la existencia de un movimiento obrero independiente, que disponga de sus propios organismos, de su propia prensa, de la libertad de discusión y de debate, de una expresión ideológica que no se atenga a la de Jomeini, el "docto".

Los campesinos en la revolución

En los meses que siguieron al derrocamiento de la dinastía Pahlavi, se producirá un impulso de las luchas campesinas. Sin embargo, no hubo ningún movimiento de conjunto. Esto se explica tanto por la heterogeneidad de las condiciones sociales de vida de los campesinos esparcidos en más de 70.000 áreas: sistemas distintos de explotación, peso desigual de la gran propiedad terrateniente, efectos diversificados de la reforma agraria del sha, tradiciones de lucha, como en Guilan o Mazandaran. En estas regiones, la familia imperial y sus allegados habían acaparado numerosas tierras. Además, las luchas campesinas se entremezclan a menudo con las luchas de liberación nacional, como sucede en algunas partes del Kurdistán o en el Turcomansarah, donde hay numerosos grandes propietarios absentistas.

En centenares de aldeas, los campesinos ocupan las tierras. Los gendarmes habían abandonado sus puestos masivamente, temiendo las represalias de los campesinos. La falta de tierras era muy resentida por la gran mayoría de campesinos. La obligación de emigrar a la ciudad era la prueba concreta de ello.

Este movimiento no fue estimulado por el clero chiíta. Además, los *molas* sólo contaban con una presencia permanente en unas cinco mil aldeas. Desde el punto de vista social, estaban estrechamente vinculados a los sectores propietarios medianos y grandes, los únicos capaces de financiar las actividades religiosas y de pagar el impuesto religioso.

El movimiento de ocupación de tierras fue muy espontáneo. En la provincia de Fars, se inicia a comienzos de 1980. Los jóvenes campesinos que habían emigrado hacía poco a la ciudad, y que fueron ganados para la revolución, volvieron a la aldea, donde impulsaron y apoyaron estas ocupaciones. En algunos casos, los pasdaran enviados en auxilio de los propietarios tomaron partido por los campesinos.

Sin embargo, la política del gobierno y de la dirección jomeinista se opuso a las ocupaciones de tierras. Las unidades de pasdaran, venidas de las ciudades, se colocaron al lado de los propietarios y ayudaron a veces a los notables locales, vinculados al nuevo régimen, a ocupar tierras. Los campesinos fueron expulsados de las tierras ocupadas, como sucedió en la región Kermansarah. El enfrentamiento fue particularmente rudo en el Kurdistán y el Turcomansarah. En Orumieh y Nagadeh (Kurdistán), los grandes propietarios atacaron las aldeas y recuperaron las tierras. En mayo de 1979, el gobierno entregó armas a los propietarios de Piranshar, para combatir contra los campesinos pobres. En Turcomansarah, las unidades de pasdaran, fundamentalmente persas, atacaron los comités de campesinos y trataron de expulsarlos de las tierras ocupadas.



En estas regiones, los propietarios y el nuevo régimen utilizaron dos argumentos políticos para justificar su acción: por un lado, estos movimientos ponían en tela de juicio la unidad de Irán, y por otro se enfrentaban al "orden islámico", que garantiza la propiedad privada.

En diversas regiones, bajo la protección de los pasdaran y del clero local, se formará una capa de *kulaks,* que se aprovecha de la redistribución de tierras. En otras regiones, según los "principios del Islam", la explotación agraria es sutituida por la ganadería.

Uno de los efectos paradójicos de la revolución fue el de acentuar la emigración de los campesinos hacia las ciudades. No sólo podían desplazarse con mayor libertad, sino que sobre todo se veían atraídos por las promesas demagógicas del nuevo régimen (ayuda masiva prometida a los "desheredados"). Así, durante el primer año de la revolución, más de un millón y medio de habitantes de las zonas rurales afluyeron a Teherán. Se tomarán medidas represivas contra los vendedores ambulantes, cuyo número aumentó vertiginosamente a causa de estas migraciones.

Para responder a la crisis abierta en el campo, a finales de 1979, se prepara una ley de reforma agraria. El consejo de la revolución islámica promulga esta ley. Un sector de los *molas* se opone (por ejemplo, el ayatola Golpayegani). Concentra sus críticas particularmente en los dos artículos relativos al reparto de las tierras de los grandes propietarios. De este modo se expresaban los intereses combinados de estos últimos y del clero terrateniente. Según ellos, la ley de reforma agraria se "opone" a los principios del Islam. Entonces, el Consejo de la Revolución Islámica la suspende. No será presentada en el Parlamento antes de 1981.

Creación de comités en cuyo seno figuran molas, terratenientes, pasdaran y campesinos, para oponerse a los consejos de aldea formados bajo la égida de los campesinos pobres; represión y obstáculos legales a la radicalización de la lucha de los campesinos pobres; represión y obstáculos legales a la radicalización de la lucha de los campesinos empobrecidos contra los terratenientes y los intermediarios que comercializan la producción: estas fueron las opciones de las esferas dirigentes de la República islámica, para responder a las necesidades de las masas rurales.

La resistencia de las minorías nacionales

La lucha de las minorías nacionales se inserta en el impetuoso ascenso revolucionario de comienzos de 1979. Los kurdos de Irán, que son más de 5 millones, fundamentalmente de religión sunita, son la punta de lanza de este combate. Cuentan con una importante tradición combativa y con cuadros nacionalistas forjados en la lucha y experimentados. En Kurdistán no pudieron crearse ni cuerpos de pasdarán ni cuerpos islámicos. Así, el régimen islámico no dispone allí de ningún instrumento de control de las masas.

Desde el 19 de febrero de 1979, los representantes del movimiento nacional kurdo presentan sus reivindicaciones al Gobierno Provisional. El 1° de marzo, el jeque Sayed Ezzadin Hosseini, líder religioso y dirigente nacionalista kurdo, afirma que la reivindicación autonómica no implica la separación de Irán. Insiste en la voluntad del pueblo kurdo de participar en la revolución, pero también en su determinación de luchar por el derecho a la autodeterminación.

La respuesta del gobierno de Bazargan, de común acuerdo con la dirección Jomeini, es clara: no a la autonomía. Esta orientación viene confirmada en el primer proyecto de Constitución que empieza a circular en junio de 1979. Frente a esta política chovinista del gobierno central, se inicia la movilización de los kurdos. El 26 de junio, el Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) envía una carta abierta a Jomeini, en la que le pregunta por qué el gobierno presta su apoyo a los *"aghas* (terratenientes), *que hasta el último momento, apoyaron al sha»*. En julio y agosto de 1979 se multiplican los ataques militares contra la población kurda y los combatientes peshmergas. En repetidas ocasiones, Jomeini denuncia a los kurdos como *«comunistas, apoyados por el extranjero, enemigos de la revolución»*. El 18 de agosto, el PDKI queda prohibido. Jomeini se convierte en comandante en jefe del ejército, y se declara una auténtica guerra al pueblo kurdo, en agosto-septiembre 1979. El Ejército bombardea las ciudades de Baneh y Sanandai. También ocupa Mahabad.

Este ataque coincide con el primer intento de reducir los derechos democráticos en general: medidas sobre el estatuto de la mujer, amenazas contra las organizaciones revolucionarias y cierre de sus locales públicos, ley de prensa, prohibición del periódico Ayandegan.

El ayatollah Jaljali ordena la ejecución de jóvenes combatientes kurdos (peshmergas). Las manifestaciones de protesta son masivas en Sanandai y en Mahabad. Esto confirma la capacidad del pueblo kurdo para hacer frente a los ataques del gobierno central. El Kurdistán es el talón de Aquiles del nuevo régimen. Bazargan explica así las razones fundamentales de la guerra de Jomeini contra los kurdos:

- Dar una lección a todas las minorías nacionales;
- *«Apoyar la moral y levantar de nuevo la columna vertebral de un Ejército desmoralizado».*
- Impedir que las organizaciones de izquierda hagan del Kurdistán su santuario.

La resistencia militar de los kurdos es muy eficaz. Las tropas del régimen tendrán que ceder cada vez más terreno, y los peshmergas ponen en jaque al gobierno de Teherán.

La tendencia al desarrollo de movilizaciones de las minorías nacionales oprimidas se pone de manifiesto en todas partes. En el Jusistán aparecen organizaciones culturales y políticas. Se coordinarán en la Organización Arabe Cultural y Política, uno de cuyos dirigentes es el jeque Mohamed Taher Shobeir Yagani. Los árabes (más de 3 millones) reivindican el control sobre el gobierno local, el derecho a reanimar la cultura nacional y a enseñar el árabe a sus hijos en las escuelas, el fin de las discriminaciones en el puesto de trabajo, un reparto más equitativo de las rentas del petróleo. El 25 de abril presentan estas reivindicaciones en Teherán. Los pasdaran acudirán rápidamente a reprimir este movimiento en Yorramchar y Ajras. Se suceden las detenciones y ejecuciones. Entre el 30 de mayo y el 4 de junio se decreta el estado de excepción en la región. El Frente Popular para la Liberación de Palestina, de Georges Habache, es acusado por los dirigentes chiítas de apoyar al movimiento. La Organización de Liberación de Palestina (OLP), que ha abierto unas oficinas en Ajras, debe defenderse frente a estas acusaciones.

En el Turcomansarah, donde la familia imperial había acaparado grandes propiedades, los campesinos turcomanos ocupan las tierras. Queman las haciendas de los grandes propietarios. Aparecen organizaciones sindicales campesinas: en numerosas aldeas se eligen shoras campesinos. Los campesinos cuentan con el apoyo de los feyadines. Entre mayo y septiembre, en la región de Gonbad, son atacados por los pasdarán y el ejército. Varios dirigentes de los shoras campesinos serán ejecutados. El poder central no sólo se opone a las ocupaciones de tierras (es cierto que algunas las realizan propietarios que querían "recuperar" tierras de la familia imperial), sino que también quiere ganarle la partida a una minoría que afirma su oposición al régimen de la República islámica (boicot al referéndum). Los Feyadin, que no asumen la cuestión nacional, serán incapaces de dar una salida a esta lucha, y de consolidarla.

En el Aserbeichán estalla una oleada de manifestaciones en diciembre de 1979 y enero de 1980. Una de sus reivindicaciones centrales será la autonomía del Aserbeichán. Este movimiento se combina con la oposición entre el ayatola Chariat Madari y Jomeini. El primero se opone firmemente al proyecto de Constitución que otorga todo el poder a Jomeini. El Partido Republicano del Pueblo Musulman, dirigido por Andholassan Rostamjani apoya a Chariat Madari. Este último utiliza el movimiento para negociar en posición de fuerza con Jomeini, y para reforzar su base en esta región estratégica que da acceso al Kurdistán. Los enfrentamientos serán violentos, máxime cuando ambos bandos disponen de una fuerza armada. El 10 de diciembre de 1979, Bani Sadr se ve obligado a reconocer la realidad "del problema nacional". Entablará negociaciones para desorientar al movimiento reivindicativo. Finalmente, una mezcla de represión, de promesas y de dominación de una dirección burguesa tradicional sobre este movimiento nacional, le llevará a un callejón sin salida. Pero la espina sigue clavada en el cuello del régimen de la República islámica.

La represión apareció desde el comienzo como la única respuesta del nuevo régimen a las legítimas reivindicaciones de las minorías nacionales oprimidas. Pues sus posibilidades de controlar este género de movimientos, por medio de las instituciones creadas (Comités, pasdarán, etc. eran muy reducidas).

Los estudiantes estuvieron a menudo al frente de la lucha contra la dictadura del sha. Después de febrero de 1979, la Universidad se convirtió en un lugar de libre debate político e ideológico. Se denotaba la influencia de las corrientes religiosas vinculadas a la dirección Jomeini. Pero la Universidad era también un bastión de organizaciones como los muyahedines y los fedayines. El clero reaccionó frente al libre desenvolvimiento de las ideas, al refuerzo de organizaciones que se oponían a la orientación ideológica dominante y que buscaban sobre todo articular los movimientos reivindicativos de las masas trabajadoras con miras a profundizar la revolución.

Existía un acuerdo entre Bazargan y Jomeini de cerrarle el paso a la izquierda en la Universidad. Pero surgió una divergencia en torno al futuro de esta institución.

Para los sectores vinculados a la burguesía capitalista, la Universidad debía conservar su función de formación de "cuadros" técnicos, científicos y administrativos, necesarios para el funcionamiento normal del aparato de Estado y de la economía. Para el clero chiíta integrista, había que "islamizar" la universidad, lanzar en ella "una revolución cultural". La batalla en torno al futuro de la Universidad se inscribía en el marco de las luchas de influencias entre fracciones del clero y de la burguesía, con miras a controlar el aparato de Estado.

Un breve análisis de la lucha emprendida en las principales fuerzas sociales revela así, que desde el comienzo de la revolución la dirección Jomeini utilizará una doble táctica para imponer su autoridad a los diferentes componentes del movimiento de masas:

•Donde le es más fácil afirmar su control, pone el acento en una represión selectiva, en retrocesos tácticos, con concesiones económicas, en la demagogia y en un esfuerzo sistemático para controlar al movimiento de masas.

•Donde no puede aplicar este método, sobre todo en el caso de las minorías nacionales, recurre ante todo a la represión masiva. Así, el 30 de agosto de 1979, Jomeini afirma en dirección a los kurdos: *«Sereis enterrados si no abandonáis el escenario».*

La fuerza del movimiento de masas y la profunda crisis del aparato de Estado, sin embargo, permitirán que los trabajadores, los campesinos y las minorías nacionales, conquisten, en un primer momento, toda una serie de ventajas (salario, tierras, créditos ventajosos contra la construcción de viviendas, etc.) y unos instrumentos de lucha (shoras, comités de aldea, armamento en el Kurdistán, posibilidades de acción para las organizaciones de izquierda). Es la defensa de estas conquistas la que estará en el centro del desarrollo ulterior de la revolución.

III. DEL PRIMER REFERENDUM A LA OCUPACION DE LA EMBAJADA USA

A partir de febrero de 1979, el primer objetivo de las fracciones burguesas que habían apoyado, más o menos, la lucha contra la dinastía Pahlavi, es el retorno a la calma, a la normalización y al relanzamiento económico. Para canalizar el movimiento popular, cuya amplitud rebasa la de las revoluciones de antaño, la burguesía está dispuesta a todas las alianzas. Pero a diferencia del pasado, esta vez las fuerzas políticas tradicionales que representan a la burguesía (Frente Nacional Democrático, Partido de la Liberación del Irán) se encuentran en una situación de subordinación al clero. La relación de fuerzas que presidió la alianza entre los molas, el bazar, las profesiones liberales y una parte de la burocracia del aparato de Estado heredado de la monarquía, favorecía a los primeros, que se apoyaban en el prestigio de Jomeini. La fracción mayoritaria del clero en el Consejo de la Revolución



Guardianes de la Revolución iraníes montan guardia ante las puertas de la embajada norteamericana en Teherán, ocupada desde el jueves por estudiantes islámicos.

Islámica necesitaba tiempo para establecer un fuerte partido político, el Partido de la República Islámica (PRI), así como unas estructuras administrativas, militares y judiciales. Estas debían servir para refrenar al antiguo aparato administrativo del que desconfiaban profundamente Jomeini y sus partidarios, o bien para sustituirlo. Sin embargo, lo fundamental era que no apareciera desde el comienzo un vacío en el que pudieran penetrar las masas con sus propias organizaciones.

Desde los primeros pasos de la revolución se agudiza el antagonismo entre Bazargan, su personal gubernamental, y los dignatarios chiítas. La alianza entre Bazargan y Jomeini sólo podía ser efímera. Bazargan no ve con buenos ojos ni la presencia del clero en el aparato de Estado, ni el desarrollo de "organos revolucionarios" (Comités, tribunales revolucionarios) estrechamente controlados por el clero, que tienden a sustituir los mecanismos normales del Estado burgués. Estas instituciones debían permitir la hegemonía del clero chiíta y de sus aliados. Serán constantemente objeto de luchas entre las diversas fracciones del clero, que se desgarran entre sí.

En cuanto a Bazargan y sus partidarios, tratan fundamentalmente de racionalizar el desarrollo capitalista iraní, reforzando las posiciones de los sectores burgueses vinculados a una ampliación del mercado interior. Si Bazargán acepta la nacionalización de la banca (que casi en su totalidad está en bancarrota) y de los seguros (junio-julio de 1979), no es un ardiente partidario de la nacionalización de la industria. A pesar de ello, esta será decretada por el Consejo de la Revolución Islámica. La mayor parte de las empresas estaban muy endeudadas con los bancos, muy por encima de sus haberes. Estas medidas afectaban básicamente a los sectores de la gran burguesía reciente, vinculada al régimen del sha, y que había huído. Sin embargo, los sectores burgueses que se reconocían en el gobierno de Bazargan temían la dinámica que podía desprenderse de la combinación de estas medidas con un movimiento de masas que estaba aún en pleno auge. Además, el Bazar temía que el comercio exterior fuera acaparado por el Estado, secándose así particialmente una de sus principales fuentes de ingresos. Finalmente, el primer ministro del gobierno provisional establecido por Jomeini no quería modificar las relaciones entre Irán y las potencias imperialistas, que veían en él la principal carta a jugar, en lo que quedaba del antiguo aparato de Estado.

Jomeini propone inmediatamente un referéndum, en marzo de 1979. La opción que se ofrece a las masas, es: monarquía o república islámica. La abstención es muy alta en el Kurdistán y en el Turcomansarah. El voto a favor de la república islámica —que de hecho es, para las masas, una manera de confirmar su combate contra la dictadura del sha y su voluntad de cambio—, es por supuesto mayoritario, pero la dirección Jomeini proclama que el 99% de los electores se ha mostrado favorables al nuevo régimen.

Para Jomeini, este referéndum es una manera de evitar cualquier convocatoria de una auténtica asamblea constituyente, que él había prometido formalmente. En cambio, en agosto se reunirá una Asamblea de expertos, en el mismo momento en que culmina la primera oleada represiva. Son los molas los que dictan la ley. En esta asamblea detentan el 90% de los 75 mandatos. Se producirá una batalla en torno a

la cuestión del poder otorgado a Jomeini, en el marco de la Constitución, entre Bazargán y los partidarios de Jomeini. A comienzos de diciembre de 1979 se adopta la Constitución mediante un nuevo referéndum. Todas estas medidas están destinadas a legitimar el régimen de la república islámica, a consolidar un marco legal en el que podrán desarrollarse las nuevas instituciones de la revolución islámica.

Pero son muchos los elementos que vendrán a obstaculizar estos proyectos de estabilización. Por un lado, la victoria de los combatientes kurdos obliga al poder a dar marcha atrás, dando así un golpe a los proyectos de estabilización y de reorganización del nuevo régimen. En octubre-noviembre de 1979 se abre un período en que es la represión la que marca el paso. El movimiento de masas en las fábricas y en los barrios manifiesta su vigor. Por otro lado, proliferan los conflictos entre los medios que intentan estabilizar la situación en el marco de un proyecto del tipo Bazargan, y las fracciones del clero chiíta.

La ocupación de la embajada norteamericana, en noviembre de 1979, debe insertarse en este contexto. La organización los pasdarán junto con una fracción de los "estudiantes de la línea del Imán". A partir de la ocupación, Jomeini habla de una "segunda revolución". Con este término no define un salto adelante en el desarrollo de la organización propia de los trabajadores, ni la aplicación de una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas concretas. No. En realidad quiere subrayar que la ocupación de la embajada iba a favorecer el proceso de consolidación del régimen de la República Islámica y la recuperación de la autoridad política por parte de las esferas dirigentes de la jerarquía chiíta.

De entrada, la ocupación de la embajada aparece a los ojos de una parte importante de las masas trabajadoras como la terminación del derrocamiento del sha y una ruptura definitiva con el imperialismo norteamericano, identificado con razón con la feroz dictadura de los Pahlavis. Dos días después de iniciarse la ocupación de la embajada, la dimisión de Bazargán, que aparecía vinculado a las esferas imperialistas, refuerza esta convicción política de las masas. Además, Bazargán puede ser utilizado a propósito como chivo expiatorio de toda la política de Jomeini.

La ocupación de la embajada y la toma de rehenes suscitan una movilización popular para la que sólo se proponen unos objetivos muy vagos, o que a veces se oponen a los que se dan, en aquel mismo momento, algunas luchas obreras. Por consiguiente, no se concretará en el apoyo a un programa social y economico que conduzca efectivamente a romper los lazos de dependencia de la economía iraní con respecto al imperialismo.

Por un lado, las manifestaciones delante de la embajada norteamericana, que expresaban un profundo sentimiento antiimperialista en el pueblo, fueron canalizadas, impidiéndose su unión con el movimiento de los shoras en las fábricas (que entonces estaba creciendo y cuyas reivindicaciones radicalizándose), de modo que no pudo desarrollarse hasta convertirse en un polo de referencia alternativo a Jomeini. Por otro lado, se afirmó el control político de la dirección Jomeini, que hizo uso de la demagogia antiimperialista, cosa que no es nueva en la historia de la revolución colonial.

Lo fundamental de las fuerzas políticas de izquierda cayó en la trampa tendida por Joemini. O bien afirmaron que se trataba simplemente de una maniobra de Jomeini y se contentaron con denunciarla, sin esforzarse por aprovechar el ascenso de la radicalización para ofrecerles salida en las empresas, en el terreno de las reivindicaciones obreras y de la organización de masas. O bien disociaron la lucha contra el imperialismo de la lucha contra la clase dominante y el régimen de la República Islámica. Separaron la lucha contra el imperialismo del curso real de la lucha de clases en Irán. Las tareas de las organizaciones revolucionarias se vieron dificultadas por las fuerzas del PRI (o las vinculadas al mismo), que les prohibieron, poco a poco, desarrollar toda propaganda masiva e independiente durante las manifestaciones.

En este clima, invocando los peligros de un ataque imperialista, queda prohibida la propaganda contra la Constitución, con ocasión del referendum. Dicha Constitución instaura el poder del *"velayat faguih"* (Jomeini el docto), la concentración del poder en sus manos y su derecho de veto en todas las cuestiones. Por ejemplo, puede destituir al presidente de la República, elegido por sufragio universal. El Consejo de guardianes (Consejo de vigilancia), de doce miembros, puede suspender todas las decisiones del Parlamento (Maylis) si juzga que no se conforman a la ley islámica

Algunas fuerzas, como el Partido Tudeh, prosoviético, explicarán que la "amenaza imperialista" es tan grande que está justificado acallar las críticas a una Constitución que, ciertamente, es discutible.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos del régimen, el boicot a este segundo referéndum encontrará mucho eco entre las minorías nacionales. Las cifras, comunicadas mucho más tarde, con motivo de una de las numerosas luchas que se produjeron en el interior de las esferas dirigentes de la república islámica, confirman que en esta consulta no participaron más de 9 millones de electores.

La dimisión de Bazargan reforzará las posiciones del PRI. Sus cinco fundadores —Behechti, Mussavi, Ardebili, Hachemi Rafsandjani, Ali Jameini y Bahonar— forman entonces la mayoría del Consejo de la Revolución, que se convierte de hecho en el Gobierno. Todo esto allana el camino a las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias.

Así, Jomeini le explicó sin ambajes a Bani Sadr: *«La toma de rehenes ha unificado hoy al pueblo, la oposición no se atreve a actuar, podemos hacer aprobar la Constitución sin dificultad. Podemos proceder a las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cuando todo esté hecho, dejaremos que se vayan los rehenes».*

En enero de 1980, los locales de los muyahedines sufren un nuevo ataque; la candidatura a la presidencia de Massud Radjavi, su portavoz, queda eliminada. Jomeini y Bani Sadr fomentan estas medidas contra los mayahedines, que han rechazado la Constitución y no son favorables a la represión contra las minorías nacionales. En la misma época se reinician los enfrentamientos en el Kurdistán. En abril de 1980 se desencadena una amplia ofensiva contra el pueblo kurdo. El atentado a los derechos democráticos de las masas se refuerza al final de la primavera. En abril, son cerradas las universidades con el pretexto de lanzar una "Revolución cultural islámica".

El imperialismo norteamericano aprovecha inmediatamente la ocupación de la embajada para lanzar una campaña histérica contra la revolución iraní, para preparar una eventual intervención militar en la región. Utiliza este pretexto para bloquear los haberes iraníes en los Estados Unidos, proyecto que ya se había planteado, de hecho, en febrero de 1979. Quedan suspendidas las importaciones de petróleo iraní a los Estados Unidos. Las potencias de la Comunidad Económica Europea se unen tardíamente al bloqueo decretado en abril de 1980. Los efectos en Irán son de doble naturaleza: por un lado, aumenta el coste de las importaciones; por otro, descienden las rentas de las exportaciones. Subsidiariamente, se diversifica la clientela comercial de Irán, incrementándose los intercambios con Suecia, Austria, Italia, Suiza, Corea del Sur, Brasil, Pakistán, Turkía, India y los Países del Este.

En abril de 1980, Jimmy Carter organiza la incursión fallida de Tabas. Esta operación de comando se relaciona directamente, por parte del régimen, con un plan más amplio de contrarrevolución en Irán. Este plan implica a sectores del ejército y de la oposición vinculada a Chapour Bajtiar. En respuesta, la dirección de la República Islámica eliminará a una capa de oficiales del ejército surgido del régimen del sha y consolidará el cuerpo militar de los pasdarán, destinado a servir de brazo armado del nuevo régimen.

La ocupación de la embajada y la toma de rehenes concluirán en enero de 1981. Entre la espada de la ofensiva militar contrarrevolucionaria de Irak, lanzada en septiembre de 1980, y la pared del bloqueo

imperialista,la dirección de la República Islámica concluye un acuerdo con los Estados Unidos. Este comporta la cesión de miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo iraní, al imperialismo norteamericano, sin ninguna contrapartida (armas, piezas de recambio). El acuerdo, firmado en Argel Nabavi, fue considerado por amplios sectores de masas como un fracaso, incluso como una capitulación. Fred Halliday escribe a este respecto: *«Los términos del acuerdo que condujo a la liberación de los rehenes constituyen una derrota considerable para Irán: el pago inmediato de las deudas contratadas ante los bancos norteamericanos representaba una concesión sin precedentes en la historia de las revoluciones modernas»* (Merip Reports, marzo-abril 1982).

IV. EL PRI AFIRMA SU HEGEMONIA

LAS elecciones presidenciales de enero de 1980, previstas por la Constitución adoptada, comportan una victoria aplastante de Bani Sadr. Este reune el 78% de los votos. Una de las razones de este éxito reside innegablemente en la imagen de defensor de determinados derechos democráticos que trata de dar a su candidatura. En la conciencia de amplios sectores de masas se perfila una ruptura con el clero. Jomeini se coloca por encima de la batalla, en estas elecciones, temiendo quedar vinculado a un candidato perdedor. Esta posición también favoreció a Bani Sadr. El candidato del PRI pierde ampliamente.

La elección de Bani Sadr a la presidencia de la República, sin embargo, suscitará muy pronto fricciones crecientes en el seno de las esferas dirigentes. Se producirán en relación con una cuestión clave para la jerarquía chiíta: la coexistencia y el control sobre los dos "aparatos de poder", el heredado del antiguo régimen y las "organizaciones revolucionarias". Por lo demás, Bani Sadr no dejó de dar a conocer su acuerdo con las declaraciones de los jerarcas del PRI favorables a hacer frente a los kurdos, a los "izquierdistas" y a los trabajadores.

Las elecciones al Parlamento, celebradas en marzo y mayo de 1980, les permitirán a los dirigentes del Consejo de la Revolución Islámica y del PRI contrarrestar los resultades de las elecciones presidenciales. El PRI gana ampliamente las elecciones parlamentarias, y pasa a controlar completamente el Parlamento. En las dos vueltas movilizará a su favor a las "organizaciones revolucionarias" (comités, pasdarán). Bajo la batuta de Rafsandjani, los servicios del Ministerio del Interior preparan la victoria del PRI. Jomeini se coloca del lado del PRI. El fraude es una práctica generalizada. En regiones enteras, entre ellas el Kurdistán, se invalidan los mandatos de los candidatos opuestos al PRI o que éste no controla. En la segunda vuelta sólo participará el 28% del cuerpo electoral. El PRI conquista el control sobre el Parlamento. Se apodera del Consejo de Vigilancia y del Consejo Supremo de la Magistratura (poder judicial), así como de los medios de comunicación. El PRI refuerza sus bases, lo que acentúa la crisis con Bani Sadr y sus aliados. Esta crisis estalla con motivo el nombramiento, por el Parlamento —PRI, de Mohamed Ali Radjai como primer ministro. Bani Sadr rechazaba este candidato. Los diputados que se oponen al PRI son eliminados del Parlamento.

Este conflicto no es únicamente de carácter institucional. De hecho, refleja un enfrentamiento social más profundo, lo que no deja de guardar cierta analogía con el que había desembocado en la dimisión de Bazargan. Un sector del Bazar y de la burguesía (básicamente los fabricantes y los grandes comerciantes), que no están dispuestos a vincularse a los nostálgicos del antiguo régimen, tratan de buscar a todo precio una solución política que lleve a la estabilización. Ven en Bani Sadr a un posible portavoz, aunque no guarden con él los mismos lazos que tenían con Bazargan. Estos sectores capitalistas se oponen a la política del alto clero en tres terrenos:

- En primer lugar, rechazan el intervencionismo creciente del clero en el terreno político, estatal y económico.
- En segundo lugar, consideran que la ausencia de un proyecto económico coherente del clero conduce a un marasmo económico que afectga directamente a los intereses de ciertos sectores del Bazar.
- En tercer lugar, temen la orientación de un sector del clero, que para reforzar sus posiciones difunde una ideología populista, un "odio a los ricos".

Detrás del PRI se alinean más bien los sectores comerciantes del Bazar, los intermediarios de las zonas rurales y la pequeña burguesía tradicional.

Este antagonismo entre la dirección del PRI y Bani Sadr, que concluirá con la destitución de este último en junio de 1981, no se articula por consiguiente en torno a una oposición entre los trabajadores y sus aliados por un lado, y la burguesía por otro. Se produce en torno a los problemas vinculados a la reconsolidación de un Estado capitalista. Los intereses de las masas trabajadoras no se sitúan en ninguno de los dos bandos, por mucho que la dirección jomeinista se reclame de las movilizaciones de masas y de las "organizaciones revolucionarias". Estas consideraciones, sin embargo, no pueden llevar a los socialistas revolucionarios a no reconocer las reivindicaciones democráticas que expresan los sectores populares que apoyan a Bani Sadr.

Las nuevas instituciones del régimen

Las "instituciones revolucionarias", producto del ascenso revolucionario y puntal del nuevo poder, se tambalearán ante las oleadas del movimiento de masas y serán objeto de una lucha por su "purificación" y su control. A veces, los miembros de los comités o de los pasdarán intervienen en una empresa o en una región rural y no desempeñan el papel que esperaban de ellos los patronos o propietarios. Quieren tomar el partido de los obreros y campesinos, o más simplemente dictar su propia voluntad a ambos bandos.

Al principio, se consideraba que estas "instituciones" debían actuar contra los agentes del antiguo régimen. Pero muy pronto emprenderán acciones contra la nueva oposición de la república islámica. Operan incursiones contra los sectores vinculados a Bazargan, y posteriormente a Bani Sard, contra miembros de las antiguas formaciones nacionalistas burguesas en el seno del aparato de Estado. Incluso van a menudo más allá de sus propias prerrogativas y suscitan reacciones, incluso entre el clero. También tienen la terea, claramente señalada por Jomeini, Behechti o Rafsandjani, de "luchar contra la influencia de la izquierda" (asimilada sistemáticamente a la contrarrevolución) y de "mantener el orden en el puesto de trabajo".

- Los comités no son, desde el principio, una fuerza centralizada y homogénea. Existen en ellos diversas posturas, pero están sometidos a las decisiones fundamentales del "velayat faguih". Su presupuesto corre a cargo del Estado, tras diversas reorganizaciones impulsadas por Hadhavi Kani, a partir de marzo de 1979. Además de estos recursos, disponen de medios procedentes de la distribución de bienes de consumo en los barrios (tras las medidas de racionamiento debidas a la guerra). Sus vínculos con el poder del PRI se estrecharán cada vez más. También cubren una función policial. Estas actividades influirán en el papel que desempeña en ellos los elementos que se proponen utilizarlos para obtener un beneficio material directo (corrupción).
- El ejército de los pasdaran, situado bajo la dirección del Consejo de la Revolución Islámica, tenía al principio unas dimensiones reducidas. Su control será objeto de feroces luchas en el seno de los círculos dirigentes de la República Islámica. La definición de su lugar, en relación con el ejército tradicional, provoca numerosas discordias. Durante casi tres años, ni el gobierno, ni siquiera el Consejo de la Revolución Islámica, pueden dominar esta institución, que sin embargo es vital para el poder del nuevo régimen. Es la que se encarga de las principales acciones represivas del régimen islámico, tanto contra las minorías nacionales como contra las organizaciones de la izquierda o las luchas obreras.

Sucesivamente, Hachemi Rafsandjani, y posteriormente Mussavi Ardabili, Ali Jamenei, del PRI, se encargará de asegurar un vínculo funcional entre la dirección del PRI y el comandante de los pasdarán. Finalmente, este último entrará directamente en contacto con Jomeini. Un Consejo de pasdarán debe dirigir esta nueva institución militar de la república islámica. Los pasdarán dependen del presupuesto del Estado, aunque cuentan con fuentes de financiación propia. El cuerpo de pasdarán posee un comandante en cada ciudad y en cada provincia importante. En el seno de los pasdarán, la organización de los Muyahedin de la Revolución Islámica (organización secreta integrista reaccionaria) dirige los servicios de información. El Parlamento adoptará una ley, después del comienzo de la guerra, por la que se da prioridad a los pasdarán sobre el ejército, en lo que se refiere al reclutamiento. Los pasdarán controlan los *basij* (comités de movilización), establecidos tras el estallido de la guerra con Irak. También están presentes en las principales fábricas.

• Los tribunales revolucionarios, creados inmediatamente después de febrero de 1979, debían perseguir a los representantes del antiguo régimen que se oponían a la república islámica. Pero el aparato represivo del sha no será desmantelado sistemáticamente. Serán numerosos los miembros de la SAVAK que se salvarán. Así, más de uno colaborará con el nuevo régimen para perseguir a los militantes de izquierda. Los tribunales se centralizarán y situarán bajo la dirección de la corte central de Teherán y de la oficina del procurador de la revolución islámica (que se encuentra en la prisión de Evin). Existen tribunales revolucionarios en las principales ciudades. Deben asegurar la aplicación de la "Ley islámica". Los jueces son nombrados por la jerarquía religiosa, no se ejerce ningún control sobre ellos. Los tribunales tienen sus propias unidades militares y colaboran estrechamente con los comités y los pasdaran. Al mismo título que estos últimos, los tribunales revolucionarios no limitarán su acción al procesamiento de los colaboradores de la dictadura Palhavi. Dirigirán sus golpes contra los que se reivindican del socialismo, del marxismo, que apoyan la revolución pero no "la revolución islámica". Aplican los preceptos de Jomeini: *«Irán intenta hacer volver a la religión a bestias salvajes que la han atacado, y si no lo logra, los encarcela, o mejor dicho, los depura, y esto es lo que han hecho todos los profetas desde la creación»*. No existen derechos de la defensa. La interpretación de la "ley islámica" es muy flexible, y se pronuncian las sanciones más arbitrarias.

• La Fundación de los Desheredados. Esta institución es una pieza maestra del régimen de la República Islámica. Ha confiscado los bienes de las capas superiores del antiguo régimen. Posee por tanto un pequeños imperio económico, tanto en el terreno mobiliario como en el inmobiliario (fábricas, restaurantes, hoteles, cines). Se encuentra bajo el estrecho control del PRI. Dispone de fondos muy importantes, que le permiten al PRI distribuir a sus partidarios una serie de ventajas materiales. Así, permite tejer lazos de clientela importantes. Los escándalos y la corrupción relacionados con esta institución se han denunciado en repetidas ocasiones, incluso por representantes oficiales del poder islámico. Jamás se ha publicado su balance detallado.

• La Cruzada por la Reconstrucción (Dijhad Sazandegui) tiene como campo de actividad, fundamentalmente, la agricultura. En esta cruzada intervienen millares de jóvenes que desearían aportar una ayuda concreta a las regiones rurales depauperadas y hacer avanzar la revolución. El PRI se apoderó muy pronto de esta institución. El reclutamiento se realiza a través de las mezquitas y de las sociedades islámicas (en el medio escolar). En las zonas rurales ha asumido tareas del ministerio del Plan. Los miembros de la Cruzada reciben un salario. Como institución, depende del presupuesto del Estado, y constituye ante todo un vector de penetración del PRI en el campo. Los miembros de la Cruzada colaboran con las fuerzas de policía, por ejemplo en el Kurdistán.

• Las sociedades islámicas (Andjoman Eslami) se crearon para contrarrestar el peso de los shoras en las fábricas. El poder intentó hacerse con el control de los shoras. Pero las sociedades islámicas constituyen un organismo más directo, más vinculado al PRI, destinado a asegurar su presencia en el puesto de trabajo y a oponerse a las fuerzas vinculadas al movimiento obrero, incluso si en algunos casos fueron momentáneamente más allá del papel que se les había asignado. De hecho, se crearon sociedades islámicas en el Ejército, en el aparato gubernamental, en las escuelas, los hospitales... Estas sociedades aseguran la presencia del PRI en todas las capas de la sociedad. La oficina del *monkerat* (del pecado, de "lo que no debe hacerse"), encargada de vigilar la "buena conducta" de los ciudadanos, completa la actividad de las sociedades islámicas. Esta oficina dispone de sus propios tribunales y de su policía.

Estas diversas instituciones islámicas y "revolucionarias" no son todas ellas "asociaciones ideológicas". Están directamente vinculadas a la jerarquía chiíta y al "velayat faguih". Deben asegurar la dominación del PRI y de una parte significativa del clero sobre un aparato de estado burgués. Esto es lo que determina fundamentalmente su naturaleza y su función. La presencia, en alguna de ellas, de jóvenes radicalizados y antiimperialistas, no altera esta realidad. Estas instituciones y organizaciones, cuya financiación de alto nivel es posible, entre otras cosas gracias a la renta petrolera, constituyen un conjunto que debe permitir la construcción y la consolidación del régimen islámico, en el que se combinan la "asistencia pública" y la represión.

El PRI: hacia el partido único

El PRI puede contar con la ayuda de una "asociación" de matones, los *hezbollahi*. Afirman ser miembros del Partido de Dios (Hezb-o-allah). El PRI no podía asumir directamente la iniciativa de la represión. Bajo mano, organiza a los *hezbollahi*. Ayat, antiguo miembro del partido de las masas trabajadoras de Irán (organización de derechas que apoyó el golpe de 1953 contra Mossadegh), es el encargado de su organización. Provistos de porras y otras armas, los *hezbollahi* se encargan de reducir a las diversas oposiciones al partido oficial. Por su composición plebeya (en parte lumpen), esta organización parece "surgida del pueblo", lo que le permite atribuir a sus actos una legitimidad popular. Tras la eliminación de Bani Sadr, el PRI reconocerá oficialmente esta "asociación". También ella es objeto de luchas entre las fracciones del clero.

El PRI tiene en sus manos todos los hilos que relacionan entre sí a las diversas organizaciones revolucionarias. Jomeini interviene como un bonaparte, decidiendo en uno u otro sentido en las luchas fraccionales en el seno del PRI. Es la clave del arco de un sistema de dominación política de una importante fracción de la jerarquía chiíta. Al mismo tiempo, la concentración de poderes que detenta y su lugar preponderante traducen la precariedad del reino del PRI.

Para justificar una política oportunista con respecto al nuevo poder, organizaciones como el partido Tudeh o los Fedayines (mayoritarios), invocan las "importantes" diferencias que separan a las distintas fracciones del PRI. Unas sn calificadas de progresistas, de "revolucionarias" y de "antiimperialistas"; las otras, de reaccionarias y anticomunistas. Según ellos, las primeras merecen el apoyo político como dirección de la pretendida fase antiimperialista de la revolución y de la "vía de desarrollo no capitalista".

Por supuesto que existen diferencias. El grupo Hodjatieh, por ejemplo, es uno de los más abiertamente conservadores. Se opuso violentamente a la reforma agraria y a la nacionalización del comercio exterior. Su antisocialismo, su anticomunismo y su antimarxismo son virulentos. Su influencia es el aparato judicial y en la nueva policía política, la SAVAMA, es muy fuerte. Uno de sus dirigentes, Falsafi, que se mojó en el golpe de agosto de 1953 contra Mossadegh, ha afirmado que había que colaborar con los antiguos miembros de la SAVAK contra la izquierda. Otra fracción, la de la "línea del imán", trata de utilizar una demagogia populista, del estilo "antiposeedores" (anti-Mostakbar), que se

puede observar en general en el movimiento nacionalista islámico.

La fracción clerical Hodjatieh se apoya y favorece a los sectores de capitalistas, comerciantes y notables que penetran en la brecha abierta por la revolución, para ascender en la escala social. Muestra por tanto su oposición a un intervencionismo del Estado demasiado pronunciado. Ve con malos ojos "los llamamientos al pueblo" de Jomeini con miras a resolver las divergencias internas en el clero y mantener su relación directa con las masas. Para esta fracción esto no hace sino frenar la estabilización social y económica necesaria. Está a favor de establecer lazos más directos con el imperialismo. También se opone a la pretensión de Jomeini de ser el representante del doceavo imán, con lo que esto supone de poder para él y de "medidas de reforma" para justificar esta función.

Los "Defensores de la Línea del Imán", a su vez, ponen el acento en la organización y el control de las masas, en determinadas medidas populistas y en el lugar que debe ocupar el sector público en la reorganización del sistema de poder. Sin embargo, no manifiestan menos ardor en torno a la represión de las reivindicaciones democráticas y a las oposiciones de todo tipo: antiguos medios monárquicos; sectores de la burguesía decepcionados por los resultados de la revolución islámica; fuerzas que se reivindican del socialismo y del movimiento obrero, o siquiera de una versión pequeño-burguesa, socializante y populista del Islam, como la de Shariati, uno de los inspiradores de la organización de los Muyahedines del pueblo de Irán. Por lo demás, su antiimperialismo sirve sobre todo para manipular al movimiento de masas.

Más allá de estas diferenciaciones, todas estas corrientes se oponen firmemente a cualquier ataque real contra la propiedad privada, la economía mercantil y el Estado capitalista, como al desarrollo de los derechos democráticos y a la existencia de un movimiento de masas fuerte e independiente.

Si el PRI agrupa al sector de la jerarquía religiosa comprometido en la acción política —una fracción del clero se niega a esta participación directa en los asuntos del Estado y en la vida política—, sirve también de vínculo con notables locales y miembros del bazar, que suministran, más allá de la base socio-económica que posee la propia Iglesia chiíta, una de las bases sociales del régimen. Determinados elementos del bazar aprovechan el monopolio que le atribuyen las autoridades y ocupan los puestos abandonados por sus competidores exiliados o depurados. En esta economía mercantil inestable, las fortunas se hacen y deshacen con rapidez.

Finalmente, alrededor del 10% de la población activa, en gran parte plebeya y pequeño-burguesa (depauperada), está directa o indirectamente ligada a las instituciones en que se apoya el nuevo régimen. Hay ahí una base de masas del régimen Jomeini que puede contar, además, con una parte nada despreciable del personal, renovado o no, del aparato de Estado.

La posición predominante actual del clero es el resultado de la debilidad de la burguesía, así como de la clase obrera. La primera se vió desprovista de toda un ala moderna vinculada al sha, con la revolución de febrero de 1979. La burguesía tradicional, a su vez, no disponía de partidos políticos bien estructurados. Sólo desempeñó un papel marginal en la lucha contra la dictadura. El marasmo económico, a partir de 1979, así como la actividad de las masas, no facilitaron su reavivación tras el derrocamiento del sha. La segunda, terriblemente reprimida por el sha, traicionada durante toda su historia por el partido Tudeh, no disponía de organizaciones sólidas ni de tradiciones políticas. No pudo disponer de un intermedio democrático suficientemente largo para organizarse y conquistar una independencia política y organizativa que le habría permitido presentar su candidatura al poder.

El clero, como institución, dispone de una fuerza real —económica, social, organizativa— constituida a lo largo de los siglos. Ha desempeñado un papel en la historia pasada del Irán y sus vínculos con el Estado son numerosos. Por razones históricas particulares, es, por primera vez, el actor político que ocupa el primer plano.

Los muyahedines contra el poder

El conflicto abierto contra el PRI, Bani Sadr y los Muyahedines alcanza su apogeo durante el segundo semestre de 1981, en plena guerra entre Irán i Irak. Su resultado será la última etapa del proceso de toma de posesión de todas las instituciones por parte del clero chiíta.

El 10 de julio de 1981, Bani Sadr deja de ser comandante en jefe de las fuerzas armadas. Un día antes, Nobari, aliado de Bani Sadr, renunciaba a su puesto, en la dirección del Banco Central. El llamamiento de Bani Sadr a un referéndum, para que los electores decidieran el conflicto, aceleró el enfrentamiento decisivo. El Parlamento adopta una ley que obliga a Bani Sadr a aplicar todas las medidas que había adoptado el Parlamento durante los últimos meses. En la misma fecha, la "oficina de coordinación y cooperación del pueblo con el presidente de la República", organización creada por Bani Sadr tras las elecciones presidenciales de 1980, queda disuelta. Asimismo, se suspenden siete periódicos, entre los que se encuentran *La Revolución Islámica* (de Bani Sadr), *Mizan* (de Bazargan) y *Nameh Mardom* (publicado por el Partido Tudeh), por un periodo indefinido, por parte del procurador general. Al tiempo que declara su lealtad a Jomeini, Bani Sadr denuncia "la tiranía" del clero y llama a ofrecer resistencia pública. Multiplica los avances hacia el sector empresarial del Bazar. Los Muyahedines del pueblo se alinean detrás de Bani Sadr. Organizan manifestaciones en apoyo de él, la más importante de las cuales reúne a centenares de miles de participantes, el 20 de junio en Teherán. Un sector significativo de las masas, que rebasa ampliamente a los sectores de las llamadas "clases medias", desorientado por la política servil del partido Tudeh y de los Feyadines (mayoritarios), en ausencia de una dirección alternativa, se alineará con el bloque Bani Sadr-Muyahedines. Este agrupamiento se le aparece como algo que ofrece una barrera frente a la hegemonía política del clero chiíta y a los ataques contra los derechos democráticos. Todas las manifestaciones fueron atacadas, incluso con armas de fuego, por los pasdaran y los hezbollahi. A partir del 20 de junio, las detenciones de militantes miembros de los muyahedines así como de los feyadines o de Peykar (una organización maoista), se multiplican. Las primeras ejecuciones se producen ya el 21 de junio.

Los muyahedines renuncian a organizar nuevas movilizaciones de masas. En revancha, declaran "la guerra" al Gobierno. En ese mismo momento se multiplican los atentados con bomba. El 28 de junio, en la sede del PRI, mueren en una explosión más de 71 dirigentes del Partido, entre ellos Behechti. Después de acusar inicialmente a los Estados Unidos y a Irak, los dirigentes de la república islámica achacan finalmente la responsabilidad de esta acción a los muyahedines. El antiguo primer ministro, Mohamed Ali Radjai, elegido presidente de la República Islámica en julio, será asesinado en agosto, al igual que Bahonar, el primer ministro. De esta manera es asesinada una capa entera de dirigentes islámicos. La orientación emprendida por los muyahedines, si bien rechazan la paternidad de algunas de estas acciones, consiste en abrir la "guerra" contra los pasdaran y los políticos del régimen. Reivindican abiertamente una serie de acciones terroristas. Esperan debilitar a la fracción de Jomeini, en beneficio de un ala que les fuera más favorable, o bien estimular una desintegración rápida del sistema de dominación del PRI.

En este ambiente, el régimen puede lanzar una campaña de terror contra todas las oposiciones. El PRI ocupa el terreno. Con la elección a la presidencia de la república, en octubre de 1981, de Sayed Jameini, representante de Jomeini, y el nombramiento de Madahvi Kani (obligado poco después por el PRI a dimitir), y posteriormente de Hossein Mussavi en el cargo de primer ministro, ningún cargo de dirección mínimamente significativo del aparato de

Estado escapa a las manos del clero chiíta.

La Organización de los Muyahedines del Pueblo de Irán (OMPI) es una organización populista, nacionalista, pequeño-burguesa. Su matriz ideológica mezcla elementos del chiísmo populista, del tercermundismo (Franz Fanon) y de elementos prestados del modelo estalinista de la revolución colonial. En ausencia de un movimiento obrero fuerte y cuya referencia al socialismo no hubiera podido confundirse con la del partido Tudeh, esta organización canalizó la radicalización de importantes sectores de la juventud estudiantil, aunque también de sectores obreros y plebeyos. Agrupará a millares de jóvenes combatientes antiimperialistas. En las elecciones de 1980, obtendrá el 13% de los votos, según cifras oficiales. Esto refleja su implantación en los barrios populares.

Su alianza con Bani Sadr, se sitúa desde el punto de vista de la orientación política, en la prolongación de su apoyo crítico prestado al régimen hasta diciembre de 1979, de las relaciones privilegiadas que mantenía con algunos de los grandes ayatolas (Taleghani), de sus llamamientos permanentes a Jomeini, o incluso de su estrategia destinada a construir una "república islámica democrática". El apoyo a Bani Sadr se presentaba inicialmente como una alianza táctica para hacer frente a la ofensiva del PRI. Posteriormente, los muyahedines silencian la responsabilidad de Bani Sadr en el cierre de la Universidad, los ataques contra sus locales o la guerra contra los kurdos. Los métodos de lucha empleados por los muyahedines no son sino la otra faceta de su populismo. Se inscriben en la continuidad de su pasado guerrillerista. Reflejan, del mismo modo que su política de alianzas, su incomprensión de la necesidad primordial de un movimiento de masas independiente, arraigado en la clase obrera. A ello se añade la reticencia de sus aliados burgueses, y más particularmente de Bani Sadr, con respecto a la acción directa de masas. Su orientación traduce también un desconocimiento del proceso de desarrollo de la conciencia de las masas. Va en sentido contrario al refuerzo de la acción directa de las masas, que apareció como posible en junio de 1981. La campaña terrorista de los muyahedines puede amalgamarse fácilmente con los métodos utilizados por las fuerzas restauracionistas, máxime en el contexto de la guerra con Irak.

Frente al desafío, el PRI unificó sus filas, desde Ali Jameini a Ardebili, desplegando todos sus esfuerzos en una movilización de los sectores donde su audiencia es aún mayor. La política de los muyahedines proporcionará pretextos para una nueva oleada de medidas represivas masivas y brutales, que afectan a todas las fuerzas de la izquierda.

Por este conjunto de razones, los marxistas revolucionarios sólo pueden condenar vigorosamente la orientación política de los muyahedines. Pero deben indicar sin ambigüedad que la responsabilidad política corresponde a la dirección del régimen islámico, que ha dificultado cada vez más cualquier actividad legal de dicha organización.

Desde hace tiempo, un sector del clero había anunciado ya su voluntad de golpear a los muyahedines. En la época del sha, en 1977, Rafsandjani declaraba: *«Nuestra última batalla será contra los muyahedines».* En junio de 1980, Jomeini lanza el slogan *«muerte a los hipócritas»* (los muyahedines). El procurador general revolucionario de Teherán, Lajevardi, explica los resortes de esta política represiva: *«La hostilidad de la organización de los hipócritas hacia el régimen islámico data de la época de su creación; porque considera el socialismo científico y el marxismo como la vía de la revolución. Pero nadie ignora que el marxismo es contrario al Islam. Es natural que cualquiera que crea en el marxismo será hostil a la república islámica, por mucho que manifieste su deseo de tratar políticamente y de mantener lazos de entendimiento y de amistad con ella. Porque el creyente y el incrédulo no pueden, a fin de cuentas, estar de acuerdo. La contradicción entre nosotros y los hipócritas es de principio e ideológica, y se remonta a una época anterior a la victoria de la revolución».*

Una crítica radical de la orientación adoptada por los muyahedines, y que silencie al mismo tiempo los golpes asestados por el PRI contra esta organización, avala de hecho todas las medidas represivas tomadas en nombre de las necesidades del "combate antiimperialista". Esto es lo que hizo el partido Tudeh.

La defensa de los militantes muyahedines encarcelados, torturados, ejecutados, es una tarea del movimiento obrero internacional. Debe situarse en el marco de una clara denuncia de la propaganda imperialista contra la revolución iraní, y de apoyo a la lucha contra todas las fuerzas imperialistas o vinculadas al antiguo poder imperial.

La política de alianzas aplicada por la dirección de los muyahedines, y su orientación política global, han puesto de manifiesto, una vez confirmado el fracaso de su estrategia, todos sus aspectos negativos. En primer lugar, el programa de Gobierno Provisional establecido por el Consejo Nacional de la Resistencia (CNR, coalición entre Bani Sadr, el PDKI y los muyahedines), no persigue otro objetivo que la democratización del régimen de la República Islámica, es decir, conservando el Estado capitalista. En segundo lugar, el contenido social y económico de dicho programa no da ningún lugar a dudas en cuanto a su respeto de la propiedad privada y su voluntad de atribuir a los shoras un papel subordinado con respecto a las instituciones del Estado. Finalmente, el mecanismo propuesto —un Presidente de la República (Bani Sadr) y un Gobierno Provisional que convoque una Constituyente— para asegurar el cambio de poder, revela una voluntad de no recurrir a las tradiciones más avanzadas de las luchas de masas en Irán (huelga general, autoorganización) y de establecer límites de antemano a su actividad.

La dinámica política desastrosa de la orientación de los muyahedines se pone de manifiesto a través de las aperturas realizadas con respecto a ciertas iniciativas iraquíes, o incluso del imperialismo francés, que está fuertemente comprometido en Irak, desde el punto de vista económico, y juega la carta de un apoyo abierto a Saddam Hussein.

Imanato y sistema de dominación

La ideología de que se reclama la fracción de la jerarquía chiíta en el poder, y que corta a su medida y según sus necesidades, ha influido en el curso de la revolución. Esta ideología no es una simple ideología religiosa. Pretende ser un programa social y gubernamental. Este ha inspirado a su vez el proyecto de Constitución. Esta reposa en una idea central: el Gobierno y la legislación corresponde a Dios. Su representante en la tierra, el "velayat faguit", es decir, el ayatollah Jomeini, decide en su nombre. Detenta el conjunto de poderes y puede delegarlos a su voluntad.

La soberanía corresponde al "velayat faguih" y no a las masas. El es su tutor. La población está dividida en categorías (doctrinarios, ateos, hipócritas, etc.) que expresan la relación que mantienen con la "línea del Imán". La obediencia al Imán se convierte en la norma de la vida social. Todo oponente se convierte en "enemigo del Islam" y de la "revolución islámica" con el frecuente añadido indiscriminado del calificativo "agente del imperialismo". Aparentemente, la represión más rigurosa se encuentra legitimada por una instancia superior, el representante del doceavo Imán, situado por encima de los enfrentamientos de clases.

Todas las medidas contra las mujeres (exclusión de una serie de profesiones, no elegibilidad, ley de venganza en que la mujer vale el 50% menos que el hombre, derecho al divorcio muy restringido para la mujer, el hombre puede desposar a cuatro mujeres, edad núbil a los nueve años con el consentimiento del padre y a los 13 años legalmente, látigo o lapidación por adulterio, etc.) encuentran su justificación en el programa social de este Islam integrista. Dichas medidas están destinadas a que las mujeres ocupen su lugar tradicional que habían abandonado temporalmente a causa de las necesidades del apoyo a la revolución —donde estaban en primera fila—.

"La defensa del Islam" viene a justificar la abolición de los artículos más "radicales" de la reforma agraria, o de los derechos

contra los poseedores, la subordinación de los shoras al PRI y su estatuto de partido único, la "purificación" del cuerpo de enseñantes o, incluso, la prohibición de toda unidad política en las escuelas.

«El Parlamento no tiene un derecho absoluto en materia de legislación, sino que su derecho consiste en promulgar leyes con arreglo a la "Cha ri'a" (la Ley). (...) Los diputados están obligados a suprimir toda ley que sea contraria a los preceptos del Islam. (...) La razón de ser del Consejo de Vigilancia de la Aplicación de la Constitución Islámica consiste precisamente en rechazar toda ley que no se atenga al Islam». (Hachemi Rafsandjani, presidente del Parlamento).

Este programa reaccionario debe asegurar la hegemonía de la fracción del clero en el poder, y funciona como un instrumento conservador del orden social. La dirección Jomeini utilizó tanto el aparato de la Iglesia, como la ideología religiosa, para reafirmar su ascendente político sobre las masas que se adhieren al chiísmo. Pero el contenido social y económico de este programa sólo puede entrar en contradicción con las necesidades de los trabajadores, incluso con la forma religiosa que hayan podido adoptar sus aspiraciones. La represión se convierte por tanto en una necesidad para asegurar la permanencia del régimen.

En semejante situación, la defensa de los derechos democráticos está estrechamente vinculada a la batalla por la organización y la actividad libres e independientes de los trabajadores. La negativa a defender estos derechos, so pretexto de que sería hacerle el juego al imperialismo o facilitar la tarea de la "burguesía liberal", lleva a subordinar el movimiento de masas a la dirección jomeinista, o a facilitar a esta misma "burguesía liberal" la tarea de esgrimir las reivindicaciones democráticas de las masas contra el régimen, para volver a consolidar sus posiciones.

Ya en julio de 1980 indicábamos: *«Para desarrollar, en el seno de las masas trabajadoras, un sentimiento de pertenencia a una clase independiente, los marxistas revolucionarios organizarán la lucha por el conjunto de las reivindicacioneds democráticas, nacionales y transitorias (anticapitalistas), sabiendo formularlas para llevarlas al corazón del movimiento real de las masas, comprendiendo los efectos en su conciencia de las experiencias concretas de movilización y las contradicciones que surgen entre sus acciones, los planes del nuevo Gobierno y la ideología difundida por la dirección Jomeini. Es el único método que permite arrancar a las masas de la influencia de las direcciones burguesas y pequeño-burguesas, de acompañar al movimiento de masas, sin renunciar a una ofensiva política e ideológica contra el contenido reaccionario de las campañas de islamización»* (Resolución del Secretariado Unificado de la IV Internacional, del 28 de julio de 1980).

V. EL ATAQUE IRAKI CONTRA IRAN

La ofensiva militar del régimen irakí de Saddam Hussein desembocará en una guerra que dura ya más de dos años y medio. Este conflicto no ha suprimido la lucha de clases y el combate de las minorías nacionales en Irán. Constituirá un crisol en que éstas se fusionarán. Las luchas políticas, sociales y militares se entremezclan e influyen en la dinámica del movimiento de masas. Esta dinámica se ha convertido poco a poco en ambos países, en uno de los factores más importantes de la guerra.

El proyecto de Saddam Hussein

So protexto de que hay que cambiar el trazado de las fronteras, Saddam Hussein ataca a Irán en septiembre de 1980. Intenta derrocar el régimen de Jomeini. Asestando una serie de golpes duros contra el régimen islámico de Teherán y tratando de modificar la relación de fuerzas interior en favor de la reacción, es decir, de los partidarios del almirante Oveissi y de Chapur Baktiar, trata de estrangular la revolución. Para poner a punto sus planes, Saddam Hussein colabora con generales del antiguo Ejército imperial. Les proporciona armas y les ayuda también en su lucha contra Jomeini.

El poder irakí intenta sofocar a Irán ocupando una zona económica e industrial vital, el Jusistán. Irán está aislado internacionalmente, tras la ocupación de la embajada norteamericana, y se encuentra atascado en una auténtica guerra contra el pueblo kurdo. Además, Saddam Hussein intenta sacar provecho del debilitamiento del ejército heredado de la época del sha, la oposición al nuevo régimen de una gran parte de su oficialidad, y las luchas de clanes en el seno de la república islámica.

Utiliza una demagogia "pan-árabe". Para referirse al Jusistán, Saddam Hussein habla de "una tierra árabe, como Palestina". Sin embargo, toda su política (bombardeos, destrucciones, represión) indica sin ambigüedad que la camarilla en el poder en Bagdad es incapaz de atraer efectivamente a la población árabe del Jusistán que participó en una revolución. Los árabes del Jusistán participarán inmediatamente en los combates contra la agresión irakí; a menudo, serán desarmados por los pasdarán.

Saddam Hussein creyó en la desintegración rápida del régimen de Jomeini. De hecho, como lo ha demostrado a menudo la historia, al invadir un país en revolución, suscitó una respuesta inmediata en la que se mezclaba la voluntad de las masas de defender la revolución y su país.

En el plano interno, el régimen de Saddam Hussein no tenía que vérselas con un movimiento de masas activo que lo amenazara directamente. Sin embargo, temía los efectos de la revolución islámica en el seno de las masas campesinas pobres en el Sur de Irak, máxime cuando en su mayoría son de religión chiita. La campaña contra las organizaciones chiitas de Irak se refuerza a partir de 1979. En marzo de 1980, Bagdad promulga un decreto que castiga con la pena de muerte a toda persona que permanezca a la organización chiíta integrista reaccionaria Al Daawa. Hace ejecutar al líder espiritual de los chiítas, Mohamed Bakr al-Sard.

El renacimiento de la lucha de los kurdos en Irán, inspirada en el combate de sus hermanos en Irán, suscita también alguna inquietud en la camarilla que monopoliza el poder en Bagdad. Finalmente, Saddam Hussein, una vez desaparecida la potencia regional militar del sha, espera afirmar su papel en esta región, dividida arbitrariamente por el imperialismo en Estado más o menos rivales (Irán, Irak, Arabia Saudí). Tanto Egipto como Jordania prestan su apoyo a Irak.

Cuando decide lanzar la ofensiva militar, Saddam Hussein no se encuentra solo. A comienzos de agosto viaja a Taïef, en Arabia Saudí. Es su primer viaje oficial desde que accedió a la presidencia de la república y a la presidencia del Consejo del mando de la revolución, y el primero que realiza a Arabia Saudí, desde 1958, un dirigente del Partido Baas. Arabia Saudí, una vez desencadenada la guerra, asegurará su ayuda financiera de decenas de miles de millones de dólares a Irak, de común acuerdo con los Emiratos del Golfo Pérsico. Estos regímenes reaccionarios temen también las repercusiones de la revolución iraní. El impererialismo francés se coloca del lado de Irak, tratando así de reintroducirse en una región de la que había quedado excluido en gran parte por los imperialismos británicos y norteamericano.

Cuando accedió al poder, la dirección Jomeini no denunció el tratado de 1975, impuesto por el sha a Irak. Al contrario, multiplicó sus declaraciones "panislámicas", carecterizadas por el tonillo chovinista iraní. Declara y organiza su apoyo a la organización chiíta integrista Al Daaba. Jomeini lanza una especie de guerra ideológica personal contra Saddam Hussein, en nombre de la "revolución islámica". Ataca al nacionalismo árabe, laico y seudosocialista del Partido Baas. Su propaganda adopta la forma de un "expansionismo chiíta". El 18 de abril de 1980, Jumhuri Eslami, el diario del PRI, publica un llamamiento del Jomeini: *«Es su deber (el del pueblo irakí), así como del Ejército, derrocar al Baas, Partido no islámico».*

Las potencias imperialistas, ante todo el imperialismo norteamericano, aprueban tá-

citamente la ofensiva irakí. Ven en ella una posibilidad de consolidar las posiciones de la contrarrevolución en Irán. Asimismo, temen los efectos desestabilizadores en la región de la revolución iraní, y los llamamientos de las fuerzas integristas chiitas que gobiernan en Teherán. En este punto hay una convergencia con los objetivos de Saddam Hussein. Pero el imperialismo norteamericano no interviene fuertemente en la operación. Las incógnitas son demasiado grandes. Y los proyectos imperialistas en la región están lejos de solaparse con los planes de Saddam Hussein. De entrada, el imperialismo no es en absoluto favorable a una nueva delimitación sustancial —que iría más allá de las modificaciones del acuerdo de 1975— de las fronteras establecidas en la región con motivo de la 1ª guerra mundial. Se opone al desmantelamiento de Irán.

Además, no está dispuesto a favorecer la conquista, por parte de Irak, de los yacimientos petrolíferos iraníes. El imperialismo no desea favorecer la concentración de semejantes recursos en manos de un único país. Favorece más bien la fragmentación. Avalando este proyecto crearía un precedente muy peligroso en esta región estratégica del mundo, corriendo el riesgo de enemistarse con todos los gobiernos. Irak, aliado desde hace tiempo de la URSS, no depende completamente del imperialismo. Es cierto que opera un deslizamiento en dirección a las fuerzas imperialistas, pero el régimen de Bagdad defiende aún demasiado su intereses particulares. Por consiguiente, el imperialismo no está dispuesto, de entrada, a convertirlo en la potencia clave de esta zona, máxime después de la experiencia decepcionante que ha hecho con Irán.

Finalmente, tras la caída de la dinastía Pahlavi, Israel sigue siendo para los Estados Unidos una baza aún más indispensable. Atribuir a Irak, el adversario declarado de Israel, un papel preponderante, sólo podría entrar en colisión con una opción fundamental del imperialismo norteamericano. La ayuda que aportará Israel a Irán, en el terreno del armamento, no ha hecho sino destacar este problema. La cantidad de armas suministradas —fundamentalmente material construido bajo licencia norteamericana— muestra que esta iniciativa no ha podido tomarse contra la voluntad explícita de los Estados Unidos. La incursión israelí, en junio de 1981, contra el reactor nuclear Osirak en Tammuz, cerca de Bagdad, revela la firme voluntad de Israel de aprovechar la situación para debilitar a Irak.

De hecho, el imperialismo utilizará este conflicto ante todo para reforzar su presencia militar en la región, y particularmente para consolidar su ayuda militar a los Estados del Golfo, mientras que Irán e Irak se debilitan militar y económicamente. Aprovecha el deshielo de las relaciones entre Irak y Egipto, que se reintegra en el seno de los países árabes, en un momento en que se descompone el "Frente de firmeza" (Siria, Libia, Yemen del Sur, Argelia, OLP). Si los Estados del Golfo se oponen al régimen de Teherán, no por ello son partidarios de que Irán se transforme en un gendarme regional.

La voluntad mediadora manifestada por la OLP y por Cuba, desde el comienzo del conflicto, venía alimentada por esta comprensión de las ventajas que podría extraer el imperialismo de esta guerra, de este enfrentamiento en una región que aquel "balcanizó" para controlar mejor la situación. Es innegable que el imperialismo aprovecha el conflicto y su prolongación, aunque no lo haya inspirado o desencadenado directamente. En cuanto a la burocracia soviética, actúa con precaución, jugando todas las cartas por mediación, entre otros, de los "países satélites".

El conflicto que estalló en septiembre de 1980, constituye por tanto una guerra entre dos países capitalistas dominados, cuyas direcciones en el poder desarrollan una política global contraria a los intereses de las masas, pero una de las cuales ha surgido de una revolución aún reciente y dispone todavía de cierta audiencia entre las masas populares. El ataque de Saddam Hussein está destinado a estrangular la revolución islámica golpeándola militarmente y respaldando las fuerzas de la contrarrevolución islámica del antiguo régimen iraní; en la misma operación, ataca también a la revolución iraní de los trabajadores y de los campesinos pobres.

En otoño de 1980, frente al asalto irakí, la tarea de defender la revolución iraní en curso consiste, para los revolucionarios, en movilizar a los trabajadores y campesinos para oponerse a la agresión baasista, por derrotarla militarmente. Esta movilización no debe debilitar los esfuerzos empleados para cumplir la tarea estratégica de alcanzar la independencia política del movimiento de masas. Para ello ponen el acento: en la reactivación y en el armamento de los shoras y de los comités de masas en los barrios; en la libertad de expresión política en las milicias creadas para rechazar la agresión baasista, y contra toda clase de caza de brujas contra las organizaciones de izquierda; en el derecho de organización y de expresión de los trabajadores en uniforme (shoras de soldados), que permitan, entre otras cosas, contrarrestar las maniobras de los generales faciosos y depurar así el ejército; en la suspensión inmediata de los ataques militares contra los kurdos (en septiembre y octubre, 30.000 pasdarán y soldados atacan al Kurdistán) y las demás minorías nacionales; en el reconocimiento incondicional de su derecho a la autodeterminación; contra todas las medidas de evacuación forzosa y de chantaje contra la población árabe del Jusistán. Los socialistas revolucionarios proclaman que no puede haber una defensa eficaz de la revolución sin garantizar todas sus conquistas, sin ampliar los derechos de asociación, de reunión y de expresión de las masas, sin profundizar la revolución en el plano social y económico. Sólo pueden oponerse a una orientación que aceptara, en nombre de la prioridad de la "defensa nacional", mantener el silencio sobre los ataques a los derechos democráticos o poner fin a un combate justo que desarrollan los trabajadores en sus fábricas o los campesinos en sus tierras.

Frente a un intento efectivo de derrocar el régimen por medio de las fuerzas restauracionistas ayudadas por el ejército irakí, los revolucionarios deberían haber llamado a las masas obreras y campesinas de Irán a defender militarmente, sin prestarle ningún apoyo político, con sus propios métodos de acción, a un régimen que aún no eran capaces de sustituir por un gobierno obrero y campesino. Pero en este combate deberían haber puesto el acento en la necesidad de reanudar con las formas de lucha más avanzadas de las masas populares (autoorganización, armemento), con el fin de crear las mejores condiciones para hacer de la victoria contra el golpe reaccionario el trampolín de una ruptura de masas con la dirección de la república islámica.

Por otro lado, el movimiento obrero y revolucionario internacional debió movilizarse entonces por exigir la retirada incondicional de las tropas irakíes más allá de las fronteras existentes antes del 21 de diciembre de 1980, y la de todas las fuerzas imperialistas de la región. Desde el comienzo del conflicto, paralelamente a su participación en la resistencia, los revolucionarios debieron explicar que la salvaguardia de esta revolución, que beneficia a los pueblos de Irán y de Irak, hacía necesario oponerse al desarrollo del chovinismo. El beneficiario de toda división duradera entre dos países dominados por el imperialismo sólo podía ser el imperialismo. Las masas populares de ambos países pagarían un precio muy elevado. Fidel Castro lo subrayó con toda razón. Explicar esto no estaba en contradicción ni con la exigencia de retirada incondicional, ni con una postura de defensa militar con miras a quebrar el ataque irakí. En el plano de la defensa política, en efecto, esta orientación tenía que despertar un amplio eco en las masas irakíes, debilitando políticamente a Saddam Hussein.

Las masas, Jomeini y la guerra

Entre septiembre y octubre de 1980, la resistencia popular a la invasión irakí en los centros obreros del Jusistán iraní (Jorramchar, Abadan y Ajras) fue enorme. Revolucionó todos los planes del Estado mayor irakí, que no vaciló en bombardear masivamente las ciudades. En el triángulo del petróleo, el ejército regular iraní estuvo casi

ausente durante las primeras semanas de la guerra. Trabajadores, jóvenes combatientes (entre los que figuraban muchos árabes), respaldados por secciones de pasdarán en la región, constituyen la punta de lanza de la resistencia. Los militantes de los feyadines y de los muyahedines participan en el combate y luchan en primera fila contra el ejército irakí. Desde el comienzo de la guerra, Gasemlu, dirigente del PDKI, hace saber al gobierno de Teherán que los peshmergas ("los que van por delante de la muerte") están dispuestos a dirigir sus armas contra los irakíes y las fuerzas reaccionarias pagadas por Irak, con dos condiciones:

— que cesen los ataques militares contra los kurdos, y que estos puedan mantener su propia organización militar;

— que les sea reconocido el derecho a la autonomía.

En numerosas ciudades de Irán, las masas salen a la calle desde el mismo comienzo de la guerra. Exigen armas. Su armamento, como en los días de la insurrección, está en el orden del día. Esta reivindicación cristaliza tanto su voluntad de defender la revolución como de combatir contra la agresión baasista. El régimen se opondrá inmediatamente al renacimiento de los comités de barrios independientes que surgieron, más particularmente en la región afectada directamente por la guerra. Armará las sociedades islámicas y no los shoras en las empresas. Prohibe toda propaganda política en el Ejército y reprime los shoras de soldados.

En el desarrollo de la guerra aparecen cuatro fases:

1) La ofensiva irakí y la resistencia popular en el Jusistán, que pone fin a la penetración irakí en noviembre;

2) Un largo periodo de guerra de posiciones (entre otras cosas, debidas a las condiciones climáticas), durante la que se desencadena una lucha encarnizada en el seno del régimen de Teherán, entre el PRI por un lado, Bani Sadr y sus aliados muyahedines por otro. La hegemonía del clero chiíta en el aparato de Estado se refuerza. Los organismos de movilización militar de las masas pasan a ser controlados estrechamente, y se acentúa la represión contra los derechos democráticos (diciembre 1980-agosto 1981);

3) comienzo de la contraofensiva militar iraní, una vez reabastecido el ejército de material; este contraataque se apoya también en la utilización masiva de una infantería compuesta de combatientes muy jóvenes, encuadrados por los pasdarán. Se recuperan Abadan y Bostan. La región de Dezful y Jorramchar es liberada (septiembre 1981-junio 1982);

4) ofensiva iraní en el territorio irakí, en dirección a Basora; apertura de nuevos frentes en la montaña de Zagros, al norte del Jusistán. Las tropas irakíes abandonan lo fundamental del territorio iraní (julio 1982-febrero 1983). Sin embargo, siguen bombardeando las ciudades y las posiciones iraníes. Saddam Hussein se ve entonces obligado a formular propuestas de paz.

Frente a la guerra se presentan dos problemas cruciales para el gobierno iraní. ¿Cómo responder a una agresión militar que manifiestamente no era esperada? ¿Cómo canalizar un movimiento de masas suscitado por la necesidad de la defensa del país y de la revolución? La respuesta de los círculos dirigentes de la república islámica, a estas preguntas, viene determinada, por un lado, por las diferencias de orientación que se expresan en su seno, y por otro, por la constante preocupación de asegurar el control del movimiento de masas, acompañado de medidas represivas contra las fuerzas que se oponen a la política del PRI. Por ejemplo, muy pronto serán detenidos los muyahedines y fedayines que combaten en el frente; tratados de "saboteadores", algunos de los ellos serán ejecutados. Durante la tercera fase de la guerra se acentúa aún más la represión.

La dirección Jomeini reorganiza en primer lugar el ejército heredado del sha. Algunos oficiales abandonan la prisión. Los jefes militares reciben la bendición de las altas autoridades de la república islámica. Se impone la "disciplina militar", es decir la prohibición de cualquier organización de los soldados. Bani Sadr corteja al ejército, del que es el jefe formal. Intenta aliarse con él, con miras a los enfrentamientos con el PRI. Pero al mismo tiempo, la dirección Jomeini atribuye una función importante al ejército de los pasdarán. Estos ocuparán un lugar de primera fila en la organización de la defensa y posteriormente en la contraofensiva militar. Para canalizar el movimiento popular se crean los *basij* (comités de movilización), que servirán para reclutar y formar una milicia. Los *basij* se sitúan bajo el mando de los pasdaran. De la misma manera que los comités, al comienzo de la revolución, los *basij* atraen efectivamente a sectores de masas: trabajadores y jóvenes luchadores antiimperialistas. Sin embargo, debido al control estrecho que ejercen sobre ellos los pasdarán, y a las purgas políticas e ideológicas, se convierten en instrumentos de manipulación de las masas para llevar a cabo los proyectos del PRI. En este sentido, el ayatola Hachemi Rafsandjani declara: *«Esta guerra consolida nuestra república islámica».* En efecto, en nombre del esfuerzo de guerra y del combate contra el imperialismo, la dirección Jomeini reforzará las medidas de control de los trabajadores en las fábricas. Los pasdarán y otros no dejan de intimidar a los trabajadores, siempre que sea necesario. Esta política del régimen se acentúa tras el surgimiento de una serie de huelgas, a finales de 1980, y comienzos en 1981, en Teherán, Ispahán, Guilan, que acaban fracasando y son reprimidas. El paro, la dispersión del cuerpo central de la clase obrera del Jusitán, la coacción, harán finalmente que el movimiento obrero sufra un retroceso serio.

En el transcurso de 1981 y 1982 se extiende el descontento entre las masas, bajo el impacto de la crisis económica (paro masivo, inflación, etc.). La política del gobierno hacia los centenares de miles de personas desplazadas por la guerra suscita también una profunda insatisfacción. En el campo, poco a poco, «la mayoría de los aldeanos creen que la guerra con Irak es un conflicto que no tiene mucho sentido, que ha matado a sus queridos hijos». Poco a poco, el centro de gravedad de las preocupaciones de las masas se desplaza, desde la voluntad inicial de participar en la guerra y de apoyarla, a sus propias reivindicaciones y preocupaciones cotidianas. La participación en las "plegarias del viernes" disminuye, pese al esfuerzo del régimen por animarla. Esto expresa un incremento de la distancia entre el régimen y las masas, que había disminuido durante los primeros meses en la guerra.

Por supuesto, la dirección Jomeini dispone aún de cierto apoyo en sectores populares. La mezcla de represión y de distribución de ventajas materiales a amplios sectores ampobrecidos, debe tenerse en cuenta para comprender el sentido real de la participación en las manifestaciones organizadas por el régimen en apoyo a su esfuerzo de guerra. Por consiguiente, no puede insertarse un signo de igualdad entre estas manifestaciones de masas, el compromiso inicial efectivo en los *basij,* por parte de la juventud de las clases empobrecidas, y la profundización de la lucha de clases. Semejante enfoque tendería simplemente a poner en sordina la naturaleza de los órganos que encuadran a estos jóvenes, la orientación política global de la fracción del clero chiíta en el poder, los ataques repetidos contra las luchas de los trabajadores y campesinos, y la represión que golpea a todas las organizaciones que se reclaman del movimiento obrero y del socialismo, incluidas las que manifiestan su mayor servilismo para con el régimen: partido Tudeh, Feyadines (mayoritarios). Asimismo, no ver más que a un enemigo exterior llevaría a cerrar los ojos ante el enemigo interior, ante la dirección jomeinista, que pone en peligro la revolución y debilita así la capacidad de las masas para responder, mañana, a las nuevas ofensivas del imperialismo.

La contraofensiva y la política militar del PRI

El Ejército irakí, empantanado en una guerra que no cesa, se desmoraliza. Para los soldados irakíes, esta guerra aparece cada vez más como algo sin sentido, máxime cuando Saddam Husseim afirmó, al comienzo de 1982, que renunciaba a cualquier reivindicación territorial. Los efectos de la guerra son cada vez más notables en la

economía irakí. Se revisan a la baja o se aplazan numerosos proyectos de desarrollo económico. El descenso de los ingresos del petróleo es importante. Los gigantescos préstamos concedidos al régimen de Bagdad (unos 55.000 millones de dólares) han permitido, por supuesto, proseguir las operaciones militares, pero han facilitado también la aceleración de la inflacción (40%). Las pérdidas humanas en las filas irakíes aumentan rápidamente desde el comienzo de la contraofensiva iraní. Los prisioneros se cuentan por decenas de miles. Es las esferas dirigentes irakíes, se acentúa la presión para salir del atolladero en el que se han empantanado. En el seno de la dirección del partido Baas estallan las divergencias, como indican las dimisiones de más de un ministro.

La ofensiva en la región de Dezful, en marxo de 1982, marca la primera gran victoria militar iraní desde el comienzo de la guerra. El 30 de abril se inicia la "operación Jerusalén". Concluye con la liberación del sur del Jusistán y la de Jorramchar. Estas ofensivas son dirigidas siempre por elementos del ejército tradicional, de los pasdarán, y milicianos de los basij. El 20 de marzo de 1982, Jomeini anuncia que los alumnos de las escuelas, a partir de los 12 años, podían unirse también a las tropas combatientes.

Pero las destrucciones que comportan los ataques irakíes en Irán, la ocupación y finalmente los nuevos combates, son enormes. Ciudades enteras no son mas que ruinas.

En junio de 1982, Saddam Hussein, para encontrar una puerta de salida, temeroso de las repercusiones políticas internas de la prolongación de la guerra y de las derrotas, proclama un alto el fuego unilateral y retira las tropas de los territorios iraníes. Esta retirada se inicia el 20 de junio. Saddam Hussein afirma demagógicamente que esta retirada —que es casi total— viene motivada por la voluntad de Irak de combatir a las tropas de Israel que acaban de entrar en el Líbano. Rafsandjani responde reclamando el derecho de tránsito para los blindados iraníes a través de Irak, con el fin de ir a combatir a las tropas israelies en el Líbano. El 21 de junio, Jomeini declara: *«Debemos salvar a la nación irakí y a Irak, para poder salvar el Líbano».*

Así, políticamente, la dirección de la república islámica prepara su ofensiva militar en el territorio irakí. El 13 de julio se inicia la "Operación Ramadán", en dirección de Basora y después de Zaid. En setiembre-octubre, las posiciones irakíes se ven atacadas en la región de Abadan, en Mehran y también en Madali, que permite controlar una vía estratégica en dirección a Bagdad. En noviembre se lanza un nuevo ataque en el Norte de Jusistán, al oeste de Dezful. El costo humano de estas ofensivas es muy alto. La artillería irakí diezma las filas de una infantería en buena medida compuesta por jóvenes milicianos. El coste estrictamente financiero también es muy importante. El 13 de octubre de 1982, el Maylis adopta un aumento del presupuesto militar de 2.000 millones de dólares.

Irak, por su parte, bombardea las ciudades iraníes del Ilam, Jamdan, Jorramabad, Ajvas y la terminal petrolera de Karg. La dirección Jomeini expresa la intención de proseguir la guerra. Pero se niega a cualquier iniciativa política y diplomática seria con miras a debilitar y desarmar políticamente, a los ojos de las masas irakíes, al régimen de Saddam Hussein. Este último multiplica las "propuestas de paz" para tratar de presentar la guerra como un ataque chovinista iraní, dirigido contra las masas árabes por un líder religioso retrógrado. Saddam Hussein trata así de borrar las huellas de su agresión contra la revolución iraní.

Frente a esta ofensiva diplomática del poder irakí, Jomeini y sus partidarios oponen exigencias tales como el derrocamiento de Saddam Hussein y su procesamiento. Jomeini explica el objtivo político de la ofensiva: establecer en Irak una república islámica, liquidar el Partido Baas. Rafsandjani declara: *«No nos interesan el dinero ni las indemnizaciones de guerra. Si vemos que en nuestra vecindad el pueblo irakí, que en su 99% es musulmán, forma un régimen islámico, entonces existe incluso la posibilidad de que le ayudemos... Si permanece el partido Baas, o incluso si el régimen actual es sustituido por otros elementos del Este o del Oeste, entonces nosotros no queremos territorios, pero presionaremos para obtener nuestras indemnizaciones hasta el final».* Esta orientación refleja un profundo desprecio por las aspiraciones sociales y políticas, así como por los sentimientos nacionales de las masas irakíes. Jomeini no apoya una lucha de masas por el derrocamiento de Saddam Hussein con el fin de que los trabajadores y campesinos irakíes tengan la posibilidad de materializar sus voluntades. Les asigna un destino político a imagen y semejanza del de la República Islámica. Ali Jamenei, presidente de la República Islámica de Irán desde el 20 de octubre de 1981, presentó por lo demás al Imán como la autoridad religiosa suprema tanto de Irán como de Irak. Los dirigentes de la República Islámica, adversarios de las masas populares en Irán, no pueden ser capaces de buscar y encontrar un apoyo real por parte de los trabajadores y los campesinos de Irak contra su gobierno.

En Teherán, bajo los auspicios del gobierno, se constituye un Consejo Supremo de la Revolución Islámica (irakí), encabezado por el dirigente religioso integrista en el exilio Sayed Mohamed Bakhr Hakim. este consejo reúne a las fuerzas islámicas chiítas integristas, entre otras las del Partido Aldaawa. La dirección jomeinista lo convierte en representante de la "extensión de la revolución islámica" a Irak. Propone a las masas irakíes el mismo programa social y político que el del PRI, lo que no puede sino provocar el rechazo de los sectores más avanzados de la lucha contra el régimen dictatorial de Saddam Hussein. Este proyecto "revolucionario" de Jomeini, por consiguiente, no se apoya en las fuerzas que hoy luchan y se oponen a Saddam Hussein, como el Frente Patriótico Kurdo (coalición), el Partido Socialista Baasista o el Partido Comunista. Esta política, en un momento en que se tambalea la dictadura irakí, sólo puede reforzar la situación diplomática de Saddam Hussein y facilitarle la tarea en el frente interior.

Siria, que había prestado un apoyo fundamentalmente pasivo a Irán, pero que le había suministrado material de guerra para la ofensiva de Jorramchar, se vió obligada a plantearse un cambio de posición como consecuencia de las declaraciones de Teherán y de la primera oleada de ofensivas iraníes. Esto reflejaba una obligación más apremiante de tener en cuenta la gestión nacional árabe. Así, el 31 de mayo de 1982, Abdel Halim Jaddam, ministro de asuntos exteriores de Siria, anunciaba que su país dejaría de apoyar a Irán en caso de que el Gobierno de la República islámica decidiera invadir Irak. Explicaba: *«Si aprobamos el abandono de determinadas partes del territorio árabe, tendríamos que abandonar también Palestina».*

Arabia Saudí da inmediatamente un paso para aproximarse a Siria. uno de los puntos en litigio entre Irán y Siria es precisamente el apoyo prestado por Jomeini a Sayed Mohammed Bakhr Hakim, investido por el Imán con el poder de "velayat faguih" irakí. Finalmente, a la vista del profundo conflicto que tiene con el Partido Baas irakí, después de varios meses de vacilaciones, Siria, de común acuerdo con Libia, reitera su apoyo formal a Irán. Un Irán que, a su vez, denuncia conjuntamente a Washington y Moscú por la ayuda que prestan a Irak. En efecto, a partir de mediados de 1982, la URSS reanuda sus suministros de aviones Mig-25 y tanques T-72 a Irak. En revancha, Irán firma importantes contratos de armamento con Israel (al que suministra petróleo a bajo precio), Brasil, Italia y Corea del Norte.

La presión militar iraní es motivo de inquietud para el campo imperialista. Las potencias imperialistas temen una victoria completa de Irán, el hundimiento del gobierno de Saddam Hussein, su sustitución por un régimen análogo al de Teherán o incluso una situación de caos que comprometa sus intereses inmediatos. Esto es lo que preocupa particularmente al imperialismo francés. El control imperialista sobre la región resultaría más difícil, incluso si éste cuenta ya con la experiencia de tener que haber tratado con regímenes cuya profesión de fe antiimperialista, como por ejemplo Siria e Irak en el pasado decenio, eran tan radicales como el de Teherán. Las

fuerzas imperialistas, por consiguiente, no pueden favorecer esta salida. Es lógico, por tanto, que los Estados Unidos, además de Francia, se muestren dispuestos a apoyar a Irak y a reforzar sus posiciones en este país.

Este escenario —hipotético— de un hundimiento del régimen baasista bajo los golpes del ejército iraní, no puede ser el punto de partida de la toma de posición de los revolucionarios en el conflicto actual. Los auténticos intereses de las masas en Irán, y la posibilidad concreta para los trabajadores y los campesinos pobres de Irak de determinar por sí mismos su propio destino y reanudar sus mejores tradiciones en la lucha posterior a la "revolución nacional" de 1958, así como la oposición clara al contenido del programa social y político en cuyo nombre Jomeini dirige las operaciones militares, deben situarse en la base de una orientación revolucionaria.

Los revolucionarios y la guerra, hoy

La política militar iraní actual es coherente con el conjunto de las opciones de política exterior de Teherán. Son caracterizadas abusivamente como efectivamente antiimperialista, por parte del partido Tudeh o los Feyadines (mayoritarios), si bien no rebasan nunca los estrechos límites de los intereses de las esferas dirigentes de la República Islámica, y de las rivalidades regionales. El Partido Tudeh y los Fedayines (mayoritarios) insisten en el envío de algunos centenares de combatientes contra las tropas israelíes en el Líbano. Pero esto no puede borrar otros hechos. Desde el punto de vista político, los dirigentes del PRI han preferido aliarse, en el Líbano, con el grupo confesional conservador chiíta Amal, montado inicialmente por los servicios secretos libaneses para dividir a los palestinos, en lugar de aliarse con las fuerzas de la OLP. Le aconsejan públicamente combatir en dos frentes: contra Israel y contra el comunismo. Un consejo que Amal no necesitaba.

En distintos lugares del sur del Líbano se habían producido auténticas batallas entre la OLP y Amal. Durante la ofensiva israelí contra el Líbano, caracterizada por Jomeini como "diversión para hacer olvidar la guerra Irán-Irak", la opción de acentuar las ofensivas militares contra Irak no ha contribuido a obstaculizar la materialización de los proyectos imperialistas e israelíes en la región. Todo lo contrario. El esfuerzo desesperado de mediación de la OLP lo demuestra. El cierre, durante todo un periodo, de su embajada en Irán, es también, a su manera, una prueba. Finalmente, cuando la presión de las masas iraníes hizo que se suspendieran, en 1979, los suministros de petróleo a Israel, su reanudación, en 1982, muestra el doble lenguaje de la política del PRI.

Los estrechos lazos con la dictadura militar pakistaní, "defensor del Islam", que se ha comprometido ante todo, tras la visita del ministro del Interior iraní Ali Akbar Nateq-Kuri, en enero de 1983, a rechazar a todos los prófugos e "hipócritas" (los muyahedines) que intentan atravesar la frontera pakistaní; el acercamiento de Turquía y el incremento considerable de los intercambios comerciales con este país (que se han multiplicado por 40 desde 1978), así como el silencio mantenido en torno al papel de este régimen en el dispositivo militar imperialista en toda la región (en enero de 1982, el ministro de Comercio iraní se contentó con subrayar la "ausencia de una atmósfera islámica en Estambul"); el apoyo prestado a los sectores más reaccionarios de la resistencia afgana, o incluso a las fuerzas integristas más conservadoras de los Estados del Golfo; todo ello revela también la "naturaleza antiimperialista" de la política de Jomeini. Finalmente, la orientación de la República Islámica, que estimula las divisiones entre sunitas y chiítas en esta parte de Oriente Medio, se solapa con la vieja táctica imperialista de agudizar conflictos y competencias en una región "balcanizada" a discreción. De este modo, el proselitismo chiíta amenaza con convertirse en un fuerte obstáculo para el combate antiimperialista y anticapitalista de las masas.

Las declaraciones grandilocuentes contra el imperialismo vienen acompañadas sistemáticamente de virulentas denuncias del comunismo y del marxismo. Y no es por azar que la República Islámica se haya apresurado a denunciar los artículos 5 y 6 del Tratado de 1921 con Rusia, que preveían la posibilidad de una acción militar rusa *«en el caso de que una tercera potencia tratara de llevar a cabo una política de usurpación mediante una intervención armada en Persia»*. Pero estas declaraciones no son mas que una pura veleidad, no comportan ninguna medida concreta en el terreno socioeconómico para romper los lazos de dependencia con respecto al imperialismo. Es más, los trabajadores y campesinos pobres, que son los únicos que tienen un interés objetivo importante en dirigir y llevar a cabo un combate antiimperialista, son reprimidos con violencia.

En efecto, en el transcurso de la guerra se ha acentuado la represión. Incluso el partido Tudeh y los Feyadines (mayoritarios) son fuertemente atacados en el periódico del PRI, Joumhouri Eslami, el 22 de agosto de 1982, a causa de su reticencia, en aquel momento, a apoyar la política militar del régimen. Los dirigentes del PRI les reprochaban que daban a entender que la continuidad de la guerra empujaba a Irak aún más a los brazos de Arabia Saudí, y que imponía unos sacrificios enormes a las masas, y que el descontento popular podía hacerle el juego, mañana, a la contrarrevolución. Aumenta las detenciones de sus militantes. Los bombardeos y los ataques militares contra el Kurdistán se intensifican, entre abril y diciembre de 1982.

La prosecución de la guerra y los objetivos que se asignan los dirigentes del PRI no forman parte de una política de defensa de la revolución iraní. Viene motivada por la voluntad de mantener su control sobre el movimiento de masas, de justificar todas las restricciones a los derechos democráticos elementales, y de bloquear la actividad de los trabajadores, consolidando su aparato militar y represivo y, sobre todo, tratando de aplazar una serie de problemas sociales cada vez más explosivos. Estos van desde la crisis en el campo, desde el paro, la penuria de bienes de consumo, a la cuestión espinosa de los dos millones de refugiados.

La prolongación de la guerra permite consolidar la posición de toda una capa de jóvenes oficiales, que avanzaron rápidamente a causa de los profundos cambios que hubo en el seno del ejército. Mañana, esta nueva generación de oficiales podrá manifestar algunas pretensiones en el terreno político. Se produce cierta fusión entre el ejército y los pasdarán. A comienzos del mes de enero de 1983, Jomeini, en un discurso, indica que ambos cuerpos "no debían concebirse como entidades separadas".

Cerrar los ojos ante el conjunto de esta política, de sus causas y de sus consecuencias, en nombre de una "prioridad del apoyo al combate antiimperialista", equivale a apoyar políticamente al régimen islámico y a subordinar las reivindicaciones de las masas a su dirección de la guerra. Los acontecimientos interiores de Irán, a partir de septiembre de 1980 —fundamentalmente la consolidación de las instituciones del régimen islámico, con sus consecuencias para el movimiento de masas, así como la política militar del régimen islámico— modifican las tareas de los revolucionarios ante la guerra.

Deben rechazar con firmeza la orientación político-militar del gobierno Jomeini. Declaran la necesidad de un cese inmediato de los combates. La respuesta política a Saddam Hussein debe ampliarse para desenmascarar el conjunto de sus proyectos contra la revolución iraní. De este modo, las masas de Irán estarán preparadas para rechazar cualquier eventual nueva agresión irakí, y que el régimen de Bagdad será debilitado más eficazmente.

Al mismo tiempo, los revolucionarios avanzarán, frente a la política del régimen de la República Islámica, el conjunto de reivindicaciones de las masas explotadas y oprimidas, situándolo en el centro de su propaganda y de su agitación. Hay que impedir que las masas iraníes ganen la guerra perdiendo la revolución. En los países imperialistas, entre otros en Francia y en los Estados Unidos, los revolucionarios denunciarán la política de sus gobiernos, que multiplican las maniobras para reorganizar su dominio en la región.

VI. LA ETAPA ACTUAL DE LA REVOLUCION

A su manera, la adhesión masiva al combate contra la iniciativa contrarrevolucionaria de Irak confortó al régimen de la República Islámica. Actualmente, numerosos indicios muestran la oposición de amplios sectores de masas a su política y sus opciones militares. Empiezan a ser perseguidos los desertores e insumisos. Se prometen compensaciones financieras a las familias a cambio del alistamiento de sus hijos. El primer ministro, Hossein Mussavi, intenta enrolar a una parte del personal de la Administración pública. Jomeini ha hecho promulgar leyes que convierten el voluntariado en un deber religioso y en una prioridad sobre todas las demás actividades.

Las rentas del petróleo aflojan las ligaduras de la crisis económica. Las exportaciones ascienden a aproximadamente 1,5 millones de barriles diarios, mientras que entre junio y septiembre de 1980 no rebasaban los 500.000. El precio del barril es inferior al establecido por la OPEP. Para obtener mercados suplementarios podría rebajarse incluso aún más este precio. A finales de 1982,la venta petrolera mensual se aproxima a los 1.500 millones de dólares. La deuda exterior disminuye rápidamente. Tras un periodo de racionamiento más estricto, aumentan las posibilidades de distribuir los ingresos a través de los múltiples canales del régimen, con los privilegios y la corrupción que de ahí se deriva. Sin embargo, el estado de guerra estimula la inflación, crea cuellos de botella en los proyectos de construcción de viviendas populares o de infraestructuras en el campo. Se hace notar la necesidad de reducir los gastos administrativos, lo que hace entrar en crisis el sistema de corrupción y agudiza las fricciones en el seno del clero. La crisis socioeconómica refuerza la ofensiva de las fracciones que quieren tranquilizar a los comerciantes y empresarios.

Se reafirma la "islamización" de la legislación. La nueva asamblea de expertos, elegida en diciembre de 1982, está compuesta únicamente por 84 *molas*. El parlamento promulga el 31 de mayo de 1982 la nacionalización del comercio exterior. Sin embargo, la primera decisión sobre este tema, del 26 de noviembre de 1981, había sido suspendida por el Consejo de Vigilantes. De nuevo, el 1º de junio de 1982, este mismo Consejo —en el que Jomeini posee una autoridad indudable— declaraba que esta ley era "contraria al Islam". Los proyectos y las leyes de nacionalización del comercio exterior, sin embargo, dejan la comercialización en manos del bazar, y las centrales de compras son paritarias (ministerio tutelar y principales importadores privados del sector). Asimismo, en enero de 1983 el Consejo de Vigilantes emite su veto contra la ley adoptada por el Parlamento, que preveía la confiscación de bienes de los prófugos. El Consejo hizo saber que dicha ley era "contraria al Islam" y a dos artículos de la Constitución. En esta ocasión, Jomeini increpó a los diputados, indicándoles que no debían votar leyes que podía rechazar el Consejo de Vigilantes.

Estos conflictos reflejan las contradicciones exacerbadas entre los intereses de distintos sectores y fracciones del clero chiíta y sus aliados burgueses. Las acusaciones que se lanzan mutuamente, en estos momentos, los jerarcas chiítas, en relación con los "excesos" en la represión, constituyen otra manifestación de la crisis de dirección del régimen.

La clase obrera ha perdido una serie de las conquistas del comienzo de la revolución. Sus condiciones de vida material se deterioran. Ya no dispone de organismos propios. Los shoras han quedado reducidos a una existencia formal, si es que siguen existiendo. En septiembre de 1981 se suspendieron legalmente las elecciones a los shoras. Las sociedades islámicas han tomado la delantera. Han permitido la liquidación de los shoras y han agrupado en su seno tanto a representantes en los antiguos sindicatos oficiales como a elementos atrasados. En los pocos casos en que estas organizaciones podían traducir aún la presión obrera, a través de elementos chiítas populistas o miembros del Partido Tudeh o Feyadines, se las reprime. Sus dirigentes son despedidos. Estas sociedades islámicas no pueden servir para la reconstrucción y el desarrollo de un movimiento obrero independiente. Su función consiste en ayudar a la dirección de la empresa en la producción, en denunciar a los "contrarrevolucionarios" y en discutir las reclamaciones de los trabajadores.

Finalmente, el proyecto de ley sobre el trabajo, que debe sustituir la ley de mayo de 1980 (que modificaba algunos aspectos de la ley establecida por el régimen imperial y que seguía en vigor), ilustran la idea fundamental del PRI en torno a la organización de las relaciones entre los trabajadores, tomados de uno en uno, y los patronos. Quedarán reducidas a simples contratos personales. La organización sindical no encuentra su puesto en la "política antiimperialista" de Jomeini y de sus acólitos. Son muchos los trabajadores, incluso los que se adhieren al régimen, que se oponen a este proyecto de ley. A pesar de la represión, se han desencadenado huelgas para protestar contra dicha ley. Esto ilustra el conflicto latente entre las aspiraciones de los trabajadores y toda la política del régimen.

Entre los campesinos, la ocupación y la atribución de tierras han creado una situación nueva. Pero la ley de reforma agraria que adoptó finalmente el Parlamento no profundiza en modo alguno las conquistas de los campesinos. Fundamentalmente prevé que los terratenientes deberán vender tierras si se consideran demasiado extensas. Entonces serán distribuidas entre los campesinos, bajo los auspicios de los Comités que reunen a los pasdarán, jueces, propietarios y campesinos. El contenido de esta ley, además de suministrar la base legal para arrebatar las tierras a los campesinos que estos se habían apropiado en los primeros meses de la revolución, está destinado también a liquidar todas las estructuras del tipo comités de aldea (comités campesinos), para sustituirlos por estructuras gubernamentales locales. En el periodo actual, las reivindicaciones campesinas se refieren, entre otras cosas, a los precios de venta de los productos comprados por los organismos del Estado y al precio de compra de los productos manufacturados, al precio de las tierras alquiladas por instituciones de la Iglesia chiíta. En estos momentos, la actividad social y política de los campesinos es muy limitada.

Prosigue la guerra civil entre el gobierno y los combatientes kurdos. A finales de 1982, el jefe de Estado Mayor, Sherazi, amenazó a los kurdos con lanzar contra ellos a todo el ejército iraní. Para el régimen islámico, la resistencia del pueblo kurdo sigue siendo un obstáculo importante para la estabilización de su poder.

Entiende que la resistencia del pueblo kurdo puede abrir la vía a nuevos impulsos del movimiento de masas. La amplitud de fuerzas que consagra a combatir a los peshmergas lo confirma. La región del Turcomansarah está ocupada. En Aserbachán, so pretexto de poner en vereda a los partidarios del ayatola Chariat Madari (acusado de haber participado en "la conspiración" del antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Sadegh Gobdzadeh) se ha reforzado la presencia de las tropas de choque del poder de Teherán.

El movimiento de masas, por consiguiente, ha dado un enorme paso atrás. La dirección Jomeini, para llevar a cabo sus proyectos de reorganización y estabilización de un Estado capitalista dominado, dependiente del imperialismo, ha asestado golpes muy importantes al movimiento de masas. La perpetuación de su poder no puede sino agravar los peligros que amenazan al porvenir de la revolución.

Pero el marasmo social y económico, las experiencias de lucha y de movilización acumuladas por las masas en un pasado aún reciente, las capacidades que han demostrado ya para retomar la iniciativa, podrían desembocar en un relanzamiento de su actividad si se produce una apertura política. Los conflictos entre clanes, que dividen a los círculos dirigentes de la República Islámica, la incertidumbre en torno a la sucesión del Imán, la crisis de dirección del régimen, todo esto permite augurar nuevas convulsiones institucionales y políticas. En esta ocasión, las fuerzas centrífugas que

actúan en el país podrían manifestarse con vigor, y podrían reaparecer los recursos de que dispone aún la revolución.

El imperialismo y las fuerzas restauracionistas, así como algunos sectores del Ejército, no se han cruzado de brazos. Si bien no constituyen el único peligro para la revolución, podrían aprovechar una eventual crisis profunda que viniera acompañada de una apatía de las masas desmoralizadas por una sucesión de derrotas parciales durante un periodo bastante largo. Entonces, la revolución iraní podría quedar gravemente derrotada durante mucho tiempo.

Las tareas centrales de los revolucionarios

Los revolucionarios, en el periodo actual, desarrollan su combate por la defensa de la revolución iraní, tanto frente a las amenazas del imperialismo y sus aliados como a las del régimen de la República Islámica. Rechazan cualquier separación entre la lucha contra todas las maniobras del imperialismo y sus agentes, y la defensa encarnizada de todos los explotados y oprimidos contra el gobierno de Teherán. Las amenazas imperialistas no cambiarán las leyes de la lucha de clases en Irán. Todo combate efectivo contra el imperialismo, por la ruptura de los lazos de dependencia de Irán, conduce necesariamente a exacerbar las contradicciones de clase. Este combate sólo puede ser eficaz si se apoya en la satisfacción de las necesidades de los obreros y campesinos pobres, y en la ampliación de todos sus derechos.

El curso mismo de la revolución ha demostrado que las reivindicaciones que forman parte de la revolución democrático burguesa (reforma agraria, derechos democráticos, autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, independencia nacional...) no pueden ser satisfechas por el régimen de la República Islámica. Sólo el avance hacia la revolución socialista, sólo una profundización del proceso de revolución permanente, pueden permitir la conquista y consolidación de estas reivindicaciones.

Los marxistas revolucionarios se niegan a encerrar las reivindicaciones de las masas en la jaula de la política militar actual del régimen Jomeini. Sitúan el conjunto de su orientación política frente a la guerra en el marco de la lucha por la conquista de la independencia política y organizativa de los trabajadores y sus aliados.

No renuncian a defender las libertades democráticas pisoteadas, ni las reivindicaciones sociales y económicas de las masas negadas por las fuerzas del PRI, so pretexto de que esto significaría enfrentarse con el Gobierno y de que las condiciones políticas no están suficientemente maduras para sustituirlo por un Gobierno obrero y campesino. Rechazan este razonamiento tan propio de los estalinistas.

Por supuesto, toda lucha sin concesiones a favor de estos derechos y aspiraciones choca con el régimen y el Gobierno de la República islámica. Sin embargo, la no satisfacción de las reivindicaciones de la revolución democrática las sitúan en un primer plano, en el terreno político. Es a partir de esta constatación que los marxistas revolucionarios deben señalar el camino que permitirán que sean las propias masas las que derriben el régimen.

Para ello, avanzarán como consigna inmediata el de la "Asamblea Constituyente Democrática" en todo el Estado iraní. Para las minorías nacionales defenderán el derecho de constituir Asambleas Constituyentes soberanas. Los combatientes kurdos ya han asumido esta reivindicación. El grado actual de movilización y autoorganización de las masas, y la debilidad de las fuerzas revolucionarias entre los trabajadores, hacen que la consigna del "Gobierno obrero y campesino" sea aún una consigna de propaganda.

La consigna de "Asamblea Constituyente Democrática" se relacionará con una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas en el terreno democrático, social y económico. Estas consignas indican a los trabajadores las tareas que deberían estar objetivamente en el orden del día de esta Asamblea Constituyente, para que respondiera sus aspiraciones y sus necesidades. Esta consigna, así como la defensa de un programa social y económico, son el medio para hacer converger en un movimiento conjunto a todos los trabajadores y campesinos que se han lanzado a la lucha contra la dictadura del sha, por cambiar radicalmente sus condiciones de vida, y a todos aquellos (entre otros, las minorías nacionales) que ven en esta perspectiva la posibilidad de imponer sus derechos frente al régimen opresor de la República islámica.

Los marxistas revolucionarios vincularán a la batalla por la consigna de "Asamblea Constituyente Democrática" la reivindicación de disolución de los aparatos represivos heredados del antiguo régimen, así como la liquidación de las instituciones represivas del régimen de la república islámica. Los trabajadores, los campesinos, los militantes antiimperialistas no han luchado por derribar el ejército del sha para sustituirlo por un nuevo Ejército del PRI (pasdarán), por liquidar la SAVAK para sustituirla por la SAVAMA.

Todas sus experiencias demuestran que la fuerza de la revolución contra sus enemigos exteriores e interiores se encuentra en el armamento de las masas.

En la guerrra civil entre los kurdos y las tropas de la República Islámica, los marxistas revolucionarios apoyan incondicionalmente a los combatientes peshmergas, hasta que sean satisfechas sus reivindicaciones. En el conjunto del Estado iraní, defienden sistemáticamente los derechos lingüísticos y culturales de las minorías nacionales, su derecho a la autodeterminación, incluida la independencia. Este derecho no puede subordinarse en modo alguno a los imperativos en la guerra entre Irán e Irak.

La defensa de los derechos democráticos, de asociación y de expresión, de las masas trabajadoras, está estrechamente relacionada con el esfuerzo por la construcción de un movimiento obrero independiente y el relanzamiento futuro de sus organismos autónomos (shoras y consejos de aldea) que forman parte de la herencia revolucionaria de las masas iraníes. Los marxistas revolucionarios no oponen en modo alguno, frente a la autoorganización de las masas, la reivindicación democrática de una Asamblea Constituyente. Frente a la represión masiva, la batalla por la liberación de todos los presos que lucharon contra la dictadura del sha se sitúa en un primer plano. Exigirán asímismo la suspensión de todas las restricciones contra las libertadas culturales y religiosas, así como la separación entre Iglesia y Estado.

Los revolucionarios deben proponer un plan obrero y campesino que permita contrarrestar los efectos económicos y sociales de la crisis, responder a las necesidades urgentes de millones de refugiados, dar a los campesinos los medios técnicos y financieros para relanzar la producción agraria a un nivel superior. Los ingresos del petróleo deben destinarse prioritariamente a la realización de este Plan.

Basándose en la tradición de lucha y organización de los trabajadores, los revolucionarios concentrarán sus esfuerzos en el estímulo de todos los elementos que favorezcan una reorganización del movimiento obrero en las fábricas, en torno a los comités de lucha, las comisiones obreras, etc. Lo harán con motivo de las luchas en torno a las reivindicaciones inmediatas (salarios, primas, condiciones de trabajo), así como en torno a los movimientos de resistencia frente a las distintas leyes que tienden a negar el derecho a la actividad sindical por parte de los trabajadores en las empresas. Puede desarrollarse la propaganda en torno a la huelga general, para preparar un relanzamiento futuro a una escala más amplia, de la acción de masas.

La vigilancia contra todos los intentos sediciosos del imperialismo sigue estando en el orden del día. Devolviendo las esperanzas a las masas trabajadoras, respondiendo a sus necesidades, éstas estarán más dispuestas a desarrollar el combate antiimperialista.

El movimiento obrero internacional debe prestar su apoyo a los obreros y campesinos iraníes, a los combatientes de las minorías nacionales, en su lucha por relanzar la revolución iniciada en 1979. Centrará este apoyo en torno a las siguientes consignas:

Ninguna intervención imperialista contra la revolución iraní.

Defensa de las luchas por los derechos democráticos de las masas iraníes. □

